CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE FEDERICO DE CARVAJAL PEREZ

Sesión Plenaria núm. 52

celebrada el lunes, 5 de marzo de 1984

ORDEN DEL DIA (continuación)

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- **De la Comisión de Educación y Universidades, Investigación y Cultura en relación con el proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 98, de 28 de febrero de 1984).**

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

	Página
Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (continuación).	2574
<i>Se rechazan las enmiendas números 2.836, 2.837, 2.838, 2.839, 2.469, 2.470, 2.471, 318, 319, 320, 519, 185, 186, 187, 188, 1.132, 2.443, 406, 2.695, 109, 481, 89, 1.142, 366, 1.706, 38, 172, 514, 2.761, 916, 917, 508, 564, 37, 565, 520,</i>	

566, 521, 912, 504, 2.228, 96, 234, 492, 2.185, 2.237, 653, 1.127, 501, 360, 1.925, 1.626, 1.926, 1.927, 2.224, 91, 383, 2.233, 538, 2.174, 2.226, 94, 232, 4.233, 4.234, 4.235, 4.236, la del señor Fernández Rozada, las números 1.708, 35, 174, 2.763, 1.120, 922, 30, 229, 923, 227, 2.448, 411, 1.611, 2.969, 1.108, 369, 525, 102, 2.444, 407, 2.956, 482, 90, enmienda del señor Herrero González, enmiendas del señor Jaramillo Rodríguez, las números 495, 2.188, 2.240, 657, 1.130, 1.913, 1.909, 1.910, 1.117, 1.876, 378, 421, 2.963, 533, 2.277, 2.537, 2.538, 2.539, 2.540, 3.196, 3.197, 3.198, 2.389, 2.541, 1.918, 1.919, 1.850, 1.851, 1.852.

El señor Arespacochaga y Felipe interviene para una cuestión de orden. Le contesta el señor Presidente.

Se rechazan las enmiendas números 3.604, 3.605, 260, 261, 265, 408, 483, 259, 262, 1.628, 225, 502, 887, 936, 244, 934,

943, 940, 245, 528, 422, 2.177, 2.229, 534, 235, una del señor Olano Gurriarán, las números 491, 2.236, 652, 1.126, 2.961, 359, 3.625, 2.223, 661, 510, 524, 497, 356, 1.622, 658, 3.900, 2.960, 950, 2.438, 536, 237, 2.959, 532, 953, 499, 358, 1.624, 2.222, 660, 381, 506, 2.190, 2.694, 518, 2.313, 98, 954, 2.637, 1.704, 1.619, 1.116, 1.154, 377, 2.429, 32, 513, 2.965, 1.122, 1.157, 960, 490, 2.183, 2.235, 258, 1.125, 971, 1.042, 962, 529, 1.140, 362, 531, 503, 2.175, 233.

El señor Aguiriano Forniés interviene con relación con la votación. Le contesta el señor Presidente.

Se aprueba el título de la Ley, la Exposición de Motivos y el Título Preliminar.

	Página
Título I	2587

Después de unas observaciones del señor Presidente, el señor Agudo Calleja defiende sus enmiendas. Defiende también sus enmiendas el señor Aguilera Bermúdez. Para un turno en contra hace uso de la palabra el señor Bayona Aznar. Seguidamente interviene el señor Fernández Fernández-Madrid. El señor Aínsa Escartín contesta al señor Bayona Aznar y defiende sus enmiendas. Seguidamente defienden las suyas los señores Alarcón Molina, Alonso Bar, Alvarez de Eulate Peñaranda y Alvarez-Cascos Fernández, al que contesta el señor Moreno Franco. A continuación defienden sus enmiendas los señores Alvarez Ruiz de Viñaspre, Amat de León Guitart, Añón Lizaldre y Arespacochaga y Felipe, al que contesta el señor Bayona Aznar. Hace uso de la palabra para defender sus enmiendas el señor Arias Cañete.

Se suspende la sesión.

Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta de la tarde.

El señor Baselga García-Escudero defiende sus enmiendas. Hace uso de la palabra el señor Presidente. Defienden sus enmiendas los señores Bautista de la Torre, Blanco-Rajoy Martínez-Reboredo, Blesa Rodríguez, Iglesias Marcelo, Bolea Foradada, Bosque Hita, Cacharro Pardo y Calderón Llamas. El señor Fernández Fernández-Madrid defiende las enmiendas del señor Calzada Hernández. Defiende sus enmiendas el señor Cremades Mellado. Para turno en contra interviene el señor Moreno Franco. Defienden sus enmiendas los señores Cueto Sesmero, Cholbi Diego, Díaz Berbel, Díaz Mantis, Escutín Monfort, Fernández Fernández-Madrid y Fernández-Piñar Afán de Ribera.

Se suspende la sesión.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL DERECHO A LA EDUCACION (continuación)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Continuamos con el ejercicio; espero que los señores Senadores no tengan agujetas en el brazo derecho. (Risas.)

Enmiendas del Senador don Francisco Cacharro Pardo. (Pausa.) No está en la Cámara. Las votaremos separadamente.

Enmienda 2.836.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 104; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.837.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 104; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.838.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 104; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.839.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 104; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.469.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.470.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.471.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmiendas del señor Calderón Llamas.

El señor CALDERON LLAMAS: Pido votación separada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Enmienda 318.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Las enmiendas números 107 y 39 han sido retiradas.
Enmienda 319.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 320.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 519.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 185.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las enmiendas números 522 y 99 han sido retiradas.
Enmienda 186.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 187.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 188.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 47; en contra, 107; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 908 ha sido retirada.
Enmienda 1.132.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 115; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor CALDERON LLAMAS: La enmienda 1.132 la había retirado.

El señor PRESIDENTE: Si lo hubiera dicho S. S. antes, no la habríamos votado.

El señor CALDERON LLAMAS: Es exactamente igual, lo digo para su conocimiento.

El señor PRESIDENTE: Que conste en acta que, aunque ha sido votada, había sido retirada anteriormente por el señor Calderón.

Señor Fernández Fernández-Madrid, vamos a votar las enmiendas que S. S. tiene presentadas, que en principio correspondieron al señor Calzada y las propias de su señoría.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Pido votación de todas por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández. Enmienda 2.443.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 116; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 406.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 116; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 2.695.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 116; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 109.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 116; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 481.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 116; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 89.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 116; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1.142.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 115; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 366.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 115; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.706.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 117; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 38.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 117; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 172.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 117; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 514.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 117; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.761.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 117; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 1.118 está retirada. Enmienda 916.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 117; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 917.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 117; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Entramos en la votación de las enmiendas del señor Cremades. Señor Cremades, ¿las votamos conjunta o separadamente?

El señor CREMADES MELLADO: Agrupadas.

El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas 508, 569, 37, 565, 520, 566, 521 y 912. Las demás han sido retiradas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Entramos en la votación de las enmiendas del señor Cueto. Señor Cueto, ¿las votamos conjunta o separadamente?

El señor CUETO SESMERO: Separadas.

El señor PRESIDENTE: Enmienda 504.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.228.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 96.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 234.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Entramos en la votación de las enmiendas del señor Cholbi. Señor Cholbi, ¿las votamos conjunta o separadamente?

El señor CHOLBI DIEGO: Separadas.

El señor PRESIDENTE: Enmienda 492.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.185.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.237.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 653.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.127.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Entramos en la votación de las enmiendas del señor Díaz Berbel. Señor Díaz Berbel, ¿las votamos conjuntamente o por separado?

El señor DIAZ BERBEL: Por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Enmienda 501.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 360.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.925.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.626.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.926.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.927.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.224.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 91.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 383.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 52; en contra, 119; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. El señor Díaz Mantis tiene dos enmiendas, ¿las votamos conjuntamente o por separado?

El señor DIAZ MANTIS: Por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Enmienda 2.233.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 538.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Entramos en la votación de las enmiendas del señor Escuin Monfort. Señor Escuin Monfort, ¿las votamos conjuntamente o por separado?

El señor ESCUIN MONFORT: Por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Enmienda 2.174.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.226.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 94.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 232.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera. (Pausa.) Al no encontrarse en la sala, votamos sus enmiendas separadamente.

Enmienda 4.233. Pasamos a votarla.

Efectuada la votación, fue rechazada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.

Votamos la enmienda 4.234.

Efectuada la votación, fue rechazada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.

Votamos la enmienda 4.235.

Efectuada la votación, fue rechazada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.

Votamos la enmienda 4.236.

Efectuada la votación, fue rechazada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.

Pasamos a votar las enmiendas del señor Fernández Rozada. Señor Fernández Rozada, ¿quiere que las votemos conjuntamente o por separado?

El señor FERNANDEZ ROZADA: Agrupadas, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas del señor Fernández Rozada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 55; en contra, 121; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas del señor García Royo. ¿Quiere que las votemos conjuntamente o por separado?

El señor GARCIA ROYO: Separadas, por favor.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 1.708.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 121; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 35.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 174.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

¿La enmienda 516 ha sido retirada? (Asentimiento.)

Votamos la enmienda 2.763.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 1.120.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 922.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La enmienda 920 ha sido retirada.

Votamos las enmiendas del señor Nieto. Como no está en la Cámara, las votamos por separado.

Sometemos a votación la enmienda número 30.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 229.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Rechazada. Enmienda 923.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Rechazada.

Señor Guerra Zunzunegui, ¿votamos sus enmiendas agrupadas o separadamente?

El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Agrupadas.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Votamos las enmiendas del señor Guerra Zunzunegui.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señor Guimerá, ¿cómo votamos sus enmiendas?

El señor GUIMERA GIL: Separadamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Votamos la enmienda número 2.448.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda número 411.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda número 1.611.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda número 2.969.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.108.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 1.147 ha sido retirada. Digo el número de las retiradas por si acaso nos hemos equivocado, para que nos puedan corregir. Votamos la enmienda número 369.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Señor Gurriarán, ¿votamos sus enmiendas por separado o agrupadamente?

El señor GURRIARAN CANALEJAS: Agrupadas.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Votamos las enmiendas 525 y 102, porque las demás han sido retiradas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Señor Hens, ¿separada o agrupadamente?

El señor HENS TIENDA: Por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Votamos la enmienda número 2.444.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Rechazada. Enmienda número 407.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 2.956.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda número 110 fue retirada. Votamos la enmienda número 482.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Sometemos a votación la enmienda número 90.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 1.143 fue retirada.

Señor Herrero González, ¿sus enmiendas se pueden votar agrupadamente o han de votarse por separado?

El señor HERRERO GONZALEZ: Agrupadamente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Están retiradas las enmiendas 2.970 y 370. Votamos el resto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 121; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Señor Jaramillo, ¿votamos sus enmiendas agrupada o separadamente?

El señor JARAMILLO RODRIGUEZ: Agrupadamente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La enmienda 655 ha sido retirada. Votamos las restantes.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 121; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Señor Jiménez Hidalgo, ¿votamos sus enmiendas agrupadamente o por separado?

El señor JIMENEZ HIDALGO: Por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 495.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 121; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Pasamos a votar la enmienda 2.188.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 121; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos a continuación la enmienda 2.240.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 121; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Sometemos a votación la enmienda 657.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 121; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Pasamos a votar la enmienda 1.130.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 56; en contra, 121; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. ¿Señor Lafuente? (Pausa.) No está presente. Sometemos a votación la enmienda 1.913.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda número 230 fue retirada. Votamos a continuación la enmienda 1.909.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Pasamos a votar la enmienda 1.910.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Vamos a votar la enmienda 2.242.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 930 ha sido retirada. Pasamos a votar la número 3.902.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Sometemos a votación la enmienda 2.241.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Pasamos a votar la enmienda 2.874.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 120; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 1.915 fue retirada.

Señor López Hueso, ¿cómo quiere que se voten sus enmiendas?

El señor LOPEZ HUESO: Separadamente, señor Presidente, porque creo que se van a admitir casi todas. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: La Presidencia felicita al señor López Hueso porque, evidentemente, mira la vida con mucho más optimismo que el Presidente. (Risas.) Se pone a votación la enmienda número 1.705.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Se pone a votación la enmienda número 355.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Se pone a votación la enmienda número 1.620.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Se pone a votación la enmienda número 2.312.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Se pone a votación la enmienda número 2.897.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 1.117.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda 1.155 fue retirada.
Se pone a votación la enmienda número 1.876.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 378.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señor López Hueso, siento que el Grupo de enfrente la haya defraudado de esa manera. (Risas.)

El señor LOPEZ HUESO: Muchas gracias, señor Presidente, otra vez será. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señora Lovelle, ¿cómo quiere que se voten sus enmiendas?

La señora LOVELLE ALEN: De las tres, la número 533 separada y las otras dos juntas. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación las enmiendas números 421 y 2.963.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se pone a votación la enmienda número 533.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 122; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señor Llorens, ¿cómo quiere que se voten sus enmiendas?

El señor LLORENS BARGES: Señor Presidente, voy a solicitar votación por separado; sin embargo, como ayer anuncié a la Presidencia que iba a retirar varias enmiendas y se me olvidó consignarlas, lo hago ahora, si me lo permite la Presidencia.

El señor PRESIDENTE: Con mucho gusto.

El señor LLORENS BARGES: Retiro la 931...

El señor PRESIDENTE: Es curioso, pero no viene en la relación. La daremos por retirada.

El señor LLORENS BARGES: Mejor que mejor.
Retiro asimismo las números 2.958, 2.278, 2.281, 2.390, 3.199, 2.388 y 2.391.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens. Entramos a votar la enmienda 2.277.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la enmienda 2.537.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 2.538.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 2.539.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 2.540.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 3.196.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 3.197.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 3.198.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 2.389.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Pasamos a la enmienda 2.541.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.918.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.919.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 1.850.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.851.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda 1.852.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor ARESACOCHAGA Y FELIPE: Para una cuestión de orden, señor Presidente.

Nos parece que no se está levantando bien la mano. Nosotros no decimos nada, pero rogamos que los que estén votando, voten; porque, si no, exigiremos contar.

El señor PRESIDENTE: Señor Secretario, haremos recuento cada vez, y, si algún señor Senador no levanta la mano, que no se cuente su voto.

Señor Macías, tiene dos enmiendas, la 3.604 y la 3.605. ¿Cómo quiere que se voten?

El señor MACIAS SANTANA: Agrupadamente, Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Bien. Votamos las enmiendas 3.604 y 3.605.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 124; abstenciones una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Señor Marqués López, ¿cómo desea que votemos sus enmiendas?

El señor MARQUES LOPEZ: Agrupadas todas, señor Presidente, excepto las números 262, 259 y 2.957.

El señor PRESIDENTE: La enmienda número 2.957 la tengo como retirada.

El señor MARQUES LOPEZ: Perdón, señor Presidente, es la enmienda 1.628.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar agrupadamente las enmiendas 260, 261, 265, 408 y 483.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 124; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos la enmienda 259.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 124; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 262.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 124; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 1.628.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. El señor Márquez y Cano tiene dos enmiendas, la 225 y la 502, pues las demás han sido retiradas. ¿Cómo desea que se voten?

El señor MARQUEZ Y CANO: Agrupadas, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas 225 y 502.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 124; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. El señor Martín Amaro tiene las enmiendas 244, 887, 934 y 936. ¿Cómo desea que se voten?

El señor MARTIN AMARO: Separadamente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 887.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 936.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 244.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 934.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señor Mateos Otero, ¿desea votación separada o agrupada?

El señor MATEOS OTERO: Separada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos la enmienda 943.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda 1.022 está retirada.
Votamos la enmienda 940.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 245.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 528.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 59; en contra, 127; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señor Misol de la Iglesia, ¿desea votación conjunta o separada?

El señor MISOL DE LA IGLESIA: Separadas, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 422.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 59; en contra, 127; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 2.177.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 2.229.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 534.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 58; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 235.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señor Olano Gurriarán, ¿desea votación conjunta o separada?

El señor OLANO GURRIARAN: Como usted quiera, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Es verdad, sólo tiene una. (Risas.)
Agrupamos la enmienda a sí misma y pasamos a votarla.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Señor Pardo Gómez, ¿quiere que sus enmiendas se voten separada o agrupadamente?

El señor PARDO GOMEZ: Agrupadas.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos las enmiendas 491, 2.236, 652 y 1.126.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Vamos a votar también agrupadamente las enmiendas del señor Perinat y Elio, La 2.961.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Al no encontrarse en la sala el señor Pinilla Turiño, votamos la enmienda 359, puesto que la enmienda 500 fue rechazada. Votamos la enmienda 359.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 57; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 3.625.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 55; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 2.223.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 55; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 661.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 55; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 382 fue retirada.

Señor Prieto Carrasco, ¿quiere que sus enmiendas se voten separada o agrupadamente?

El señor PRIETO CARRASCO: Separadamente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 510.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 55, en contra 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Las enmiendas 949 y 241 fueron retiradas. Votamos la enmienda 524.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 55; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 1.135 fue retirada.

Las enmiendas del señor Rahola se dan por decaídas por no haber sido defendidas en el Pleno.

Señor Ramón Fajarnés, ¿quiere que se voten sus enmiendas separada o agrupadamente?

El señor RAMON FAJARNES: Separadamente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 497.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 356.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 1.622.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 2.220 ha sido retirada. Votamos la enmienda 658.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 379 ha sido retirada. Votamos la enmienda 3.900.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos las enmiendas del señor Reigada Montoto. ¿Se votan agrupadamente?

El señor REIGADA MONTOTO: Señor Presidente, solicito votación separada.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 2.960.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. La enmienda 952 ha sido retirada. Votamos la enmienda 950.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Señor Ribas de Reyna, ¿desea que se voten separadamente sus enmiendas?

El señor RIBAS DE REYNA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 2.438.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La enmienda número 2.231 ha sido retirada. Votamos la enmienda 536.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 237.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señor Robles Piquer, ¿desea que se voten agrupadamente sus enmiendas?

El señor ROBLES PIQUER: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles Piquer. La enmienda 31 ha sido retirada. Votamos las enmiendas 2.959, 532 y 953.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señor Rodríguez Fernández, ¿desea que se voten separadamente sus enmiendas?

El señor RODRIGUEZ FERNANDEZ: Por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Votamos la enmienda 499.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos a continuación la enmienda 358.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 1.624.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 2.222.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda número 660.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda número 381.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señor Rueda Crespo, ¿desea que se voten sus enmiendas agrupadas o por separado?

El señor RUEDA CRESPO: Por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Votamos en primer lugar la enmienda número 506.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 2.190.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 2.694.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 518.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 2.313.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 98.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 954.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votamos la enmienda 2.637.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Señor Ruiz Ruiz, ¿cómo desea que se voten sus enmiendas, agrupadas o por separado?

El señor RUIZ RUIZ: Por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Votamos la enmienda número 1.704.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 51; en contra, 127; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. La enmienda 354 ha sido retirada. Votamos la enmienda número 1.619.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La enmienda 2.311 ha sido retirada. Votamos la enmienda 1.116.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 127; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda número 1.154.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 128; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda 377.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 128; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Las enmiendas del señor Rupérez se dieron por decaídas al no haber sido defendidas ante el Pleno.

Se votan las enmiendas del señor Sánchez Lázaro-Carrasco. ¿Agrupada o separadamente?

El señor SANCHEZ LAZARO-CARRASCO: Agrupadamente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

La enmienda 171, ha sido retirada.

Votamos las enmiendas 2.429, 32, 513, 2.965, 1.122, 1.157 y 960.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 128; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Las enmiendas del señor Santamaría Velasco se dieron por decaídas, al no haber sido defendidas en el Pleno.

Se votan las enmiendas del señor Serrano Pino. ¿Agrupada o separadamente?

El señor SERRANO PINO: Separadamente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Votamos la enmienda 490.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 128; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 2.183.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 128; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 2.235.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 128; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 258.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 128; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 1.125.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 129; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se votan las enmiendas del señor Sierra Herrera. ¿Agrupada o separadamente?

El señor SIERRA HERRERA: Tengo interés en separar la 971, al artículo 1.º, 2. Las demás, a gusto de la Presidencia.

El señor PRESIDENTE: Las demás agrupadas. Muchas gracias.

Votamos la enmienda 971.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 129; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Las enmiendas 246 y 106 han sido retiradas. Votamos las enmiendas 1.042, 962, 529, 1.140 y 362.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 54; en contra, 129; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Pasmos a votar la enmienda que queda viva del señor Ulloa, por cuanto la número 29 y la número 228 fueron retiradas.

Votamos la enmienda número 531.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 129; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmiendas del señor Zapatero.

El señor ZAPATERO GONZALEZ: Que se voten separadamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Votamos la enmienda número 503.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 129; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda número 2.175.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 130; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos la enmienda número 233.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 53; en contra, 130; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Señores Senadores, hemos terminado las votaciones de las enmiendas. *(El señor Aguiriano Forniés pide la palabra.)*

Tiene la palabra el señor Senador.

El señor AGUIRIANO FORNIES: Por el artículo 124 del Reglamento de la Cámara que dice: «La Mesa del Senado, a petición de un Grupo Parlamentario, podrá acordar la votación del dictamen en su totalidad o mediante agrupación de artículos», solicito, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que se vote conjuntamente el título de la Ley, la Exposición de Motivos y el Título Preliminar.

El señor ARESACOCHAGA Y FELIPE: No he entendido bien la propuesta.

El señor PRESIDENTE: El artículo 124 dice: «La Mesa del Senado, a petición de un Grupo Parlamentario, podrá acordar la votación del dictamen en su totalidad o mediante agrupación de artículos. Igualmente podrá acordar, en las mismas condiciones, la votación fragmentada de apartados de artículos o párrafos completos de aquéllos».

Consultada la Mesa, la Mesa acuerda que se vote.

El señor ARESACOCHAGA Y FELIPE: Estamos de acuerdo, aunque no hace falta el acuerdo, puesto que la Mesa lo ha acordado.

En cualquier caso, pedimos la votación nominal en nombre de cincuenta Senadores.

El señor PRESIDENTE: Vamos a efectuar la votación nominal.

El señor Secretario, Gaminde Alix, procederá a la lectura, empezando por el señor Acebedo Llopis.

Realizado por el señor Secretario (Gaminde Alix) el llamamiento de los señores Senadores por orden alfabético, así como de los miembros de la Mesa, y hecho el recuento de los votos emitidos, dijo:

El señor PRESIDENTE: Señores Senadores, el título de la Ley, la Exposición de Motivos y el Título Preliminar han sido aprobados por 137 votos a favor y 54 en contra, sin abstenciones. *(Aplausos en los bancos de la izquierda.)*

Entramos en la discusión del Título I. Recuerdo a SS. SS. la advertencia que hice ayer de ser riguroso en la defensa y rechazo o contradicción de las enmiendas, es decir, no convertir cada turno en un turno de portavoces, sino que los señores Senadores, tanto al defender como al contradecir al que defiende, se ciñan a la cuestión. *(El señor Vicepresidente, Lizón Giner, ocupa la Presidencia.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): El señor Agudo Calleja, don Eulogio, tiene la palabra. ¿17 enmiendas, Senador?

El señor AGUDO CALLEJA: Sí, señor Presidente. Señorías, voy a aprovechar las recomendaciones del señor Presidente y me voy a atener simplemente a defender las enmiendas que me han sido encomendadas y que he presentado a título personal.

Conforme va la marcha del debate, espero que algún reintegro nos tocará y alguna de estas enmiendas puede que sea aprobada. Me refiero a las enmiendas al Título I, «De los centros docentes».

La enmienda número 1.832 al artículo 9.º cambia totalmente el texto del artículo, que yo encuentro mal redactado. Dice el artículo: «Los centros docentes, a excepción de los universitarios, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen».

Nosotros pensamos que debe decir: «La presente Ley y las disposiciones que la desarrollen, son de aplicación a todos los centros docentes, excepto a los universitarios». Creo que queda mucho más claro el precepto y esta es la causa de mi enmienda.

La enmienda número 889, al artículo 10.2, donde dice «centros públicos» yo rectifico y digo «centros educativos de carácter público». El carácter va a ser el que le va a imprimir lo de educativo, porque si lo piensan SS. SS. verán cómo existe un montón de centros públicos que son recreativos, deportivos o como quiera que se les llame.

La enmienda 2.494 se refiere al artículo 11.2, que habla de centros integrados que abarquen dos o más enseñanzas, y pretende cambiar la expresión «se efectuará» por «se realizará». Es una enmienda totalmente gramatical o semántica en la que lo expresado será efectivamente «se realizará». Esta es la causa de mi enmienda.

La enmienda 890 es al artículo 12.1, en el párrafo que dice «... singularizados a fin de acomodarse a las exigencias del medio». Aquí se habla de centros españoles, en el extranjero, y yo digo «... adaptados a las exigencias del medio...». Creemos que la frase que nosotros proponemos expresa de manera clara y precisa el concepto a que el apartado se refiere, cual es la adecuación de estos centros a las exigencias del medio.

La enmienda 1.713, al artículo 14, cuando habla de: «... con garantía de calidad...», nosotros pretendemos modificar dicha expresión para que diga «... con auténtica garantía de calidad...», pues aunque parece que es rizar el rizo, con la palabra «auténtica» queremos demostrar que no es que se dude, sino que lo que se tiene que hacer es demostrar esa calidad, porque existen muchos colegios que en el papel se encuentran con los mínimos que la Ley ocupa, pero que después no se cumplen. Este es el fundamento de mi enmienda.

Al artículo 16.2 del Capítulo II denominado: «De los centros públicos», tengo la enmienda 2.352. Sustituimos la expresión «... no comprendidos en él...» por la de «... no incluidos en la enumeración del...». Con nuestra enmienda creemos que se mejora el significado de la redacción del párrafo. El significado de «comprender» no es afortunado al caso que nos ocupa, mientras que nosotros proponemos cambiarlo por «incluir» porque en su semántica es más afortunado el concepto de la enmienda que el artículo.

En la enmienda 51, que se refiere al artículo 20.2 sustituimos la expresión: «En ningún caso habrá...» por la de «En ningún caso podrá producirse...». Quiero indicar que en la mayor parte de mis enmiendas he aprovechado el Diccionario de don Julio Casares por amistad con uno de sus hijos, cuya autoridad está reconocida por el cargo que tuvo en la Real Academia. Decía que en el texto se usa en forma de futuro, «habrá», que, por su utilización tan frecuente, tiene una pérdida de su primitivo significado, con lo que al emplearlo aquí no queda suficientemente claro. La idea de que nunca podrá producirse ningún tipo de discriminación, queda más clara en el texto, según mandato que indica la Constitución.

Al Capítulo III: «De los centros privados», tengo la enmienda 1.415, al artículo 21.2, donde quitamos la negación «no» y ponemos «en ningún caso». Creemos que se mejora el texto de la Ley precisando y dando con ello mayor garantía y seguridad de que en ningún caso podrán ser titulares las personas enumeradas en los apartados siguientes, que no voy a relacionar, como son los señores que pertenezcan a la Administración o tengan antecedentes penales.

En la enmienda 3.175, al artículo 21.1, cambiamos «... titulares de los centros privados...» por «... titulares de los centros educativos privados...». Sabemos de la existencia de una serie de centros no educativos y por ello consideramos necesario hacer esta aclaración en la Ley para evitar posibles confusiones a las que ya me he referido anteriormente.

En la enmienda 2.143, al artículo 23, rectificamos uno de los párrafos, el que dice: «La apertura y funcionamiento de los centros se someterán al principio de autorización administrativa...». Nosotros creemos que queda mucho mejor decir: «Para la apertura y funcionamiento de los centros docentes privados no concertados será requisito indispensable la autorización administrativa...».

Con nuestra enmienda eliminamos el término «someterán» que, como SS. SS. saben, tiene especiales connotaciones y que, a nuestro parecer, no debería ser introducido en la Ley, con lo cual se concederá según lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

La enmienda 1.670 pretende sustituir donde dice: «centros privados» por «centros de enseñanza privada». Insisto en que nos parece importante hacer esta aclaración en la Ley para diferenciarlos de los no educativos, como he dicho ya en la enmienda al artículo 22.1.

En la enmienda 1.637, que hace referencia al artículo 25, rechazamos la frase: «Dentro de las disposiciones de la presente Ley y normas que la desarrollen», y decimos: «De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y sus disposiciones complementarias, los centros educativos privados no concertados», gozarán de autonomía en cuanto a elegir tanto profesores como alumnos u otros cargos.

En la enmienda 2.116, al artículo 26.1, rechazamos, también, el texto que dice: «Los centros privados no concertados podrán establecer», y nosotros decimos: «Los centros educativos privados no sostenidos con fondos públicos, cuando lo consideren oportuno, podrán regular...». Decimos esto porque es más coherente hablar de centros educativos dado el texto que estamos defendiendo que es donde se educa, ya que si no decimos sólo «centros privados», privados son también aquellos como los casinos, los clubs y los bares y creo que éstos están fuera de esta defensa.

La enmienda 1.908, al artículo 17, que habla de que tanto por el Consejo del Gobierno de las Autonomías o por el Gobierno podrán crear o suprimir centros públicos, yo creo que, a pesar de que se hayan transferido los poderes a las Comunidades Autónomas y queden en ellas estas competencias de creación y supresión, se debe comunicar al Gobierno central para que quede constancia.

La enmienda 1.907, al artículo 13, proponía suprimir el plazo máximo de un mes. Quizá lo que voy a decir —y lo voy a hacer «in voce»— parecerá exagerado, pero no creo que sea como para agilizar el trámite; ya dije que todos los centros docentes tendrán una denominación y se inscribirán en el registro. Si se encuentran inscritos en el registro de las respectivas Comunidades Autónomas en que están radicados, no cabe identificación distinta de los centros que la que figura en dicha inscripción registral. Por tanto, yo suprimiría aquí el plazo de un mes y lo ampliaría, por lo menos, a tres o cuatro meses para que tengan más tiempo para comunicarlo al Gobierno central.

La enmienda 1.906, al artículo 10, la voy a retirar, y la enmienda 2.346, al artículo 19, también la voy a retirar.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ¿Hace el favor de repetir qué enmiendas va a retirar?

El señor AGUDO CALLEJA: Señor Presidente, retiro las enmiendas 1.906, 2.346 y 1.886. Una de ellas yo la he buscado en el libro y no la he encontrado, y no sé si la enmienda 186 es un error o no.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ¿Retira usted la enmienda 1.907?

El señor AGUDO CALLEJA: No, retiro la enmienda 1.906, no la 1.907.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Yo tengo las enmiendas 1.907 y 1.908, pero no tengo la enmienda 1.906.

El señor AGUDO CALLEJA: Entonces debe ser la enmienda 1.908.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): La enmienda número 889 está presentada al artículo 10, número 2.

El señor AGUDO CALLEJA: Yo la había presentado, pero no consta. La enmienda 1.886 está formulada al artículo 15.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Efectivamente, la enmienda 1.886 es al artículo 15. ¿Esa la retira?

El señor AGUDO CALLEJA: La retiro. Y la enmienda 2.346 al artículo 19 también la retiro.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tenía usted razón con la enmienda 1.906, lo que pasa es que no está reflejada. Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Aguilera Bermúdez. Tiene mantenidas 19 enmiendas.

El señor AGUILERA BERMUDEZ: Muchas gracias, se-

ñor Presidente. Señoras y señores Senadores, no sería fiel al compromiso que tengo contraído con mi Grupo y como mandatario de la circunscripción electoral a la que pertenezco si, con carácter previo a esta intervención, no diera rendidas gracias a la Presidencia que en este momento ocupa la Cámara por cuanto he de decir que el Senador por mi circunscripción Borrás y el Senador Ruiz Mendoza —que ha sido brillantemente felicitado y homenajado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort— me dijeron que el otro día el señor Presidente me concedió un tiempo suplementario. Como subir al estrado supone siempre un comportamiento generoso, yo no le di las gracias. Por eso, aprovecho la ocasión, señor Presidente, para realizar lo que en ese momento debió ser un gesto y que, por consiguiente, supone una obligada norma de cortesía parlamentaria para quien representa la Presidencia de la Cámara.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muchas gracias, señor Aguilera.

El señor AGUILERA BERMUDEZ: Por vía de prólogo, y como siempre que se produce este tipo de actuaciones, he de decir que yo he hecho un estudio pormenorizado, un estudio atento y serio del Título primero, ahora objeto de debate, y que comprende desde el artículo 9.º hasta el 26 «in fine».

Con relación al primer artículo, al artículo 9.º, he presentado una enmienda. El texto del proyecto dice: «Los centros docentes, a excepción de los universitarios» (es bien sabido que los universitarios quedaron aparcados por la Ley de Reforma Universitaria, y a mi modo de ver, se incurre en una contradicción en este mismo texto al aludirlos), «se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen». Yo me he permitido complementar este texto diciendo que «se regirán por lo dispuesto en la Constitución, en los tratados internacionales, en la presente Ley y en las disposiciones que la desarrollen». ¿Por qué se hace esto? Se hace esto precisamente al amparo del principio de jerarquía normativa. Y, ¿por qué el principio de jerarquía normativa que está en nuestra Constitución, en el artículo 9.3, si mal no recuerdo? evidentemente porque todos sabemos que el principio de las Leyes se enmarca de mayor a menor. Este es un hecho comúnmente admitido y que tiene nuestra consagración en la Carta Magna. No sería un fiel reflejo que el texto constitucional no respetase este principio. El Senador que me vaya a contestar va a decir que está admitido implícitamente el respeto a la Carta Magna, a la Constitución, pero como creo que lo que abunda no daña y es buena su consagración expresa.

Además, incluimos la mención a los Tratados internacionales porque a lo largo de la discusión de todo el Título Preliminar, que ha sido recientemente votado, nos hemos dado cuenta de cómo ha surgido y va a surgir nuevamente ahora en este Título el problema de la extranjería, así como porque también se consagra en la Carta Magna el hecho de que los Tratados internacionales los asumimos como parte del ordenamiento interno español.

El problema se complica en otro orden de cosas porque, por aplicación del principio de jerarquía normativa, nos vamos a encontrar con que esto va a afectar a las Comunidades Autónomas. Hay artículos aquí en la Ley que claramente van a afectar a las Comunidades Autónomas, y ciertamente no sabemos cuál va a ser su esfera de competencias porque tampoco ha sido objeto de una reserva especial.

Entonces —hablo a título de ejemplo—, ¿qué pasará con la Inspección General de Enseñanza Primaria? ¿Va a haber delegación o, por el contrario, el Estado va a seguir unificando el criterio a ese respecto? Este es un tema. ¿Cómo compartir la expedición y homologación de títulos, perfectamente reconocido como una facultad dispensable a las Comunidades Autónomas, así como aquellas otras propias y específicas del Estado? ¿Dónde empiezan y dónde terminan aquellas materias que regula el Estado por su condición general, y evidentemente por su legitimidad de origen, y por su legitimidad posterior de adscripción de votos dentro del Estado Español? ¿En qué parte empieza una y en qué parte empieza otra?

Vean ustedes que ésta no es una enmienda sutil o de carácter gramatical sino que realmente es una enmienda mucho más intensa. Además yo aprovecho para poner ejemplos prácticos.

¿Dónde colocamos dentro de la jerarquía normativa la doctrina del Tribunal Constitucional? ¿Dónde? Porque es evidente la adscripción al bloque de la legalidad, en el sentido de que todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Dónde ponemos la doctrina del Tribunal Constitucional? ¿Cómo interpretar, por ejemplo, dentro de esta norma, dentro del campo normativo, la doctrina del Tribunal Constitucional? Doctrina muy específica y, por supuesto, debatida, y aún no exenta de comentarios, en las sesiones a las que estamos asistiendo desde el 13 de febrero de 1981. Yo entiendo ciertamente, por palabras del representante de la mayoría, señor Laborda (y en esta explicación creo que ha habido una pormenorización), que hay una libertad de concurrencia.

Hoy al leer los medios de comunicación —obligación a la que están sujetos siempre los parlamentarios— me he encontrado con el tema de que la libertad de cátedra no está sujeta al ideario; se habla de la palabra «acatar». No se trata de eso. Hemos hablado antes de que es concurrente y que hay una doctrina jurisprudencial que tiene unos contornos perfectamente delimitados. ¿Qué significa libertad de cátedra? No censura previa, lo dice la doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Qué significa libertad de ideario o carácter propio, pues se admite con esos dos nombres en la doctrina? Ese es el límite; no vayamos buscando exquisiteces. También está delimitada la posibilidad de definir ideológicamente el centro. Son libertades concurrentes. Esto lo ha dicho el señor Laborda, los representantes de la mayoría y también lo hemos dicho nosotros en anteriores intervenciones.

Ha habido y existe una voluntad de consentimiento en la definición de la sentencia, ya producida en otro orden de cosas y referida a este extremo; y esto hablando

casuísticamente, de forma concreta. Entonces, ¿por qué no admitir como principio de jerarquía esa doctrina, ya utilizada, y que solamente se produce en el orden de la retórica o del puro verbalismo?

Ciertamente, ahí está la cita que, por parte de todos los Grupos de esta Cámara, se ha hecho con relación a los Tratados internacionales, que además es un mandato imperativo en cuanto que supone la asunción de los pactos internacionales, que no interesa ahora pormenorizar ni detallar. ¿No estaremos, me pregunto, ante un lenguaje común, ante la admisión de un lenguaje normal y corriente, que sencillamente va por cauces distintos? ¿No sería que se está utilizando las mismas palabras pero con distinto significado? Yo querría dejar expuesta la imagen, señorías —podía haber puesto otro ejemplo pero he puesto éste por ser el más reciente—, de cómo el principio de jerarquía normativa debería haberse consignado expresamente, no sólo por los problemas que tenemos, sino por dar una respuesta específica y concreta a las Comunidades Autónomas, en todas ellas.

Ayer, en un diálogo en el que salieron desde Demócrito, a la poesía y temas verdaderamente admirables —por lo que esta Ley no solamente es la Ley del objeto, la Ley Reguladora de la educación, sino del estudio, del enriquecimiento por parte de todos los grupos políticos— pensé que quizá ese es el doble porte y la tarea feliz a la que contribuimos desde la oposición a esta mayoría.

Decaigo por un momento en enmiendas a las que ciertamente les acompaña más el sentido gramatical que el facundioso. Yo entiendo que la mayoría, tan respetuosa como siempre, va a considerar aquello —y yo estuve en un determinado momento casi a punto de ser jugador profesional de ajedrez— de que hay determinados momentos en que todo parlamentario debe ser consciente de la situación. Hemos hecho una apertura española, ustedes deben contestar no con la india de rey sino con el peón—cuatro—rey; después hay multitud de posibilidades y realmente hay que dominar todos los escaques. Incluso algún Senador habló de «me están escaqueando». Pues claro que sí, porque escaquear consiste en determinar cada suerte del noble arte parlamentario.

Ayer aprendí, entre otras cosas, temas admirables, como fueron las referencias históricas al señor Besteiro o las no menos correspondientes —y felicité al Senador socialista, que está aquí presente— referencias históricas a don Gumersindo Azcárate, etcétera.

Paso, pues, en el sentido y en la esperanza de que aquellas enmiendas que tienen su sustancia, que no responden a un noble deporte ni juego, sino simplemente complementan a la mayoría, y quizá por escasez de tiempo, a aquellas otras también no menos importantes, pero ciertamente necesarias que se deben concretar en este momento.

En primer lugar, voy a defender la enmienda 756, referida al artículo 7.º El texto del proyecto no prevé la modificación de centros públicos. Se está hablando de la creación o supresión de centros públicos. ¿Ustedes han previsto, señores socialistas, que puede haber modificaciones de los centros públicos? ¿Ustedes han previsto que

precisamente por la Ley que dictan puede haber una alteración, que no es un «*numerus clausus*»? Entonces, habría que dejarlo a la facultad reglamentaria posterior. Esto en nada empece a lo que estamos discutiendo de problemas sustanciales, sino que es realmente la voluntad de cooperar con la mayoría y decirle que debe ser previsto el tema de la modificación.

Quiero referirme también, como un tema susceptible de perfección, a la enmienda 755, al artículo 12, relativo a los centros en el extranjero. La redacción que hacen ustedes, que yo comparto ciertamente, empieza hablando del principio de la singularidad, sin duda, definido al medio en el que se imparte y se ejercita la enseñanza. Sin embargo, mi criterio es el siguiente: Este es un tema muy socialista, no digo que lo hagan con mala intención, pero hay el principio general y el principio especial. La Ley tiene unos principios generales y después vienen los principios especiales. Vamos a empezar por la generalidad, vamos a decir que todos los centros se van a acomodar a esta Ley y a lo que se dicte por Reglamento, y luego los especiales, que esos tratarán de sujetarse en todo a la normativa general. Si no, podemos entrar en una serie de singularizaciones en todas y cada una de las partes que pueden inducir o provocar confusión.

También quiero referirme, señorías, a la enmienda 757, al artículo 18, apartado 1, en el que se respeta perfectamente, al menos, desde el uso de las palabras, la formación religiosa y moral, etcétera.

Nos ha parecido muy conveniente, es un tema de conclusiones, un tema muy finalista, el que a los niños desde el principio se les empiece a hacer otro tipo de enseñanzas, que son los derechos humanos, todos los derechos humanos. Evidentemente...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Senador Aguilera, si me permite, a efecto de su disertación, quiero advertirle que le queda un minuto, para que usted sepa completar su información y que no le coja de sorpresa la luz roja.

El señor AGUILERA BERMUDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Ultimamente me refiero también a la número 20, que entendemos que es la oferta que hacen ustedes, por así decirlo, con respecto a los puestos escolares que van a producir en cada momento anterior al curso. Yo pido que se haga pública y que sea anterior. ¿Por qué? Muy sencillo, para que todo el mundo sepa en cada sitio qué es lo que hay. Igual que han creado ustedes un Consejo escolar, que ciertamente va a estar sometido al control, porque todos estamos sometidos al control legislativo, yo propugno que el Consejo escolar —hablo del Consejo nacional, no de los Consejos de cada sitio— esté sujeto a control, que se informe a la opinión pública de la oferta educativa general. Hablo también de que a nivel territorial, en el marco territorial, se haga una programación anterior y pública. Se trata de que, si el curso empieza en el mes de septiembre o en el mes de octubre, un mes antes se sepa cuántos puestos habrá disponibles para la

gratuidad de la enseñanza, etcétera, y que sea público, que se conozca. Porque, en definitiva, la actividad política siempre es una actividad sujeta al principio de publicidad, también marcado en la Constitución.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): El Senador Bayona tiene la palabra para el turno en contra.

El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, señorías, yo no sé si la respuesta que voy a dar será, como ha sido solicitada por el señor Aguilera, una respuesta de «peón—cuatro—rey». Pero, inevitablemente y después de esperar que intervinieran dos Senadores del Grupo Popular en este nuevo Título, tiene que ser la de rechazar todas las enmiendas aquí defendidas, en primer lugar y fundamentalmente, porque no figuran en la lista de enmiendas seleccionadas anoche por el Grupo Popular sobre las cuales, y según confesión del propio Grupo Popular, se quería centrar el debate.

Yo quiero decir que, por fin, el Grupo Popular ha seleccionado los puntos de discrepancia de la Ley, cosa que lamentablemente no hizo en Ponencia cuando se les solicitó por el Grupo Socialista y cuando procedimentalmente parece que era el momento más conveniente. Por un momento, anoche el Grupo Popular nos hizo creer que empezaba a salir del obstruccionismo y empezaba a posibilitar la racionalización de las posiciones y un debate claro sobre esos puntos de discrepancia. Por tanto, ante la nueva reanudación de los debates, hemos esperado para ver cuál era la tónica de las intervenciones y si se mantenían o no todas las enmiendas, y la respuesta del Grupo Socialista es, en primer lugar, que desde ahora, el Grupo Socialista centrará el debate fundamentalmente en las enmiendas seleccionadas por el Grupo Popular. En principio, y puesto que el Grupo Popular ha confesado explícitamente que el resto de las enmiendas no tienen por finalidad modificar la Ley, sino presionar para que esa modificación sea posible en las enmiendas por ellos seleccionadas, a partir de ahora no intervendremos en el resto de las enmiendas.

En segundo lugar, y como respuesta también, quiero ratificar lo que ayer dijo nuestro portavoz, el Senador Laborda, en el sentido de que no habrá comisión negociadora al margen de esta sala de Plenos. Lo cual quiere decir que estamos dispuestos a debatir a fondo las ahora ya 15 enmiendas, puesto que tres de las 18 presentadas anoche han sido ya votadas. Estamos dispuestos a debatirlas en esta sala; estamos dispuestos a dejarnos convencer, si sus argumentaciones lo consiguen; estamos dispuestos a hacer enmiendas transaccionales, como se están haciendo con otros Grupos Parlamentarios; pero también estamos dispuestos, no les queda duda, a votar en contra si entendemos que sus enmiendas son pretensiones excesivas que desnaturalizan la filosofía de la Ley.

Y quiero terminar —tercer punto de nuestra respuesta— diciendo que las condiciones de este debate las ha puesto el Grupo Popular, y que los Senadores del Grupo Popular son los que pueden cambiar, y deben cambiar, si

quieren, las condiciones del debate. Las condiciones impuestas, sabido es, son: 4.000 enmiendas, votaciones separadas, votaciones nominales. No le corresponde al Grupo Socialista cambiar las condiciones del debate y facilitar un debate a fondo sobre estos quince puntos fundamentales de discrepancia que quedan.

Seguimos, pues, abiertos al diálogo, pero sólo desde esta tribuna. Nada más, y muchas gracias. (*Aplausos. El señor Fernández Fernández—Madrid pide la palabra.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Senador Bayona, la próxima vez que haga un anuncio de cómo van a realizar el debate, me pide la palabra para una cuestión de orden, para anunciarlo, pero no para un turno en contra.

El señor Fernández—Madrid tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ—MADRID: Realmente me iba a levantar en nombre de mi Grupo para pedir una cuestión de orden, porque es desusado que en la contestación a unas enmiendas del señor Aguilera se nos haya planteado una cuestión totalmente ajena.

Muchas gracias, señor Presidente; ha demostrado usted una exquisitez, un gran equilibrio y ponderación al interpretar el Reglamento.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muchas gracias, señor portavoz.

El Senador Ainsa Escartín tiene ocho enmiendas, ¿verdad?

El señor AINSA ESCARTIN: No, señor Presidente, tengo tres: la 1.515, la 1.736 y la 167.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Aquí le han puesto a usted cinco más. ¿La 1.827, al artículo 21, no es suya?

El señor AINSA ESCARTIN: Efectivamente, pero estamos tratando el Capítulo I, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Pero vamos por títulos. Tiene usted la 1.827, al artículo 21; la 640, al artículo 22; la 1.761, al artículo 23; la 601, al artículo 24, y la 804, al artículo 26. Tiene ocho minutos.

El señor AINSA ESCARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, señorías, señor Ministro, en primer lugar quisiera contestar a la última intervención que ha tenido el portavoz socialista, señor Bayona.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Excepcionalmente y por un minuto, porque no vamos a entrar en el juego. Conteste, pero tiene un minuto nada más.

El señor AINSA ESCARTIN: De acuerdo, señor Presidente, muchísimas gracias. Puesto que ayer se comentaron estas cartas, estos pactos, estos articulados tan traí-

dos y llevados, y era un día de fútbol, permítaseme, señor Bayona, que le diga que la selección española la componen once personas cuando se colocan sus camisetas y salen al campo. Pero hay muchos jugadores de primera división que, perfectamente, y sin desmerecer en absoluto, podrían salir también y, como he dicho antes, sin desmerecer.

Con lo cual quiero decirle que, si ha habido una selección de enmiendas, en ningún momento, señor Bayona, pueden desmerecer al respecto las 4.160 que el Grupo Popular ha presentado, porque, de hecho, estaban bien trabajadas.

El señor PRESIDENTE: Damos el tema por concluido, ¿no, señor Ainsa? Entre usted en la defensa de sus enmiendas.

El señor AINSA ESCARTIN: Señorías, en esta Cámara se han manifestado en momentos anteriores las graves consecuencias que nos traerían aspectos como la reforma parcial del Código Penal: he ahí las consecuencias; se han manifestado en esta Cámara los grandes problemas que nos podría traer la droga, y que de hecho está trayendo: he ahí las consecuencias.

Esas 4.160 enmiendas se han presentado con el fin de modificar un texto completamente, porque entendemos que es de vital importancia; pretendemos crear Leyes definitivas y no hacer trabajar a posibles sucesores nuestros en su momento, en nuevas legislaturas, y no tener que andar con temas tan traídos y tan llevados como en estos momentos son los de la LODE.

Señorías, se expusieron el viernes por este Senador dos de las enmiendas formuladas al Título Preliminar. Yo rogaría a SS. SS. que se acepten y que, por lo menos, se nos conteste a todas ellas. No hemos de olvidar en ningún momento que entiendo y entendemos todos que hay unas normas de cortesía parlamentaria y lo menos que podemos hacer es respetarlas, dada la representatividad de esta Alta Cámara en base a los votos que hemos logrado todos los aquí presentes, por lo que gobernamos para todos y no para un sector.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Ruego a S. S. que entre en la defensa de sus ocho enmiendas, porque está refiriéndose incluso al debate de ayer. No abusen de la paciencia de la Presidencia.

El señor AINSA ESCARTIN: Gracias, muy amable, señor Presidente.

Voy a pasar a la enmienda 1.511, que corresponde al artículo 10, punto 3, donde se nos habla de los «centros privados», y nosotros entendemos que se debe decir: «los centros de formación y educación privados». En el artículo 10, punto 3, como decía, se nos habla de los «centros privados sostenidos con fondos públicos» y, si observan SS. SS., comprobarán que en el artículo 11, donde se nos significan los puntos a), b), c) y d), figura en primer lugar la Educación Preescolar, a continuación la Educación General Básica, en el punto c) el Bachillerato, y nos que-

da el punto d), relativo a la Formación Profesional; por lo que hemos de complementar estos tres primeros puntos diciendo: «centros de educación». Yo rogaría a SS. SS., si a bien lo tienen, que, para evitar un error de terminología por indefinición, en lugar de hablar solamente de centros se ponga: «los centros de formación y educación privados», con el fin de ajustarlos al propio espíritu de la Ley y a su redacción global. En la Ley se habla siempre de «centros docentes» y, por tanto, sería incorrecto hablar en el artículo 10, punto 3, de «centros». Ahora bien, hay unas áreas de enseñanza formativa que deben ser recogidas, por lo que yo propongo decir: «los centros de formación y educación privados». Habría de hacerse así en coherencia con el resto de la Ley, en cuanto a la forma y a los conceptos.

La enmienda 1.736 corresponde también al artículo 10, en cuyo punto 2 se nos habla de «número de puestos escolares». Nosotros, señorías, proponemos la expresión: «número de puestos escolares por metro cuadrado construido». Si al construir un edificio se fijan unos módulos en un claro intento de hacer más funcional su aprovechamiento posterior, es indudable que esto está destinado a la docencia. Deben tenerse en cuenta los módulos de la enseñanza y el puesto escolar en su plasmación física. Por ello, se produce un vacío cuando se habla de «número de puestos escolares»; ya que debe ser referencial a su uso se debe decir: «número de puestos escolares por metro cuadrado construido». Es una razón, señorías, de pura lógica, además de suponer un requisito mínimo necesario para impartir una enseñanza de calidad. Es fundamental que se empiece a tener en cuenta al alumno, inmerso en un espacio físico y moviéndose sobre una superficie que hay que reglamentar. Por ello debería fijarse la ecuación: equis alumnos igual a equis metros cuadrados; es decir, número de puestos escolares por número de metros cuadrados construidos.

Paso a la enmienda número 167, que corresponde también al artículo 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Creo que corresponde al artículo 15.

El señor AINSA ESCARTIN: Tiene razón, señor Presidente. En el artículo 15 se nos dice: «en la medida en que no constituya» y nosotros, señorías, entendemos que debe decirse: «en tanto no dé lugar a». Me explicaré; para lograr una mejor redacción y para que quede más vinculado a los apartados del artículo anterior, el artículo 15 no debe decir: «en la medida en que no constituya discriminación», sino: «en tanto no dé lugar a discriminación». La expresión formal, al quedar más limpia, se hace más clara en su contenido y, por otro lado, la redacción que proponemos es más directa y tajante, ya que se la despoja de la ambigüedad interpretativa de «en la medida que».

Señor Presidente, puesto que el señor Bayona ya ha hecho su propia selección, en base a lo que había manifestado el Grupo Parlamentario Popular, doy por defendidas el resto de mis enmiendas a este Título.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene la palabra don José Alarcón Molina para defender sus once enmiendas.

El señor ALARCON MOLINA: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, las enmiendas que presenté en su día corresponden, lógicamente, a los tres capítulos de este Título Preliminar, que se refiere a los centros docentes definidos con la extraña dicotomía de que podrán ser «públicos y privados». Creo que un centro podrá ser público o privado. Extrañamente creo que llegará a poder ser público y privado al mismo tiempo. Habría que emplear, por tanto, la disyuntiva «o» en lugar de la copulativa «y».

Deseo aclarar además que los centros docentes de carácter privado —a efectos de las enmiendas que presenté y que voy a defender— deberían haberse subdividido, lógicamente, en centros públicos —tal como dice el Título I—, centros públicos concertados y centros públicos no concertados; subdivisión que sería mucho más clara.

Los centros públicos no concertados habría que denominarlos de «élite», o, tal como se les ha denominado, de «almibarados». En lo de «almibarados» creo cabe un insulto que afecta, lógicamente, a descendientes de personas muy representativas del lado izquierdo de la Cámara. Cuando pasemos al artículo 26 volveremos a insistir en lo de «élite».

Las once enmiendas las he limitado a siete —podrían haber sido muchas más— por respeto a los compañeros de mi Grupo Parlamentario Popular que también van a participar —y están participando— en el debate.

El significado y expresión de estas siete enmiendas, por parecerse bastante y repetirse en los distintos artículos, van a tener una función muy parecida. Así, las presenté a los artículos siguientes: 10.2, 14, 21, 22, 23, 24 y 26.

Todas ellas se refieren a centros públicos, centros docentes, centros docentes privados (lo enmendé en dos), centros privados (lo enmendé en tres) y centros docentes privados no concertados.

Las siete enmiendas que se refieren a esos artículos son de adición, sustitución y mejoran la comprensión de las expresiones, porque realmente sustituye el adjetivo «docente» por lo que tiene de significado.

El adjetivo «docente» —según el Diccionario de la Lengua Española— significa «que enseña». En singular todavía puede encajar decir «centro que enseña», pero en plural este adjetivo —como se utiliza en el Título I— sería «centros que enseñan», que tienen un significado diametralmente opuesto a lo que trata de indicar.

En las siete enmiendas, de las once que he presentado a esos artículos he intentado introducir lo que verdaderamente le da sentido a la expresión, que son las palabras: «educación», «enseñanza» y «formación».

Por ejemplo, en el artículo 10, apartado 2, sustituyo la expresión «... centros públicos» —que, señorías, tiene unas resonancias y concomitancias que pueden invitar a

numerosas confusiones, bastante más amplias de lo que a simple vista parece— por «... centros de educación y formación...». Eso se aproxima más a la sencillez de expresión de los niños, siempre clara y adecuada para referirse al tema, porque a su centro de educación lo llaman colegio, escuela, escuela de Formación Profesional, etcétera, que es algo fácilmente comprensible para todo el mundo.

Por otro lado, el propio proyecto de Ley, en su artículo 11, dice: «Los centros docentes, en función de las enseñanzas que impartan, podrán ser de: Educación Preescolar, Educación General Básica...». Es decir, se repite permanentemente la palabra «educación». No sé por qué tenemos que decir «público», o, incluso, «centro docente».

Por ello, en el artículo 14, apartado 1, irá «educativo». En el artículo 21, apartado 1, irá, y encaja, «de enseñanza privada no concertados». En el artículo 22, apartado 1, «de formación y educación». En el artículo 23, en su segunda línea, «de educación no sostenidos con fondos públicos». En el 24, apartado 1, primera línea, «de educación privados no concertados». Y, finalmente, en el artículo 26, apartado 1, al señalar lo de centros de élite, y digo de élite porque aparto realmente los dos tipos de centros, aquellos que van a recibir ayudas y los que no las recibirán. Digo que lo aparto, y me extendería ampliamente en este artículo 26, porque no entiendo cómo va a haber centros no auxiliados. No lo entiendo, francamente. Porque así, transformaremos la enseñanza en una enseñanza de élite, con alumnos almibarados.

En distintas encuestas, hasta los más reticentes a la ayuda y al control del Estado dicen —aproximadamente el 40 por ciento de 2.600 encuestados— que en los colegios y los colegios tienen que tener, lógicamente, control o algún control del Estado.

Si nosotros decimos «colegios de élite o no auxiliados», estamos dejando, realmente, una enseñanza elitista y una enseñanza poco lógica. Aparte de que ya en el artículo 14 de este proyecto de Ley, al referirse a los centros educativos en sus puntos 1 y 2, deja implícitos unos requisitos mínimos obligados.

¿Por qué no, con una pequeña ayuda o pequeño auxilio, se puede llegar a tener cierto control sobre todo tipo de colegios, con lo cual, incluso, perderían en parte el sentido de elitistas, con alumnos —vuelvo a insistir en la palabra antes dicha— almibarados?

Por otro lado, es más incomprensible que, por no darles un pequeño auxilio económico, grande o pequeño —no me meto en ello—, se les deje a un desagradable arbitrio y abandono poco adecuado para el fin que se persigue, que, en definitiva, es el educativo.

Podríamos hablar bastante más del tema, porque creo que tiene su importancia, pero se me está avisando, por lo cual voy a decir que mantengo las enmiendas 1.891 y 871.

Y termino con una frase que estaría relacionada con esta Ley, y que se nos ocurre al Grupo Popular que habría que hacer, como señalaba Ortega y Gasset, que debería haberse esforzado en ver y estudiar con tacto lo que

le pasa para evitar que le pasara lo peor a este proyecto de Ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Senador Alarcón, no le he entendido muy bien al final. ¿Mantiene las enmiendas 1.891 y 871 y retira las demás.

El señor ALARCON MOLINA: No, señor Presidente. No retiro ninguna enmienda. Las mantengo todas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Perfectamente.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Alonso Bar.

El señor ALONSO BAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Lamento que en este momento en el que me ha tocado intervenir, no se encuentre en la sala el señor Ministro, y lo lamento porque a la vista de lo que hace un momento nos ha manifestado el señor Bayona, yo he cambiado radicalmente la forma que tenía de presentar las enmiendas. Voy a tocar algunos temas que creo que puede ser de gran interés el que se conozcan por la experiencia que supone en la persona que les habla, y por cómo fueron enfocados y tocados en su día.

A la vista también de la contestación que ayer propició mi distinguido amigo y gallego también, el señor Barreiro, citando en esta sala unas anécdotas muy importantes, se me va a permitir, por parte de la Presidencia, que dado que el Título I es un Título que lleva como epígrafe «De los centros docentes», y se divide en un Capítulo II «De los centros públicos» y un Capítulo III «De los centros privados», tocar precisamente estos dos Capítulos a la vista de mi experiencia.

Hace 19 años concretamente, y a la vista de las circunstancias desfavorables que existían en nuestra zona para que nuestros hijos estudiaran de una forma racional y de una forma que nosotros considerábamos era la que se les debía impartir, un grupo de amigos decidimos crear dos colegios, uno masculino y otro femenino. Los sacrificios financieros que tuvimos que realizar para que estos colegios pudieran ser llevados a cabo solamente los sabemos nosotros, porque ninguno somos capitalistas ni herederos de papá y mamá, sino que hemos tenido que pedir a los bancos financiaciones que nos ha costado Dios y ayuda reintegrar.

Constituimos estos centros y lo primero que hicimos fue crear un consejo de ayudas a la dirección por parte de los padres, consejo que era oído por la dirección del centro y que en muchos casos tuvo iniciativas felices de aportación de ideas que fueron realmente importantes.

Todos los padres somos conscientes de los problemas que se nos plantean a la hora de elegir el centro docente a donde llevar a nuestros hijos, y yo me dirijo al Grupo Socialista, pues considero que muchos de los señores Senadores socialistas que en este momento están en la sala, tienen los mismos problemas que he tenido yo y la mayor parte de los españoles cuando se trata de elegir el

centro docente al que llevar a sus hijos. Todo esto lo determina una serie de circunstancias y una serie de factores realmente importantes que entran dentro del contexto de la situación social de cada familia: ¿Adónde se quiere llevar a los hijos para que tengan unos amigos adecuados a ellos? ¿Qué profesores son los que imparten estas enseñanzas? ¿Cuál es el criterio de las direcciones de estos centros para poder dirigir y orientar a sus profesores en una enseñanza adecuada?

Como digo, todos los aquí presentes habrán vivido, lo mismo que hemos vivido nosotros, este cúmulo de circunstancias para poder llevar a nuestros hijos a los colegios más adecuados.

Esta primera experiencia de centro privado, que he vivido durante ocho años siendo secretario general de los mismos, me ha servido para una cosa. Por la libertad que yo tenía —libertad que pido siempre para que los padres puedan elegir sus centros— determiné que mis hijos varones —tengo cinco hombres y dos mujeres— pasaran por un Instituto a partir de los catorce años. Fueron pasando los cinco por un Instituto —y aquí entra el centro público— en el que se vivieron unas circunstancias de tal naturaleza que al segundo año no hubo más remedio que crear la asociación de padres, que no existía.

Se me encomendó la realización de los Estatutos para poder crear la asociación de padres. Estos Estatutos y esta asociación de padres que se crearon en este instituto —que era el instituto Santa Irene de Vigo— fueron realizados sobre todo por una circunstancia muy especial. Si no, no se hubiera realizado la asociación de padres. Esta circunstancia especial que movió a crear la asociación de padres fue una huelga salvaje promovido por los chicos y capitaneada por dos catedráticos.

El director del instituto —hoy día padre de un distinguido miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista— me llamó a su despacho y me dijo: «Quiero que usted, junto con otras personas, promuevan la creación de la asociación de padres, porque si no, esto no se llevará a buen fin y tendremos el centro cerrado», como había permanecido durante mes y medio.

Se creó la asociación de padres. Los padres me eligieron —porque siempre es elegido el que hace los estatutos— Presidente de la asociación de padres.

El centro no se llegaba a abrir —y en esto, por favor, quiero insistir y quiero que me presten un momentito sólo de atención—, a pesar de llevar un mes cerrado, por la circunstancia de que estos catedráticos que dirigían a los muchachos exigían el que tuvieran reuniones, que ellos llamaban reuniones libres y democráticas. Estoy hablando de hace catorce años. Ustedes se pueden dar cuenta de cuáles eran las dificultades en aquellos momentos para que un Gobernador Civil autorizara la celebración de reuniones libres y democráticas de unos chiquillos en un instituto.

Decidí someterlo a la asociación de padres y ésta me propuso que, si yo lo estimaba oportuno, pidiera a la dirección del centro el que se autorizaran estas reuniones. La dirección del centro las autorizó pero obligándonos a otro padre y a mí a que asistiéramos a ellas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Alonso, ¿le parece a usted que, después de las consideraciones generales, entre un poco en el tema de las enmiendas?

El señor ALONSO BAR: Las enmiendas, señor Presidente, con el debido respeto, aunque las considero todas importantes y buenas, dado lo que el señor Bayona nos ha dicho...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): El señor Bayona ha presentado una cuestión de orden que ha sido contestado. El señor Senador se debe atener...

El señor ALONSO BAR: Estoy hablando de centros privados y públicos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): No está defendiendo sus enmiendas. Está dando sus opiniones, que son muy respetables. Así que ciñase a la cuestión, señor Alonso.

El señor ALONSO BAR: Señor Presidente, si usted me permite...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Termine sus consideraciones generales y entre en la cuestión, señor Alonso.

El señor ALONSO BAR: Lo que sí quiero decir es que estos muchachos no estaban preparados para estas reuniones libres y, a pesar de la asistencia de los padres y de que obligamos a asistir a estos chicos para que pudieran expresar libremente sus opiniones, ya no les interesó darlas. Esto para ellos era fundamental y se acabó la huelga. Entonces me voy a ceñir a mis enmiendas, señor Presidente.

El artículo 11, en el apartado 2, dice: «así como a los centros integrados que abarquen dos o más de las enseñanzas». Tienen ustedes que pensar que en puridad, teniendo en cuenta lo que aver se nos decía —incluso se llegó a hablar de cuáles eran las palabras, de dónde procedían, y hasta se llegó al latinismo—, yo quiero recordar a ustedes que abarcar significa ceñir, significa rodear, significa comprender. Nosotros proponemos un término que creemos más exacto dentro de este apartado, y hablamos de «comprender dos o más», pues comprender significa realmente «contener», incluir en sí alguna cosa. Esta es nuestra enmienda al artículo 11, apartado 2.

Respecto al artículo 14, apartado 1, se habla de «para impartir las enseñanzas». El texto entero es «todos los centros docentes deberán reunir unos requisitos mínimos para impartir las enseñanzas...». Quiero decir que en castellano «impartir» significa «repartir» o «comunicar» y nosotros cambiamos la palabra «impartir» y decimos «para desarrollar las enseñanzas», pues desarrollar significa explicar una teoría y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Consideramos que este texto se puede enriquecer con esta modificación.

En el artículo 26, apartado 1, cuando dice «Los centros privados no concertados podrán establecer...», nosotros queremos redondear precisamente este concepto, e indicamos «Los centros educativos privados no sostenidos con fondos públicos, cuando lo consideren oportuno, establecerán...».

En el artículo 25, cuando dice «Dentro de las disposiciones de la presente Ley y normas que la desarrollen», y continúa el artículo, modificaríamos el texto de estas dos primeras líneas, diciendo: «De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y sus disposiciones complementarias, los centros de formación y educación privados no concertados...» y continuaría el texto del artículo 25.

En las tres primeras líneas del artículo 23 se habla de «La apertura y funcionamiento de los centros docentes privados se someterán al principio de autorización administrativa...», y continúa el artículo, nosotros lo sustituiríamos por «Los centros de enseñanza no sostenidos con fondos públicos para su apertura y funcionamiento solicitarán autorización administrativa», y continúa el artículo.

En el artículo 22.1 sustituiríamos las dos primeras líneas «En el marco de los principios constitucionales y de los derechos garantizados...» por «Dentro del respeto a la Constitución y a los derechos garantizados en el Título Preliminar de esta Ley...».

Al artículo 9.º cuando dice «Los centros docentes, a excepción de los universitarios, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen», nosotros proponemos la siguiente modificación: «Los centros docentes, a excepción de los universitarios, se regirán por lo preceptuado en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen». La palabra «dispuesto» significa colocar, poner las cosas en su orden y en una situación conveniente. Preceptuar es un mandato, una orden que un superior intima o hace observar y guardar a un inferior.

El artículo 17 señala «La creación y supresión de centros públicos se efectuará por el Gobierno o por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias». Nosotros diríamos: «La creación y supresión de centros públicos son decisiones propias del Gobierno o del Consejo del Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias».

El artículo 12.1 señala: «Los centros docentes españoles en el extranjero tendrán una estructura y un régimen singularizados a fin de acomodarlos a las exigencias del medio y a lo que, en su caso, dispongan los convenios internacionales». Nosotros proponemos el siguiente texto: «Los centros docentes españoles en el extranjero tendrán una estructura y un funcionamiento especiales y singulares a fin de acomodarlos a las exigencias del medio y a lo que, en su caso, dispongan los convenios internacionales».

El artículo 20.2 dice: «La admisión de los alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes, se regirá por los siguientes criterios prioritarios: si-

tuación socioeconómica de la familia, proximidad del domicilio y existencia de hermanos matriculados en el centro. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales...», etcétera. Nosotros diríamos: «En ningún caso se consentirá la discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento».

El artículo 21.1 señala: «Toda persona física o jurídica de carácter privado y de nacionalidad española tiene libertad para la creación y dirección de centros...».

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor ALONSO BAR: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Ha conseguido usted emplearlo todo.

El señor ALONSO BAR: Señor Presidente, mantengo las enmiendas que no han sido citadas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Don José María Álvarez de Eulate Peñaranda tiene la palabra.

El señor ALVAREZ DE EULATE PENARANDA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, las enmiendas que yo tengo el honor de presentar a este Título I del proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación las he agrupado con el fin de seguir una línea de ordenación más lógica y cartesiana. En este sentido, señor Presidente, permítame que, en primer lugar, me felicite por una precisión que hizo ayer un señor Senador socialista en relación con una cita que podría ser aplicada a este Título I y a las enmiendas que presento respecto al congreso de UGT de Cádiz de 1976 que no voy a repetir aquí.

El señor VICEPRESIDENTE: Cíñase a la cuestión, Senador Álvarez de Eulate.

El señor ALVAREZ DE EULATE PENARANDA: Gracias, señor Presidente. Lo único que quería decir es que ese criterio ha sido superado por la UGT y que yo desde luego me felicito, aunque el Congreso fue autorizado por el Ministro de la Gobernación y no como dijo el señor Senador.

En cuanto a las enmiendas que he presentado, señor Presidente, hay una serie de ellas formuladas a distintos artículos que afectan a centros privados que tienen 160.000 profesores de enseñanza no estatal y aunque yo no quiero ser agorero, tal como está redactado el Título I, en el futuro se podría generar tal vez el cierre de algún centro y el aumento de esa trágica cifra de paro que asola a miles de familias españolas. Yo deseo, como todos deseamos, que eso no ocurra nunca.

Remitiéndome ya a las enmiendas concretas, la prime-

ra que tengo el honor de defender es la número 1.716, formulada al artículo 14.1, que se refiere a que todos los centros docentes deberán reunir unos requisitos mínimos para impartir las enseñanzas con garantía de calidad. Es esencial que la enseñanza y la docencia de todo tipo y la que regula esta Ley Orgánica del Derecho a la Educación sea lo mejor posible en los centros de enseñanza, tanto privados como públicos y lo que el texto del proyecto de Ley invoca es que esta enseñanza de calidad deberá establecerse reglamentariamente con una serie de requisitos mínimos, pero que serán establecidos por el Gobierno, mientras que la enmienda que yo propongo dice que el Gobierno precisará dichos requisitos mínimos por vía reglamentaria y considero que esto es más acertado, precisamente porque le da una mayor flexibilidad a este artículo 14, ya que no solamente se trata de los requisitos que se recogen más adelante en el texto legislativo, como pueden ser la titulación académica de los profesores, la relación numérica de alumnos-profesores, las instalaciones docentes y deportivas, el número de puestos escolares, sino que puede haber otros requisitos que reglamentariamente deberían estar fijados también, porque a veces hay profesores que tienen una excelente preparación científica con respecto a la asignatura que tienen que impartir y, sin embargo, pueden tener defectos de calidad docente, aspectos que también podrían ser recogidos en su día por la correspondiente legislación que desarrolle este texto reglamentario de la Ley. Por ésta y otras razones considero que el Gobierno debería precisar dichos requisitos por vía reglamentaria.

La siguiente enmienda es la número 1.488 y se refiere al artículo 15. El artículo 15 habla de que los centros tendrán autonomía, en la medida en que no constituya discriminación —dice el texto del proyecto de Ley— para ningún miembro de la comunidad educativa y dentro de los límites fijados por las Leyes, para establecer materias optativas... (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*) La enmienda que yo propongo es bastante más progresista. Dice: «... los centros disfrutarán de entera libertad para...». Efectivamente, puede haber centros, como ocurre con Formación Profesional, que en determinadas comarcas puede ser que estén orientados hacia un tipo de docencia más de carácter rural, centros destinados por ejemplo a las actividades agrarias y esto afecta indudablemente a las asignaturas y materias optativas que no pueden ser las mismas en unos centros que en otros. En este sentido, la enmienda que propongo lo que intenta es que los centros de enseñanza tengan una auténtica libertad, con el fin de poderse adaptar a aquellas exigencias, por ejemplo, de tipo comarcal, que son más adecuadas para los alumnos que asisten a estos centros de docencia.

Lo mismo puede ocurrir con los métodos de enseñanza; creo que aquí la Ley —en otros aspectos de este artículo estoy de acuerdo— debe ser liberal en lo que respecta a métodos de enseñanza y también en la organización de actividades culturales o extraescolares. Puede ser conveniente que se organicen actividades extraescolares, en zonas rurales, con la finalidad de conocer y aprender directamente procedimientos de carácter agrario, o de

otro tipo, que siempre mejoran la formación profesional, en lo que creo que todos estamos de acuerdo.

Por esta razón, señor Presidente, de que no debe limitarse esa libertad de acción de los centros ni debe de ser en este sentido la redacción del texto legislativo restrictiva, yo sí creo sinceramente, y lo digo sin ironía, que esta enmienda sería fácilmente asumible por los señores Senadores del Grupo Socialista.

A continuación voy a referirme a la enmienda 2.083. La enmienda 2.083 ha sido presentada al artículo 26, número 1, que se refiere a que «Los centros privados no concertados podrán establecer en sus respectivos reglamentos de régimen interior, órganos a través de los cuales...». En esta enmienda lo que propongo es también una redacción, en línea con la enmienda anterior, de defender un criterio más liberal en favor de los centros docentes, por lo que digo: «Es potestad de los centros de educación privados no concertados el...», y sigue la misma redacción que en el texto, es decir, «... establecer en sus respectivos reglamentos de régimen interior, órganos a través de los cuales se canalice la participación de la comunidad educativa.» Creo que esto es importante, precisamente porque se trata aquí de dar una mayor flexibilidad al texto legal, de descargarle de ese lastre de carácter restrictivo y, como el optimismo nunca se pierde, también, como en la anterior enmienda, creo que esta mayor liberalidad que se concede a los centros de enseñanza podría ser asumida por el Grupo Socialista.

A continuación viene otra enmienda de distinta naturaleza que las dos anteriores a las que me acabo de referir, que es la enmienda 1.442, relativa al artículo 21.2.a), del proyecto de Ley. En realidad, en este artículo 21.2.a) se habla de las incompatibilidades para ser titulares de centros privados. Habla, por ejemplo, de que una de las incompatibilidades —que, desde luego, tiene una lógica indudable— es que las personas que presten servicios en la Administración educativa estatal, autonómica o comarcal no podrán ser titulares de centros privados. Con una mayor precisión, desde el punto de vista no sólo terminológico, sino jurídico, creo que no debe decirse «autonómica», sino «de las Comunidades Autónomas». Así se crea una mayor precisión en esta Ley, respecto a las incompatibilidades del segundo supuesto. Además, en este aspecto en que roza, indudablemente, aspectos de las Comunidades Autónomas, creo que la Ley deberá ser mucho más rigurosa, como en otros artículos, y, en este sentido, yo me sumaría a lo que ha sido afirmado por Senadores del Grupo Nacionalista Vasco y de Cataluña al Senado cuando defienden —en este caso es una enmienda de mayor precisión terminológica— que no existan en este sentido aspectos que podríamos llamar de solapamiento de la Ley con la competencias de las Comunidades Autónomas.

Una enmienda que ha sido presentada al artículo 10, apartado 2, es la enmienda 1.532, la cual voy a defender conjuntamente con la 1.688, porque tratan de mejorar redaccionalmente el estilo literario de aquellos párrafos a los que se refiere la Ley. Tanto la enmienda 1.532, relativa al apartado 2 del artículo 10, como la número

1.688, referente al apartado 2 del artículo 24, proponen que se enmiende la redacción del texto, diciendo específicamente, al referirse a los centros privados, que sean «centros de enseñanza privados», en la primera enmienda, y en la segunda enmienda, «centros educativos homologados».

Yo creo que todo lo que sea una mejora estilística desde el punto de vista literario no solamente prestigia las disposiciones que salgan de esta alta Cámara, sino que contribuye a una mejor comprensión por parte de la sociedad española, que tradicionalmente ha estado durante mucho tiempo abrumada por farragosas disposiciones legislativas en las que verdaderamente no se podía desentrañar qué es lo que estaba detrás del texto legal de muchas disposiciones, no solamente de algunas disposiciones que podían afectar al ámbito educativo, sino al ámbito fiscal o a otros ámbitos, como éste de tipo fiscal, algunas de ellas verdadera y auténticamente farragosas y de difícil interpretación.

Hay, a continuación, dos enmiendas que he presentado: la enmienda número 797, relativa al artículo 19, y la enmienda número 2.356, presentada al artículo 20, apartado 1, que tienen también unas características similares a las dos anteriores y que, por agilidad del procedimiento y para no ser repetitivo, las doy como defendidas.

La enmienda número 2.975 es una enmienda que trata de mejorar el texto y que, además, tiene un sentido perfectamente definido: el texto del apartado 2 del artículo 16. El texto del apartado 2 del artículo 16 menciona que «los centros no comprendidos en el apartado anterior se denominarán de acuerdo con lo que dispongan sus reglamentaciones especiales». Pueden existir otros centros de enseñanza especial, puede haber una serie de centros, como en el caso de técnicas profesionales específicas...

Veo que se me ha encendido la luz roja. Señor Presidente, permítame decir nada más que el resto de las enmiendas las doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Alvarez-Cascos.

El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías, anteayer, al comienzo de mi intervención en defensa del primer grupo de enmiendas correspondientes al Título Preliminar, yo hacía una breve alusión a lo que para mí era un aspecto esencial del conjunto de mis enmiendas. Era a la especial trascendencia que en este caso concreto reúnen todas y cada una de las enmiendas que este Senador ha presentado a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Fui rebatido por el señor Ramis, señalando que tal trascendencia no era exacta, que no compartía ese criterio, a lo que yo, a mi vez, no pude replicarle por las características del debate.

Quiero volver a señalar hoy, aun a riesgo de que vuelva a ser otra vez objeto de la misma réplica, que estoy todavía más convencido de la trascendencia de las enmiendas que estamos defendiendo el conjunto de Senadores del Grupo Popular, porque basta hojear para comprobar este

interés, por su trascendencia, la Prensa del día de ayer, y no voy a hacer referencia a la Prensa madrileña, que quizá siga más de cerca este debate, sino a la Prensa regional, a la Prensa asturiana, que en el día de ayer, con grandes titulares, publicaba una fotografía de la Agencia EFE, en la que la plana mayor del Grupo Parlamentario Socialista —señores Aguiriano, Ramis, Nalda, Laborda— aparecía almorzando a base de bocadillos, lo cual para la opinión pública es un síntoma más —y así lo ha interpretado— de la importancia y trascendencia de este debate, cuando incluso los Senadores socialistas, que tratan de quitarle importancia al mismo, tienen que verse obligados a hacer estos notables esfuerzos de someter su dieta al régimen de bocadillos. Insisto en la trascendencia del mismo, y quiero recordar también una vieja historia que se suele contar a los niños, la de la zanahoria y el palo, cuando se trata de hacer avanzar, a base de enseñarle una zanahoria como tentación o cualquier señuelo, al tiempo que se da palos a una cabalgadura.

Creo que, salvando, por supuesto, las diferencias, algo así era el mensaje que hace unos momentos trataba de transmitirnos el señor Bayona, diciéndonos que retiremos las enmiendas previamente para que pudiéramos discutir las 18 enmiendas, con toda seguridad para no ser aceptada ninguna. Y creo que el Grupo Parlamentario Popular y nuestros portavoces no van a caer en ese juego, que es un señuelo como el que esa vieja historia recuerda.

Las enmiendas que presento al Título I hacen referencia a los distintos conceptos de centros que a lo largo de este Título se recogen en tres capítulos. Yo creo que, básicamente, hay un conjunto de enmiendas de las que he presentado y estoy defendiendo que tienen por objeto conseguir una mejor precisión y definición de los tipos de centros regulados en esta Ley. Porque cuando se está discutiendo esta Ley, no se parte en España de una situación cero en la que podía optarse, sin crear problemas ni agravios, entre escuela pública y escuela privada, entre centros docentes públicos —centros públicos, como dice el Capítulo II de este Título— y centros privados. Partimos de la existencia de unos centros privados y unos centros públicos, cuya vida creemos que no puede estar sujeta a los vaivenes dirigistas que de una Ley —en este caso de la LODE— pudieran derivarse.

Nosotros creemos que debe reconocerse el derecho de todos y cada uno de los centros existentes a seguir sobreviviendo si así lo estiman oportuno sus titulares, de la misma manera que debe quedar plena libertad para los particulares y para el Estado a crear aquellos centros que se consideren necesarios. Y no se puede invocar nuestra postura en relación con la enseñanza pública y la enseñanza privada, para confundir o intentar confundir, al menos, a los Senadores del Grupo Popular, como hacía también en su primera intervención el primer día el admirable Senador socialista señor Bayona, en otra de sus pintorescas excursiones alrededor de los textos de Diputados del Grupo Popular. Porque si yo anteayer me refería, en relación con el tema contenido en el Título Preliminar, a determinadas citas del señor Fraga, en el tema

de la clasificación de los centros docentes el señor Bayona hizo una pintoresca incursión sobre posturas del Diputado don Fernando Suárez, y se armó un lío, se armó un lío sobre si era en el año 1970 o en el 1976, si era cuando era Presidente de la Comisión de Evaluación o era cuando se discutía la Ley de Educación, que se discutieron con un intervalo de seis años en esta Cámara, y no queda claro si el señor Bayona también estaba confundido en las fechas. Pero afirmó que el señor Suárez, y con ello trataba de simbolizar discrepancias en nuestro Grupo, se oponía a determinadas subvenciones de los centros privados. Yo puedo informarle al señor Bayona que don Fernando Suárez solamente en una ocasión, en el año 1968, hizo referencia a la necesidad de retirar subvenciones a unos centros privados. Se refería en aquella época a centros privados de una región española, o a unos centros concretos de una región española, concretamente de la Universidad de Navarra, y no lo hacía porque hubiera problemas o contrapusiera dos conceptos de enseñanza distinta, privada y pública, sino que en aquella ocasión lo hizo pronunciándose entre unos criterios enfrentados entre el Ministerio de Hacienda, que tenía una política de subvenciones en aquella región, y el Ministerio de Educación, que tenía otra distinta, y nunca tratando de contraponer lo que era la defensa de la enseñanza pública y la privada. A partir de entonces, no hay una sola declaración de don Fernando Suárez en la que pueda hacerse la afirmación que se ha hecho en esta Cámara y, por tanto, creo que es una prueba más, que para mí es incluso divertido seguir las intervenciones del señor Bayona en este tema, de que las citas deben hacerse bien, especialmente las de los ausentes.

Hablaba de que tenemos que partir en este debate de la Ley primero sobre las características de los centros de enseñanza de la situación actual en España, porque tampoco el argumento de la subvención que se otorga a los distintos centros puede ser un elemento condicionante de la naturaleza de los órganos de gobierno o de la marcha de los mismos. En primer lugar, porque para nuestro Grupo, las subvenciones que salen de los Presupuestos Generales del Estado son subvenciones que, a fin de cuentas, se pueden estimar, como algunos pretenden hacer ver, que es el dinero del Gobierno, que necesita del control del Gobierno. Para nuestro Grupo, los fondos públicos son también el dinero de los padres, y nosotros defendemos que el dinero de los padres debe respaldar el derecho de los padres a tener la escuela que estimen oportuna para sus hijos, y que esas limitaciones económicas que se introducen a partir de este momento en la Ley en relación con la financiación de los centros privados no deben condicionar en absoluto no ya su supervivencia, sino las características de la enseñanza que se imparte en los mismos. Y es fácil poner otros ejemplos. Porque quizá, de seguir la línea marcada por esta Ley, a partir de mañana pudiera parecer que con relación a los medios de información, la prensa concretamente, que recibe subvenciones del Estado, se pudiera instaurar el derecho del Gobierno a intervenir en el ámbito informativo, a limitarlo o condicionarlo imponiendo determinadas

restricciones. O lo mismo podría ocurrir con el derecho a la libertad sindical, que, por cierto, en la Constitución está en un artículo muy próximo, el siguiente al derecho a la educación; es decir, no creo que para el Grupo Socialista, por su concepción de la libertad sindical, aun a pesar de que se pueda admitir la posibilidad de subvencionar los Sindicatos, ello pudiera condicionar la determinación y formación de los órganos de gobierno de los sindicatos o de las actividades que puedan desarrollar los mismos; o, por ejemplo, la Iglesia española, cuyo clero depende económicamente de los Presupuestos Generales del Estado, y no es concebible que la actividad del clero español pueda verse condicionado por designación del Gobierno. Pues de la misma manera entendemos que queda perfectamente claro que los centros privados, sean o no subvencionados, tienen que tener unas características que los haga absolutamente independientes de los criterios gubernamentales, tanto de nivel de enseñanza que imparten como de control, salvo el económico, que exista en los mismos. Y convendría empezar fijando, y ese es el objeto de una de las enmiendas también, por qué no está definido lo que se entiende por centro de enseñanza extranjero. No hay determinado, no sé si el Grupo Socialista podrá hacernos alguna aclaración, qué es un centro de enseñanza extranjero. ¿Es un centro cuyo titular es una persona física o jurídica española que imparte enseñanzas de acuerdo con las normas de enseñanza de un determinado país para que a él acudan los extranjeros de ese país residentes en España? ¿O bien se entiende por centro extranjero un centro creado por un titular, persona física o jurídica, extranjero, en que se imparten las enseñanzas correspondientes a la legislación española? Creemos que en este tema de los centros extranjeros, que es objeto de otra de mis enmiendas, hace falta una mayor claridad, y nosotros creemos que hay una serie de preceptos a partir del artículo...

El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez Cascos, ha terminado su tiempo.

El señor ALVAREZ CASCOS: Mantengo también mis enmiendas a los artículos 24, 25 y 26, a las que no he hecho referencia.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alvarez Ruiz de Viñaspre. *(El señor Moreno Franco pide la palabra.)*

Dígame, señor Moreno.

El señor MORENO FRANCO: Para dar una respuesta breve a lo formulado por el Senador.

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Alvarez Ruiz de Viñaspre, me están pidiendo la palabra para un turno de réplica. Perdón por no haber preguntado por el turno de portavoces.

Tiene la palabra el señor Moreno.

El señor MORENO FRANCO: Con absoluta brevedad,

porque tampoco hay demasiadas cosas que replicar. Si acaso, unas puntualizaciones.

La primera es que se puede calificar a gusto de S. S. de pintorescas las intervenciones del señor Bayona; mas, si así lo hiciéramos, creo que, en todo caso, habría que reconocer que el Senador Bayona es coherente, porque algo de pintoresco lleva días sobrevolando en la Cámara.

En cuanto a lo de la zanahoria y el palo, en Andalucía no se hace eso con los niños; allí queremos mucho a los niños, se hace con los animales. A partir de eso, es imposible que nosotros quisiéramos seguir esa estrategia con el Grupo de S. S.

A nosotros no nos importa en absoluto comer bocadillos. Nos mantiene bien físicamente, nos preserva el sentido del humor e incluso nos permite darle al señor Alvarez de Eulate desde nuestras filas posiblemente la única satisfacción que tuvo en el día de ayer.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alvarez Ruiz de Viñaspre.

El señor ALVAREZ RUIZ DE VINASPRE: Señorías, continuando con el propósito de la enmienda y en espera de alcanzar la satisfacción de obra, que, al parecer, no creo que vaya a llegar, y entonces quedará nuestra voz como la voz que clama en el desierto, ¿qué más querríamos?, vamos a entrar por este camino, pero sin que cunda el desánimo, porque prueba patente es que la Cámara está dispuesta a aguantar todo, y me recuerda lo que ocurrió en un pueblo navarro, y si no lo digo bien el señor Arbeloa me podrá corregir, el pueblo de Lerín, cuando estaba asediado y llegaban las tropas y le preguntaban al capitán «¿qué hacemos?» «Si vienen mil, quietos en Lerín, pero si vienen mil quinientos, en Lerín quietos». Pues aquí está toda la Cámara dispuesta a aguantar.

Vamos a comenzar con nuestras enmiendas. Al artículo 10, donde dice «centros públicos», que son aquellos cuyo titular es de naturaleza jurídica, nosotros pretendemos que se diga «centros de enseñanza pública», y centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público, deseamos que se diga «centros de enseñanza de naturaleza pública».

En el artículo 12.1, donde dice «a fin de acomodarlos», nosotros decimos «a fin de adaptarlos». Estamos ante dos palabras que en un primer momento parece que significan lo mismo; pues no señor. Y conste que la palabra «acomodar» sí que tiene buena prensa. Cada día hay más gente que se acomoda y muchos que se incomodan, ¡no faltaba más!, pero acomodar y adaptar son palabras totalmente distintas. Hemos de analizar el contexto en que viene introducida la palabra. Cuando uno va al cine, naturalmente, el acomodador le acomoda, pero cuando uno sale al extranjero, y en aquellos tiempos en que salían las muchachas de servicio y luego fueron las corrientes migratorias, uno podía acomodarse muy bien, estar muy bien acomodado, pero muy mal adaptado. Es lo mismo que le pasa al organismo ante una situación con la que se enfrenta. Por eso hay un síndrome —y perdóneme que

sea yo y no el doctor López Hueso el que haga un poquito de formación profesional— llamado síndrome de Hanselli, en el que cuando un organismo se enfrenta a una situación tiene que responder de un modo especial y entrar en un síndrome de adaptación. Dejaremos las explicaciones técnicas, que no vienen al caso.

Pues bien, el artículo 12, dice: «... los centros docentes españoles en el extranjero tendrán una estructura y un régimen singularizados, a fin de acomodarlos a las exigencias del medio y a lo que en su caso dispongan los convenios internacionales...». El artículo 15 dice: «... en la medida en que no constituya discriminación para ningún miembro de otra comunidad educativa y dentro de los límites fijados por las Leyes, los centros tendrán autonomía para establecer materias optativas, adaptar los programas a las características del medio...». Pues muy bien, aquí exactamente igual: «... a las exigencias del medio...». Por tanto, aunque las palabras «adaptar» y «acomodar» pueden parecer lo mismo, creo que la palabra «adaptar» es más idónea en este contexto en que la introducimos.

El artículo 21.1 habla de: «... centros docentes privados...». Efectivamente, un centro privado es un centro educativo, pero en un centro docente se pueden impartir otras enseñanzas, porque la docencia comprende actividades de enseñanza o instrucción que no son meramente educativas, sino profesionales (un centro docente comprende la educación y la formación, pero también otras enseñanzas), por lo que quizá sea más correcto decir lo que nosotros proponemos en la enmienda: «... centros de formación y educación privados...»; además, «... no concertados...», porque tan privado es un centro privado en sí de los que así se llaman como un centro que está concertado sostenido con fondos públicos. Y como dentro de la Ley nadie se va a equivocar al leer, donde diga la Ley «centro público privado» se va a saber que es un centro que no está sostenido con fondos públicos. Pero, dentro de la misma Ley, el artículo 26 dice: «Los centros privados no concertados...»; es decir, también se les añade esa característica. Por eso consideramos que en todo lo que sean «centros docentes privados» habrá que añadir «no concertados» o «no sostenidos con fondos públicos».

He dicho que al leer la Ley nadie se va a confundir, pero luego va a haber publicaciones en Prensa, va a haber alusiones en escritos que vayan apareciendo y se hablará de centros públicos. Pedimos que se deje bien claro cuándo se habla de centro público, de centros de naturaleza pública y cuándo se habla de centros privados no sostenidos con fondos públicos, y la gente interpretará enseguida: Sí, es un centro concertado porque tal colegio es tan privado como puede serlo uno que no está sostenido.

En el artículo 25 dice: «... determinar el procedimiento de admisión de alumnos...». Efectivamente, la palabra «determinar» indica que hay que especificar el procedimiento por el que se va a admitir a los alumnos, pero la palabra «fijar» parece ser que constriñe un poco más, que concreta, porque si no, nos encontramos verdadera-

mente con una serie de juegos gramaticales que tampoco pueden expresar todo.

Es lo que pasa con el futuro. Aquí, en cuanto a los centros docentes se dice: «deberán», «se reglamentarán»; se deja mucho al futuro. No digo que quizá no tenga que ser así; empiezo a creer que el suyo es un Partido con mucho futuro, ya que veo mucho futuro en todos los artículos de la Ley; que así sea. *(Risas.)*

En el artículo 26.1, el Senador Alfonso Bar ya ha hecho alusión a que los centros privados no concertados podrán «establecer...». Nosotros proponemos: «... centros de educación privados...», y decimos: «... no sostenidos con fondos públicos, cuando lo consideren oportuno...». Efectivamente, un centro podrá establecer, pero, mire usted, estamos en lo de siempre; es dejar las cosas colgadas en futuro, mientras que «... cuando lo considere oportuno...» es dar más libertad a dicho centro para que en el momento en que él crea, motivado por las circunstancias o por todo aquello que pese sobre su determinación, pueda él, libremente, establecerlo; mientras que, por el contrario, «podrán», no es eso. Por ejemplo, se puede decir: «Usted viajará». «Sí ¿pero cuándo me da usted el billete?». Por tanto, consideramos que como queda en la enmienda quizá está mejor.

Yo sé que a todas estas enmiendas gramaticales y a estos juegos de palabras, como se les podrá llamar, se les puede decir que tanto da una cosa como otra, pero yo creo que no. Cuando íbamos a la escuela todos hemos leído aquello de que en el país de los ceros, el uno y el dos entraron; pronto el uno hizo dinero, pues los ceros los puso a su derecha. Muchas veces, según cómo se coloque una cosa u otra, verdaderamente tiene importancia y trascendencia.

En el fondo quizá sea otro tema, pero presentar enmiendas gramaticales, vuelvo a decir (y me alegra que se sonría el señor Presidente de la Comisión), no me sonroja, ni mucho menos, señores. Las traigo aquí y están amparadas en el Reglamento. Otros traerán otras enmiendas de más peso. Y les digo la verdad, si alguna sonrisa tiene que haber, acepto que todas las sonrisas que vayan a ir a las enmiendas del Grupo Popular se refieran a mí; las acepto por entero en la Cámara, las acepto por entero en mi región, las acepto por entero en la Prensa de mi región, acepto todas las sonrisas que puedan ir dirigidas a las enmiendas gramaticales.

Señores, quizá sea bueno hacer un ejercicio de humildad, porque yo he de decir la verdad, en mi contacto profesional, como cada cual en el suyo, nos podemos encontrar con personas más o menos preparadas, y verdaderamente lo que nunca puede hacer uno es despreciar a nadie. Yo soy cirujano y si me dicen que han ido a operar a un señor de úlcera de estómago y que le han cortado una oreja, lo primero que digo es que no sé lo que pasaría, pero que lo que le pasa a uno le puede pasar a dos. Por eso, nadie puede decir que tiene el título de ser más que nadie, porque en esta vida he de decir que el don del hidalgo es como el don del algodón, que para ser don necesita tener algo, y ese algo sólo se tiene con aquello que imprime carácter; lo demás son cosas pasajeras, co-

mo esta vida y como este cargo que ocupamos, que no imprime carácter. Somos lo que somos, ni más ni menos, y nadie se sonríe de nadie.

Muchas gracias, señor Presidente. El resto de las enmiendas quedan mantenidas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Amat.

El señor AMAT DE LEON GUITART: Señor Presidente, señorías, antes de iniciar la defensa de las enmiendas que tengo presentadas al Título I de la Ley que estamos debatiendo, y siendo generoso conmigo mismo, me voy a robar unos dos segundos para tratar de cubrir un error que se ha colado en la argumentación que se ha efectuado ante esta Cámara por el señor Ministro de Educación. El error se refiere al tema de los cheques escolares, que dijo que había fracasado en todo el mundo.

El señor PRESIDENTE: Señor Amat, ciñase a las enmiendas.

El señor AMAT DE LEON GUITART: Yo creo, señor Presidente, que es conveniente que los Senadores, a medida que vayamos interviniendo, si se desliza algún error, incorporemos la información necesaria...

El señor PRESIDENTE: Para eso hay un turno de portavoces. Ya ha dicho la Presidencia que iba a pedir a los señores Senadores que se ciñeran a las enmiendas y no consumieran el turno de portavoces en este momento.

El señor AMAT DE LEON GUITART: De acuerdo, entonces no cubro el error sobre el tema de los cheques escolares.

El Título I de la Ley es un Título de gran importancia, es un Título básico en toda la articulación porque en él se define lo que son los centros docentes, se distingue lo que son centros públicos o privados y se establece una regulación básica de los mismos.

Esta importancia exige que la expresión de su normativa tenga el rigor conceptual, la claridad expositiva y el estilo armonioso que el tema requiere.

En este orden de cosas, yo he presentado al Capítulo I cuatro enmiendas; las números 1.522, 2.406, 626 y 1.895. Asimismo, al Capítulo II hay una enmienda presentada, la 875, y al Capítulo III hay seis enmiendas; las números 1.255, 3.184, 2.152, 1.678, 1.646 y 2.124. Los textos de estas enmiendas aparecen puntualmente reflejados en el libro publicado al efecto por esta Cámara y voy a pasar directamente a justificarlas.

La enmienda 1.522 clarifica el concepto de «centros públicos» porque sustituye esta expresión por la de «centros de formación educativa de carácter público». Resulta notorio que la incorporación de la frase «formación educativa de carácter» califica y concreta el concepto de «centro», con lo cual la frase resulta mejorada en su comprensión.

La enmienda 2.406 trata de sustituir la expresión «cen-

tros extranjeros», que en sí puede incorporar una serie de equívocos, por la mayor determinación de «centros docentes extranjeros en territorio nacional». Es notorio que esta segunda expresión es más clara y concisa y, por tanto, mejora el poder de comunicación.

Esta línea de mejora se reproduce en la enmienda 626 al sustituir la expresión que figura en el texto del proyecto de Ley «Todos los centros docentes deberán», por la de «Todo centro educativo deberá forzosamente». La sustitución de la palabra «deberán» por la expresión «deberá forzosamente» incorpora un factor de imperatividad de mayor riqueza y rigor expositivo en el marco de lo que la Ley persigue.

Pasamos a la enmienda 1.895 en la cual proponemos que la expresión «para ningún miembro de la comunidad educativa» sea sustituida por la de «para cualquier individuo». Esta expresión es más rigurosa, desde el punto de vista de la personalización, que la que se propone en el texto del proyecto de Ley.

La enmienda 875 es tan evidente en sí que la doy por defendida con el texto que aparece en la misma enmienda.

En la enmienda 1.255 sustituimos la expresión «Centros docentes privados» por la de «Centros de educación privados no concertados». Al incorporar la palabra «educación», que sustituye a «docentes», y añadir «no concertados», el sentido de la frase queda notoriamente mejorado.

La enmienda 3.184 es del mismo tenor, por tanto, paso sobre ella. También es del mismo tenor la enmienda 2.152. Pero en la 1.678 tengo que hacer una puntualización, porque aquí la expresión «centros privados» se sustituye por la de «centros de enseñanza privados no sostenidos con fondos públicos». Sus señorías tendrán que reconocer que la incorporación de estas palabras supone una notable mejora comunicativa y, por tanto, un mayor rigor de expresión.

Con la justificación que aparece en el texto, la enmienda 1.646 queda suficientemente aclarada, por tanto, la doy por defendida.

Y llegamos a la última enmienda presentada a este Título, que es aquella en la que se pretende sustituir la expresión «Los centros privados no concertados podrán establecer», por la de «Los centros de educación privados no concertados, cuando lo consideren oportuno, regularán». Con esto, por una parte, se matiza la palabra «centros», y, por otro lado, se incorpora un elemento de liberalización al añadir la expresión «cuando consideren oportuno regularán». Evidentemente, el objetivo que han perseguido todas estas enmiendas es el de mejorar el rigor y la potencia de comunicación del texto del proyecto de Ley, porque, señorías, como ustedes saben, nosotros legislamos para los ciudadanos y éstos necesitan hallar gran claridad en los textos legislativos para que sean más comprensibles para ellos. Muchas veces se predica respecto de las Leyes una serie de virtudes, pero si se hace un análisis en profundidad de los elementos de expresión, resulta que estas virtudes son negadas por la interpretación literal de la Ley.

Para terminar —y simplemente a título de ejemplo— yo quiero decir que una de las virtudes que los que defienden el texto de la Ley han predicado respecto del mismo, es que allí se defiende la libertad de elección de centro. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay discriminación en el precio —como si se analiza la Ley se determina—, entonces yo cierro mi exposición formulando la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que haya libertad de elección de centro si existe discriminación en el precio y también un proceso de cuasi «dumping» al ocultar costes públicos en el servicio educativo?

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amat. Tiene la palabra el señor Añón.

El señor ANON LIZALDRE: Me encuentro, señor Presidente, con un dilema ante la defensa de alguna de estas enmiendas, porque quizá tendría que prolongar más este debate, ya que de una de ellas tengo que pedir que se vote por separado. Si la enmienda al artículo 21 de adición no se me aceptase tendría que retirar la 781, que es de supresión al artículo 23, y si ésta de supresión al artículo 23 se suprimiese, también decaería la 2.153 a este mismo artículo. En tal caso, voy a mantener todas mis enmiendas y según queden las votaciones, tendré tiempo de retirarlas o de mantenerlas. Voy a pasar directamente a la defensa de las enmiendas al Título I, que pienso que son interesantes.

En el artículo 10.2 solicito cambiar la expresión «centros públicos» por «centros de formación educativa de naturaleza pública». Yo creo que está muy bien, porque la expresión «centros públicos» tiene diversos significados, y quizá nos llevaría a ciertas ironías, algunas de las cuales se han dicho ya en esta Cámara. Sólo porque es una frase mucho más adecuada y mejor entendida mantengo la enmienda. La palabra «educativa» es imprescindible, y luego ya ampliaré por qué.

En la enmienda 2.407 al artículo 12, apartado 2, pido cambiar «centros extranjeros en España» por «centros docentes extranjeros en nuestro territorio». Ha dicho el Senador Alvarez Cascos que la expresión «centro extranjero» es muy confusa, pero esta enmienda tiene una defensa importante, ya que a la palabra «centro» es necesario ponerle un apellido, por eso yo en todas las enmiendas se lo pongo y digo: centro docente, centro educativo, centro privado o centro público, porque es mucho más adecuado.

Paso a la enmienda 625 en la que modifiqué «todos los centros docentes deberán» por «todo centro educativo deberá forzosamente». Insisto en que la palabra «educación» o «educativa» es totalmente imprescindible.

En la enmienda 1.896 al artículo 15 modifiqué «para ningún miembro de la Comunidad educativa» y pido que se diga «para cualquier persona».

En la enmienda 716, donde dice «sus reglamentaciones», yo digo «su respectiva normativa», porque en un puro castellano es de mejor estilo hablar de normativa,

que indica la norma, la regla, el camino a seguir, el espíritu a aplicar, su respectiva característica, y es una acepción más real y coherente que hablar de reglamento, que parangona más al fútbol que a la educación.

La enmienda 1.411 habla de que donde se dice «centros docentes privados», se debe decir «centros docentes privados no sostenidos con fondos públicos», porque encuentro que tiene mejor redacción.

La enmienda al artículo 21.3 es de adición y tengo la esperanza de que va a ser aprobada. Diría así: «La autorización para apertura de los centros privados corresponderá al Ministerio de Educación y Ciencia o a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente. Dicha autorización deberá concederse siempre que se reúnan los requisitos mínimos a que se refiere el artículo 14».

Decía que tengo la esperanza de que sea aceptada porque, estando como estamos en esta Cámara de las autonomías, pienso que sería un menosprecio a las Comunidades Autónomas y Forales privarlas de estas competencias a las que tienen derecho. De lo contrario, esta Ley, además de rozar la inconstitucionalidad, porque va en contra de la libertad de los padres, de los niños, de la sociedad, de los centros docentes, de la propiedad, de las atribuciones del director, de la libertad de cátedra, de la libertad de ideario, que es autogestionaria; además — digo — sería también una Ley centralista y centralizadora, porque la LODE, en este sentido, vulnera los Estatutos de Autonomía de las Comunidades al excluirlas de participar, de manera efectiva, en la programación de la enseñanza y de poder celebrar conciertos con titulares de centros privados. Este requisito puede estar muy condicionado por las circunstancias locales. Señores socialistas, ya que tenemos el apoyo de la Comunidad Europea, les pido y les ruego que admitan también este apoyo nuestro y cambien de actitud.

La enmienda 781, como he dicho antes, es de supresión y está condicionada a la aprobación o no en la votación correspondiente. También la 2.153 depende de si este artículo 23 se suprime.

En la enmienda 1.679, al artículo 24, cambiamos «centros privados» por «centros de educación privados no sostenidos con fondos públicos». Como he dicho antes, es importante introducir la palabra «educación», ya que en la escuela, a veces, se enseña sin educar, y adquirir conocimientos al margen de la educación, acepción más amplia, sería una incompleta formación. Educar no es sólo adquirir ciencia, sino adquirir y asimilar formas, maneras, comportamientos, conciencia de, sentido crítico, capacidad de síntesis y de discernimiento, y cultivar la inteligencia y el sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos.

En la enmienda 1.647 se habla de «alumnos» y yo digo «estudiantes», porque alumnos no es igual que estudiantes; podemos ser alumnos todo un año y no ser estudiantes o no haber aprendido a estudiar. Por eso creo que es mejor utilizar la palabra «estudiantes» que «alumnos».

La última es la enmienda 2.125, al artículo 26, donde cambio «los centros privados no concertados podrán es-

tablecer», por «los centros de educación privados no sostenidos con fondos públicos, cuando lo consideren oportuno, podrán fijar». La defensa es muy parecida a todas las que he hecho porque, insisto, es necesario introducir la palabra educación por la importancia que tiene. *(El señor Vicepresidente, Lizón Giner, ocupa la Presidencia.)*

Una persona puede ser muy inteligente y también le puede faltar educación. Es probable que en algunos sitios se digan palabras que no sean adecuadas y quizá no me hayan parecido muy adecuadas las palabras despectivas que nos ha dicho antes el señor Bayona. Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Arespacochaga, tiene la palabra para defender sus enmiendas.

El señor ARESPACOCCHAGA Y FELIPE: Gracias, señor Presidente. La primera enmienda, que es la 419 al artículo 9.º, pide que donde se dice «los centros docentes» se diga «los centros escolares». Parece que no es nada. Pues sí, señores, es algo y a mí me parece que por simple eufonía, que como saben ustedes era la armonía que daban los romanos a los textos completos y bien concebidos y explicados, en algo referente a la escuela yo hubiera puesto siempre «escolar». Primero me gusta más que la docencia; se pueden enseñar cosas muy malas en la docencia y normalmente no en la escuela. Tenemos un respeto a la escuela lo suficientemente grande como para ver de una manera automática, y casi como por reflejo, que donde dice «centros docentes» debiéramos poner «centros escolares».

Por otra parte, aunque en estos momentos se está hablando de que de estas enmiendas ninguna es importante, yo les aseguro a ustedes que entre las muchas peculiaridades de esta Ley hay una, y es que se refiere a la enseñanza. A mí me hubiera gustado que alguien en esta Ley hubiera agotado las posibilidades de una buena redacción. Yo perdono el que esta redacción esté muy lejos de ser un monumento a la buena sintaxis, simplemente porque los avatares que ha llevado su discusión, quizá las prisas de su redacción, al estar sujetos a determinados objetivos y nombres cuando se produjo dicha redacción han llevado a que cuando se ve con interés (y se lo digo a usted con el corazón en la mano, porque hay muchas formas de defender una enmienda sin llegar a esto, y a mí me va a faltar tiempo, se lo digo de antemano); cuando se ve con interés, repito, se nota que está muy mal redactada desde el punto de vista de la gramática, y que, al menos en algo que se refiere a la escuela, debíamos haber sido un poco más detallados en relación con la redacción y la forma que debía tener, y no estaría de más que si en este momento la mayoría no quiere discutir enmiendas que entiende que son puramente gramaticales y, por tanto, se van a votar sin necesidad de discutir las y sin que nadie las contradiga, alguien por ahí fuera capaz de corregir el texto, porque el texto así yo les aseguro a ustedes que va a salir muy mal, y entre otras enmiendas está la 419 que yo quiero defender.

Por otra parte, y tengo siempre cierto miedo no sabiendo cuál es el Presidente que tengo a la espalda...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Los criterios son los mismos, señor Arespacochaga. El Vicepresidente sigue los criterios de la Presidencia, porque no sustituye, sino que suple.

El señor ARESPACOCCHAGA Y FELIPE: Sí, pero la suplencia no suple a las personas. En cualquier caso, se tiene la cierta impresión —y lo he visto en algún compañero— de tener alguien con una porra preparada para cortarles a uno lo que pudiera interpretarse como que es salirse lo más mínimo del rumbo, y yo, que conozco que S. S. es una persona a la que le gustan los barcos y que conoce lo que es orzar y lo que es balizar, supongo que sabe que nunca se lleva el rumbo y que al menos hay cierta posibilidad...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Los buenos navegantes procuran llevar el rumbo fijamente y lo mejor posible con décimas de grado, así que ciñase a la cuestión, señor Arespacochaga.

El señor ARESPACOCCHAGA Y FELIPE: No son décimas de grados, porque eso no lo ve una brújula, pero sí se van dando siempre guiñados. Pero vuelvo al tema.

Aquí hay una gran historia parlamentaria, y todos los que hemos estudiado preceptiva literaria (y yo tuve un profesor parecido al que se sienta en el primer banco de la mayoría) sabemos que a dicha preceptiva se le daba mucha importancia. Yo aprendí muchos textos de Castelar, y recuerdo ahora uno que viene en la antología publicada, en el que, hablando de la esclavitud, decía: «¡Grande es Dios en el Sinaí! ¡El trueno le acompaña, el rayo le precede!» Y seguía.

Y supongo que hubiera sido absolutamente imposible que alguien hubiera empezado aquí con este texto, que es la antología y está en las escuelas, y cuando alguien estudie preceptiva literaria, esperemos que la libertad de cátedra no le dará a ese señor la posibilidad de que le quiten Castelar, porque sea uno de los que quieren hablar en telegrama; supongo que nos perderemos eso, y yo les aseguro a ustedes que merece la pena leerse todo el texto.

Pasamos al segundo punto, que es el de la enmienda número 902, que está hecha al artículo 10.1. En ella pedimos que donde dice «centros docentes», se ponga «centros de estudio». Estamos otra vez en el tema de la docencia, y yo vuelvo a decirles que, en función de lo anterior, aquí debería decirse «escolar». Y debo decirlo, simplemente, y vuelvo al «ritornello» constante, por respeto a las escuelas. No creo que sea extraño el decir aquí algo que yo considero importante. Estamos hablando lo suficiente como para decir una palabra en relación con los que son, por un lado, los depositarios, y por otro los que van a protagonizar esta Ley (sea buena o mala, pero la van a protagonizar ellos), que son los maestros de escuela.

He dicho muchas veces, y aquí lo tengo escrito, y apareció en el año 1974 en una publicación de «ABC», que quizá una de las dificultades de los españoles es que teníamos una mala educación en la escuela, y que los maestros debían estar mejor pagados que los catedráticos, porque entiendo que, en el momento en que tienen que ocuparse de los niños, lo que tienen que hacer vale más que cuando los catedráticos se preocupan en la Universidad de la gente formada. Eso está dicho por mí y lo sigo pensando.

Creo que, incluso, una de las graves dificultades que tiene la formación española y que nos lleva de repente a estas crispaciones (por alguna parte habrá que buscar nuestros demonios familiares) reside, precisamente, en que en el momento en que el niño, como una esponja, es capaz de coger y aprender todo, y que no se satura hasta que no empieza a declinar en su vejez, deberíamos tener dedicado a la enseñanza lo mejor de lo que existe en España, y la única forma es pagándolo, porque, por desgracia, hay gente perfecta pero que no está lo suficientemente pagada.

Quiero decir aquí (y no me parece un exceso que conste así), que desde hace mucho tiempo el modesto Senador que se dirige a ustedes ha pensado que el problema de España está en que nos falta respeto a los maestros, y creo que este es un buen momento para decirlo y cuando hablemos de «docentes» digamos «escuelas».

No quiero tampoco, y le agradezco al Presidente que me lo haya dejado explicar así, que dentro de los usos parlamentarios, como me refería antes...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Arespacochaga, ya que estamos hablando en términos náuticos, comprendo que el abatimiento y la corriente hay que tenerlos en cuenta, pero no me cambie usted el rumbo y ciñase a la cuestión.

El señor ARESPACOCCHAGA Y FELIPE: No quiero discutir con el Presidente, pero por lo mismo yo le rogaría humildemente que, como no hay discusión, sea lo más discreto posible en sus admoniciones.

Estamos en un Parlamento, que es un Senado, y yo me acordaré siempre (como todos lo que hemos estudiado latines, y al Presidente Fontán que sabía mucho más de latines que de náutica, le hubiera gustado hacer aquí alguna alusión) de la célebre cantilánica de Cicerón cuando dice: «¿Hasta cuándo, Catilina, abusaréis de nuestra paciencia?» Y era, simplemente, porque allí se admitía que un Senador hablara todo lo que quisiera. Eso era en el Senado romano, del que debemos aprender muchas cosas, entre otras los derechos, incluidos los constitucionales. Y en esta generosidad que había para hablar los Senadores había una cosa que era muy importante, y es que era una escuela de políticos.

Yo les aseguro a ustedes que he oído a personas que no había escuchado nunca hablar en estos bancos, y a personas que no había oído nunca hablar en esos otros, y les aseguro que este debate no es absoluto inútil, y que va a servir para una cosa importante: para que este Senado,

que ha estado durante mucho tiempo reivindicando en el aire, como el que pedalea en una bicicleta con una rueda levantada, diciendo que le den más fuerza, que se preocupen más de él, lo consiga, y se preocuparán más del Senado en la calle, aquí y en el banco azul.

Creo, por tanto, que no es contraproducente ni ineficaz lo que estamos hablando sobre este tema.

En la misma línea figura la enmienda siguiente. Se habla de: «los centros docentes en función de las enseñanzas que impartan»: estamos ante la misma situación que antes. No voy a gastar más tiempo en su defensa, puesto que creo que queda defendida en la explicación anterior, aunque si los Senadores del Grupo Socialista han decidido no contestar a las enmiendas, creo que, por la simple reacción de la línea de la mínima pendiente, que es una Ley mecánica que nunca falla, habrán renunciado también a leerlas. Por tanto, por qué voy a perturbarles explicando algo a lo que no quieren contestar.

Se dice: «situados en el extranjero». Alguien me ha dicho —yo entiendo poco de cuestiones jurídicas— que la precisión es muy completa, y en el extranjero tienen una organización distinta a la que tienen aquí y deben estar sujetos a lo que en cada momento se les pida, de acuerdo con la situación y el país donde están enclavados. Habría que hacer una variación y no decir pura y simplemente eso, tal como solicita la enmienda número 987, formulada al artículo 12.1, que mantengo.

La enmienda 739, referida al artículo 13 —supongo que el señor Presidente estará satisfecho de la velocidad que me imprimen sus admoniciones— propone sustituir, en resumidas cuentas, la expresión: «en el plazo máximo de un mes» por «en el transcurso de los treinta días hábiles siguientes». Aquí vuelve un pobre ingeniero a meterse en temas jurídicos, pero yo les aseguro a ustedes que siempre me acuerdo de la célebre distinción que existe entre el mes astronómico y el mes jurídico, y nos les cuento una historia a este respecto, porque me va a cortar el señor Presidente, pero yo les aseguro, señores, que con esta historia nos reiríamos todos. Por confundir lo que es un mes con lo que son treinta días, me armaron tal, que no tengo más remedio que acordarme en este momento de tal lance, que, por supuesto, excuso a ustedes de escuchar; me salió muy bien, pero todavía me estoy preguntando si no fue una intercesión astronómica o de los astros.

Así pues, propongo que se ponga en éste, como en todos los textos —hablamos en esta enmienda de la Ley, pero debería ponerse en todos los textos legales—: «en el transcurso de los treinta días hábiles siguientes». ¿Y por qué, en resumidas cuentas, insisto en esto? Les aseguro, y vuelvo a decirlo con el corazón en la mano, que, en otra ocasión, cualquiera de estas enmiendas —y admitanme esto al menos— habrían sido tenidas en cuenta, porque he presenciado discusiones —y recurro al «Diario de Sesiones»— en que enmiendas de mucha menos enjundia y discusión ortográfica han sido tenidas en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Admito que la forma en que se está llevando esta Ley conduce a situaciones especiales en cuanto a las observaciones a la misma, pero creo que

los Senadores deben tener la suficiente tranquilidad de espíritu como para aplicar a casos iguales normas iguales, y siento de verdad que el caso ortográfico esté sufriendo en este momento este desdén absoluto, que no se hubiera producido en otra ocasión cualquiera; aseguro que hay enmiendas propuestas que, en otras circunstancias, habrían sido aprobadas.

La enmienda 1.742, formulada al número I del artículo 14, propone que donde se dice: «deberán reunir», se diga: «deben alcanzar». Permítanme ustedes que les diga que, como quiera que se habla de unos requisitos mínimos, estimamos que, desde el punto de vista conceptual —no estamos hablando de gramática, ni de composición, ni de sintaxis—, el verbo «alcanzar» es mejor que el verbo «reunir». Porque no basta reunir los requisitos exigibles, sino que éstos deben tener un determinado nivel para garantizar esta calidad —que, por cierto, salió absolutamente virgen de alusión del Congreso de los Diputados y hay que reconocer que la única alusión a la calidad de la enseñanza se ha hecho precisamente en el Senado—, por lo que creo que el nivel se alcanza, no se reúne. Por tanto, debería decirse «deben alcanzar» y no «deberán reunir». Así pues, insisto en mantener esta enmienda.

La enmienda 1.453, formulada al artículo 15, propone sustituir «los centros tendrán» por «los centros disfrutarán de autonomía», puesto que tener es algo indicativo de posesión y, necesariamente, la posesión lleva al libre uso o utilización de lo poseído. Lo que hace falta es que los centros no sólo tengan autonomía, sino que estén facultados para usarla en los menesteres que el propio artículo cita. Por tanto, «disfrutar» siempre es mejor que «tener».

Por otra parte, en este tema es mejor aludir al disfrute que a la posesión. Estamos dando una libertad absoluta y uno de nuestros escollos es que queremos dar demasiada libertad a las partes y hay una, como en todos los componentes, que es común, que es en la que se producen las fricciones. Les aseguro que las fricciones se están produciendo —se lo digo con toda honestidad— en la zona de la libertad, no en la zona de disminución de la misma. Admito que cuando se da libertad a alguien, por fuerza se le está quitando a otro, pero precisamente por esa sutil diferencia, en la que la libertad no puede considerarse como daño a otros, es por lo que habría merecido la pena que hubiéramos estudiado un poco más.

Hay una teoría en matemáticas, la del cálculo infinitesimal, por la que se cogen las partes que se ven poco claras en una determinada escala y se analizan multiplicadas por cien o por trescientas. Bien habría merecido la pena que aquí, o fuera de aquí, nos hubiésemos puesto a pensar, de verdad, en esa línea de separación. Merecería la pena ser un poco menos toscos y no quedarnos tan tranquilos aludiendo a unas libertades sin pensar en otras.

A mí me importa «tres cominos», porque, en resumidas cuentas no pienso en mi futuro ni en el de mis hijos, que ya han pasado por la escuela, sino que estoy pensando en los hijos de muchos los que veo aquí, que son los que van a protagonizar el futuro. Dejando a un lado lo

que pudiéramos tener de diferencias, tendríamos que ser capaces de ponernos a discutir algo.

No tengo más remedio que referirme —y ruego al señor Presidente que no interprete que es salirme de la norma— a algo que al parecer, a través del Senador Bayona, nos ha llegado como una especie de contestación, no pública, a una oferta que hemos hecho.

No hace falta volver a decir que cuando se llega a un sitio para formalizar y solemnizar las cosas deben estar estudiadas antes. Esto está claro, para algo se monta una Ponencia y una Comisión.

Las manifestaciones me perturban tanto como a ustedes, porque cuando se producen, es que hay algo que es como el rechinar de los goznes: que está faltando el engrase suficiente o están mal calculados o no son coaxiales.

En casos como el de esta Ley, tanto en esos trámites como en otros— y no echo la culpa a nadie—, hubiera preferido que se hubiera «cogido al toro por los cuernos», en vez de empezar por decir que aquí no se discute nada mientras no estemos con las puertas cerradas, como si estuviésemos en votación, que no se discute más que aquí; debo decirles que eso a mí no me parece bien, porque hubiéramos tenido que ponernos a dialogar. Como saben ustedes, en todos los Parlamentos del mundo, las cosas no van consensuadas —es una palabreja que no me gusta—, pero sí habladas.

En estos momentos me acuerdo de su Presidente (por cierto, dicen que hoy es su cumpleaños y yo le deseo un buen día) que en el muro de Berlín dijo: «Este muro le echo abajo yo con el diálogo». Yo tengo el firme convencimiento, porque creo en su honestidad, de que pensaba, de verdad, que había que dialogar para echar ese muro abajo; había que dialogar, pero no monologar.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Arespacochaga, le queda un minuto para terminar su disertación. Se lo digo a fin de que no le sorprenda la luz roja.

El señor ARESPACOCCHAGA Y DE FELIPE: El diálogo sería bueno y me gustaría que alguien entendiera que intentamos dialogar un poco antes, porque después, cuando ya el muro esté hecho, será muy difícil echarlo abajo.

Creo que ese diálogo hubiera sido bueno, pero no se puede producir aquí, porque el diálogo es entre dos y ¿saben cuántas posibilidades tenemos aquí de entendernos dos a dos?: 67 trillones de posibilidades, lo que imposibilita el diálogo. Es por eso por lo que lo estamos pidiendo, no para pedirles algo —para lo que sepa el pueblo y la opinión pública, como lo van sabiendo—, sino para ver si nos podemos poner de acuerdo y si somos capaces de abrir el libro para verlo.

Como veo que se me enciende la luz roja y no quiero excitar al señor Presidente, al que agradezco de todas maneras su generosidad, quiero decir que las enmiendas 705, al artículo 17; la 388, al artículo 18; la 115, al párrafo 1 del artículo 20; la 1.830, al artículo 21.1; la 666, al

artículo 22, párrafo 1, y la del artículo 23, que no me ha dado tiempo a defenderlas, las mantengo.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Le advierto, señor Arespacochaga, que tenemos la relación de todas sus enmiendas.

El señor ARESPACOCCHAGA Y FELIPE: Por si acaso puede haber error, señor Presidente, que en esta Ley hay muchos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): La benevolencia de la Presidencia ha sido porque, como usted es portavoz de su Grupo, comprendo que le resulte difícil salir a defender enmiendas y no entrar en funciones de portavoz.

El señor ARESPACOCCHAGA Y FELIPE: Me ha sido muy fácil y muy agradable.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Para turno en contra, tiene la palabra el señor Bayona.

El señor BAYONA AZNAR: En aras de la precisión que el señor Arespacochaga acaba de pedir a la hora de redactar la Ley, simplemente precisar que la cita de Cicerón «Quoque Tande Catilina quoque tande» no creo que sea aplicable a este Parlamento, puesto que Cicerón la decía cuando Catilina estaba conspirando fuera del Parlamento. *(Aplausos.)*

El señor ARESPACOCCHAGA Y FELIPE: ¿Puedo contestar, señor Presidente?

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): El tema no tiene la suficiente relevancia, señor Arespacochaga.

Tiene la palabra el señor Arias Cañete.

El señor ARIAS CANETE: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, a lo largo de este debate me han sorprendido infinidad de cosas, pero una de las que más me ha sorprendido ha sido el doble rasero que utiliza el Partido Socialista para medir sus comportamientos y los comportamientos ajenos. Cuando el Senador Laborda intervenía ayer, calificando la actuación de nuestro portavoz, se sorprendía desagradablemente por el hecho de que se tildara al proyecto de que en alguna zona rozaba la Constitución. Sin embargo, por lo visto, el señor Laborda no se acuerda de que, después de que salió de esta Cámara el Estatuto de Centros Docentes, el Grupo Socialista interpuso recurso.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Usted no es portavoz, señor Arias Cañete. Con usted no puedo ser tan flexible.

El señor ARIAS CANETE: De acuerdo, señor Presidente. El doble rasero está claro, no obstante.

Dada la admonición de la Presidencia, me ceñiré al

tema y defenderé con toda precisión la enmienda 2.408, al artículo 12, apartado 2. Nosotros proponemos incluir la palabra «educativos» entre el término «centros» y «extranjeros». Y la enmienda tiene su razón de ser, aunque SS. SS. pueden tener hambre en estos momentos.

En el apartado 1 del artículo 12 se califica a los centros españoles con el calificativo «docentes». Se dice «Los centros docentes españoles». En el apartado 2 se habla de centros extranjeros, sin especificar de qué centros puede tratarse. Nuestra enmienda propone algo muy lógico, que es incorporar el calificativo «educativos» para precisar a qué se refiere el contenido del artículo. «Educativo», según la Real Academia Española, es «perteneciente o relativo a la educación». Y es un sinónimo de docente, que evita la reiteración y completa el sentido de este artículo. Entendemos que ésta es la típica enmienda perfectamente admisible, y que, si no se admite, es por la decidida voluntad de no hacerlo, con lo que se pone de manifiesto el doble rasero, a que antes aludía, del Partido Socialista, que admite sus enmiendas análogas a ésta y, sin embargo, las nuestras, sistemáticamente, las rechaza.

Siguiendo con este iter lógico, quiero defender la enmienda 785, al apartado 2 del artículo 20. En realidad, hay un error, porque no se pide la supresión de todo el apartado 2 de dicho artículo 20, sino del inciso segundo del apartado 2. Queremos eliminar la frase «En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento».

Es una enmienda que tiene una fundamentación absolutamente clara, que es que resulta inútil la redacción que contiene el precepto que propone el Partido Socialista. Es inútil reiterar en una Ley Orgánica de desarrollo de la Constitución, textualmente, lo que la propia Constitución establece. El artículo 14 de nuestra Constitución dice: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Y en este texto, que se supone que es una Ley Orgánica de desarrollo del artículo 27 de la Constitución, no se desarrolla nada, sino que se copia literalmente la Constitución. Y es muy conocida por todos los juristas de esta Cámara la sentencia del Tribunal Constitucional, que reitera sistemáticamente que la reproducción en normas de rango inferior de preceptos constitucionales es una práctica deficiente, porque induce a confusión en el administrado, ya que puede presumirse que, al estar un precepto en una Ley Orgánica, puede ser modificado.

Y este precepto no se puede modificar, porque es de tipo constitucional, y su simple reiteración en este artículo 20 constituye una esterilidad de desarrollo normativo. Y eso es lo que defiende nuestra enmienda 785, quedando así defendida, señor Presidente, ciñéndome absolutamente y desviándome tan poco como un piloto automático puede permitir desviarse en un barco...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gijer): Le agradezco su postura, señor Arias Cañete.

El señor ARIAS CANETE: Es que es lógica. El piloto automático es mucho más perfecto que la mano del hombre, y yo trato de seguir como un piloto automático, para que la Presidencia quede complacida con mi intervención.

La enmienda 1.648, al artículo 25, propone suprimir la palabra «alumnos» por las palabras «... estudiantes en el centro...».

El señor Arespacochaga ha defendido, de alguna forma, una enmienda similar a ésta, pero esta enmienda es más completa y tiene su fundamentación. La palabra «alumno», según el Diccionario de la Real Academia Española, supone cualquier discípulo respecto de su maestro o de la escuela, clase, colegio o universidad donde estudia. Sin embargo, el artículo 25 no está previendo el supuesto de un alumno que esté en una escuela, sino que regula el procedimiento de admisión de una persona que quiere incorporarse a una escuela. Por tanto, mucho más técnica que la palabra «alumno» sería la palabra «estudiante».

A continuación, voy a defender conjuntamente las enmiendas 1.412, 2.523, 2.154 y 1.680, así como la 2.126, que propone sustituir la expresión «... centros docentes privados...» por «... centros de formación y educación privados no sostenidos con fondos públicos...». La filosofía que preside esta enmienda es clara. En el artículo 10 del proyecto de Ley se clasifican los centros en tres categorías: públicos, privados y concertados. Los centros privados se definen como aquellos, por contraponerlos a los concertados, que no están ni sostenidos con fondos públicos. Nosotros entendemos que si los centros concertados, que son los centros privados sostenidos con fondos públicos, están regulados en el Título IV, y en el Título I, Capítulo III, se regulan los centros privados, que se complete la redacción y, en lugar de hablar de centros docentes privados, se definan por la característica que les es esencial, según la filosofía socialista, que es el hecho de no estar sostenidos con fondos públicos. Es una enmienda sistemática, que mejora la filosofía del proyecto.

Quiero terminar haciendo dos consideraciones finales. En primer lugar, decir que voy a retirar las enmiendas 1.524, 1.897 y 624, al artículo 14.

En segundo lugar, quiero señalar que si sigue este procedimiento, evidentemente la Cámara puede aprobar esta Ley, pero para que las Leyes sean duraderas tienen que arraigar y ser asumidas por la gran mayoría de la sociedad; porque las Leyes, señoras y señores Senadores, tienen una prueba de fuego en la que se cumplen o se destrozan y se infringen con perjuicio del ordenamiento y del órgano legislador, y esa prueba es su aplicación, su puesta en práctica y no meramente su vigencia jurídico formal.

Esta Ley, que están ustedes manteniendo como cuestión de Estado, sale con mucho lastre y lleva en las alas de su corto vuelo el plomo de la transitoriedad del Go-

bierno de la mayoría que la pretende aprobar. Estas palabras las dijo en su día, referidas al Estatuto de Centros, el Vicepresidente don Alfonso Guerra. Desgraciadamente, siguen ustedes por el mismo camino.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muchas gracias, señor Arias.

Se suspende la sesión hasta las cuatro y treinta minutos de la tarde.

Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y media de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el señor Baselga para la defensa de sus enmiendas, por veinticuatro minutos.

El señor BASELGA GARCIA-ESCUADERO: Señor Presidente, señorías, quizá sea un motivo para agradecer la puntualidad y la presencia, con permiso del señor Presidente, pero es cierto que el tener veinticuatro minutos con un título por delante para discutir, al que he presentado 24 enmiendas, tiene unas ventajas; unas ventajas por el hecho de que se van a producir, y pretendo que se hagan, unos contrastes de pareceres, y discutir así algunos temas de fondo con la tranquilidad de la tarde.

El otro día me tocó hablar con el cocido «in memoriam», y hoy lo tengo que hacer con el cocido «dentro». Esto es más complicado, pero atempera mucho la pasión en lo que estamos discutiendo.

Hay algo que es cierto. Al empezar el debate sobre un Título completo estamos de acuerdo en algo que ya es importante. Hay, y aparecen en el Título, tres tipos de capítulos que atañen a unas disposiciones generales, a unos centros públicos y a unos centros privados, y esto, quizá, sea lo más importante, el mensaje en una exposición en que pretendo sacar algo positivo o que, por lo menos, se aclare completamente cuál es nuestra postura ideológica, y siendo enormemente conscientes de que la ideología siempre está por delante, intentando modificar la realidad, intentamos influir en un sentido, buscando algo que fue posible —que ya en mi sangre familiar existe— y que es llegar en algún momento a un pacto en temas tan importantes como éste, porque creo que, independientemente de nuestras posturas, se puede llegar.

A este Capítulo I, de disposiciones generales, y dentro de las enmiendas que después iremos viendo detalladamente, hay unos puntos que queremos corregir, peinando, quizá, el dibujo completo de lo que en la Ley aparece.

Buscamos en las enmiendas una definición exacta de lo que van a ser esos centros públicos y privados, marcando una diferencia, que creo que es importante y completamente necesaria, y más en un momento en que quizá en la susceptibilidad de la Cámara hay matices y discusiones que hacen que la aproximación que todos queremos sea más difícil.

Después aparece, y verá detalladamente, algo impor-

tante, que es la primera vez que se va a discutir aquí. Estamos, creo, de acuerdo en que hay que financiar una enseñanza privada; pero ¿qué se financia?

Yo entiendo que lo que se quiere financiar, y estamos todos de acuerdo, es a ese alumno, a esa familia, a esas personas de la sociedad, para que puedan elegir libremente el centro que quieran. Esto, quizá, cambia mucho el punto de vista de todo el debate que hemos estado llevando aquí hasta ahora. No se financia el centro privado, se financia por la vía que sea, esto es lo que podemos discutir, y en lo que quizá tengamos matices distintos, se financia, digo, al alumno, a la familia, para que esa familia haga la elección que quiera.

Al mismo tiempo, nos preocupa, y creo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de lo que se ha hablado aquí, la calidad de la enseñanza. En este aspecto hemos presentado unas enmiendas a este Capítulo I, en las que volvemos a resaltar, y dejamos más claro, esa preocupación por la calidad de la enseñanza.

Por último, algo que entiendo es nuevo en la aproximación que se ha hecho hasta ahora. Todos somos conscientes de que en la aproximación que se haga a un modelo de educación, el futuro está por delante, y las cosas, con su cambio y con nuestro cambio, tienen que evolucionar en el tiempo y tienen que cambiar. Estamos de acuerdo en eso, y le sorprende a este Senador que no haya aparecido ninguna posibilidad en esta Ley de que, precisamente, amparados en esa capacidad de financiación por parte de un Estado y de una Administración a una enseñanza libre para todos, no se haya tenido en cuenta una posible apertura a una experimentación de futuros métodos, de futuras aproximaciones, de futuras ideas, que estoy convencido tienen que aparecer en enseñanza.

Por eso, analizando enmienda a enmienda, en este Capítulo I, aparece al artículo 10 una definición de quiénes son aquellos que pueden crear centros públicos. La enmienda 3.624 hace referencia a un cambio de este artículo 10, apartado 2.º, en el sentido de que se defina perfectamente que exclusivamente aquellos organismos gestionados por una Administración pública con competencia educativa sean los que puedan crear centros públicos. No es lógico, y creo que con esta comparación que voy a hacer aparece claro el sentido que tiene esta enmienda, no es lógico que, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencia pueda crear acuartelamientos, ni que otros Ministerios puedan crear centros públicos. Vamos a definir concretamente quiénes son los que pueden crear centros públicos, y yo entiendo que el Ministerio de Educación y Ciencia debe ser el único que tenga capacidad para crearlos. En ese aspecto aparece una enmienda que cambia el apartado 2.º de este artículo 10. Hay una enmienda posterior del tema de fondo, que ya he citado al empezar mi intervención. El Estado no sostiene con fondos públicos los centros. Nosotros pretendemos —y creo que está en el espíritu de todos— que realmente el Estado lo que haga sea dotar a las familias, al alumno, en definitiva, a la sociedad educante española, de la capacidad de libre elección. Luego ese mecanismo de financiación del centro privado, aunque en el debate —y aquí sí aparecen

dos aproximaciones al problema completamente distintas— discutamos el método y la forma, es al alumno, y es el alumno el que sale beneficiado en su proceso de elegir educación. Por eso proponemos que en el apartado 3.º de este artículo 10 se sustituya «los centros privados sostenidos con fondos públicos» por «los centros privados que escolaricen alumnos financiados con fondos públicos». En esto entiendo realmente que nos estamos aproximando —y este es un tema de fondo— a un objetivo común, que ha salido ya de las bocas socialistas, y creo que de las nuestras, y es que se puede producir una aproximación y una definición total de lo que todos queremos y buscamos.

En este mismo Capítulo, en el artículo 11, hay una enmienda formal, que voy a mantener, porque centros integrados son aquellos en que ya se ha producido la integración. Si ustedes se detienen a considerar este artículo 11 verán que precisamente el apartado 2.º hace referencia a que se integren esos centros que recogen varias de las funciones o tipos de enseñanza que se pueden impartir en los cuatro niveles que define la Ley; luego, lógicamente, no tiene sentido integrar algo que ya lo está. Entendemos más bien que los centros complejos, que son los que tienen estos tipos de enseñanzas, más de una, se integren, vía Ley, a cumplir una normativa.

El artículo 12 de esta Ley hace referencia también a esos centros en el extranjero, y aquí hay algo que a este Senador le preocupa y cree que esta preocupación está en la mente de mucho personal docente. Creo que leyendo escuetamente nuestra enmienda se va a entender, y con el permiso de la Presidencia, la voy a leer. Hace referencia a que estamos en una situación, y más en este sector de la enseñanza, en que el paro es algo que está en la mente de todos.

Vamos a garantizar —con esta enmienda se pretende—, con el cuidado exquisito de los legisladores que estamos en estas Cámaras, que a nuestro personal docente le vamos a dar la máxima capacidad de trabajo, en donde podamos hacerlo.

El apartado 1 bis se propone diga lo siguiente: «Estos centros se dotarán con profesores numerarios en régimen de comisión de servicios, por un período de tres años, renovable por una sola y única vez». La razón es garantizar una posible salida a nuestro propio personal docente, y la segunda razón, de «una sola y única vez», es porque si enseñamos fuera, y lógicamente entiendo que en muchos de estos casos se enseñará a hijos de nuestros emigrantes, a hijos de nuestras familias, vamos a enseñarles con personas que tengan una conexión con España.

Personalmente he vivido una experiencia de este tipo por una salida de nuestra querida nación que hice por motivos laborales, y pienso que si esa salida es por más de tres años, se produce una desconexión total de la sociedad y del sistema educativo. Creo que esto lo corregiría y dejaría muy contento a un gran sector, que está expectante, no solamente de que hagamos una Ley, sino que, además, les busquemos una posibilidad y una salida de trabajo.

Hay otra enmienda, en la que me permitirán hacer uso

del humor. Se trata de cambiar «ajustarán» y «regir». Siento que no esté aquí mi querido amigo el Senador Nalda, porque le diría que indiscutiblemente hay un cambio lógico en que los centros extranjeros no se ajusten, sino que se rijan. Le diría con humor y con gracia que yo me ajusto el pañuelo —de vez en cuando se mete conmigo— o me ajusto la corbata, pero que no me la rijo. Entiendo que «regir» es palabra de Ley y «ajustar» es palabra de otra cosa. La corrección formal va en ese sentido, sin más importancia. Creo que así se mejoraría el texto de la Ley.

Al artículo 14 hay una enmienda, señor Presidente, que voy a retirar, que es la 1.725. Aparece también una preocupación constante por algo que hemos reflejado en nuestras intervenciones, que es la calidad de enseñanza. Nosotros añadimos algo más a ese párrafo segundo, y pedimos algo más que entendemos va a colaborar a que la calidad de enseñanza sea mejor. Pedimos que se identifique en la Ley —y así se añade— un número mínimo y un número máximo de puestos escolares por centro, una instrumentación pedagógica, que tenemos que ser conscientes de que hay que cuidar y tenerla muy en cuenta, y una adecuación de servicios complementarios a las propias necesidades. Esto es un mínimo más que nos va a garantizar, en nuestro sentir —y entiendo que es perfectamente admisible—, que ese concepto de que la calidad sea igual, sea cual sea el centro, la vamos a mantener a toda costa; por eso lo incluimos en estas disposiciones generales.

A este mismo artículo hay otra enmienda que creo que define completamente y aclara nuestra postura. Es un nuevo apartado 3 que diga lo siguiente: «Estos requisitos —lógicamente se refiere el artículo a los requisitos que definen esos mínimos que dan la calidad de enseñanza— serán exigidos con el mismo rigor tanto a los centros públicos como a los privados». Vamos a definir algo que es importante, y aquí hay una cuestión de fondo; vamos a hacer —somos los primeros que lo queremos— una educación para todos, que puedan elegir todos los que quieran, el lugar que quieran y donde quieran ser educados. Pero es importante cuidar algo, que nos ha preocupado y nos preocupa; para ello, permítame SS. SS. que haga una comparación con la economía. En este caso no queremos repartir mal, sino hacer todo bien para que lo que tengamos sea todo bueno. Para eso hay que crear, y para eso también hay que ser conscientes de que hay una pregunta normal y lógica a hacer, sin religiones por medio, sin ideologías por medio, a la sociedad española sobre qué cree que es mejor a nivel de enseñanza, si la pública o si la privada. Contestan en mayoría que es mejor la privada, y yo quiero que contesten que las dos son iguales.

El artículo 15 de esta Ley tiene unas enmiendas también de supresión de algunos párrafos que inciden otra vez en el tema, conscientes de la realidad, que ustedes tantas veces nos dicen, sobre si ya aparece en la programación general una serie de materias optativas, y existe una dificultad de la que soy consciente: que en los centros públicos, con los horarios, con las actividades, con

los profesores, es muy difícil, muchas veces, impartir las propias materias optativas que ya están en la programación general. Nos parece irreal, nos parece fuera de concepto el que encima se garantice que cualquier centro pueda impartir otras materias optativas.

Hay otra enmienda a este artículo, la 3.630, que realmente yo entiendo que es importante. Se añade un artículo 15 bis completo, al que hacía referencia también al iniciar mi exposición.

Nosotros y ustedes, señores socialistas, presumimos —y soy consciente y presumo de ello— de ir a la sociedad del año 2000, con una concepción nueva y con una ilusión grande en hacer un país como el que estamos haciendo, con esa característica democrática de la importancia que se ha reflejado en los debates que hemos tenido ayer, en que discutíamos de fondo, pero se discutía con una pasión, con una amistad y con un reflejo que nunca se había concebido posible años atrás, pero nos hemos olvidado que en la enseñanza, como en todo, las reglas no son fijas y hay que experimentar. Y ésta es la gran posibilidad, es el gran momento que tenemos, y se incluye un artículo nuevo que lo pide, que pide que exista la posibilidad de crear unos centros en que se experimenten métodos, en que los alumnos que vayan, vayan completamente conscientes de ir a un centro experimental —en el apartado 2 de esta adición se especifica—, y que vayamos probando sistemas, porque indiscutiblemente sabemos que en enseñanza, como en todo, hay que evolucionar. Yo estoy completamente convencido de que habrá que cambiar muy deprisa y que hay que probar para cambiar, como se hace en cualquier ciencia, y la pedagogía, en este nivel, es una ciencia.

En el Capítulo II se mantiene también un paquete de enmiendas que consideramos importantes.

Aquí queremos evitar —siempre pendientes de la calidad— que se produzca todo tipo de discriminación a la hora de acceder a estos centros públicos. Y, sobre todo —y es curioso lo que ustedes me van a oír—, defender la garantía de ese alumno, que también en estos centros, como en todos, pueda participar al nivel que la Ley le permite.

Y aparece una serie de enmiendas, una de ellas al artículo 18, que es meramente de corrección de estilo. Pues verán ustedes que en este artículo 18 se hace siempre referencia a centros públicos y aparece —entiendo que por error— la expresión «centros docentes» en un lugar que yo entiendo que hay que cambiarlo, que es en el párrafo segundo, para que realmente el artículo cumpla la misión que tiene, que es referirse a lo que se refiere.

Y ahora, permítanme —sin perder el fondo de la discusión— que les recuerde a ustedes a esas pequeñas viejecitas de los chistes de ese maravilloso humorista que es Forges, ya que tengo una posibilidad parlamentaria de un pequeño pataleo en la venganza del que ataca desde Numancia y resiste. Porque fíjense ustedes —y acéptenlo como tal broma— si es importante que se quiten las palabras «en su caso», por aquello del artículo 1.º

Pues bien, imagínense ustedes a esas dos viejecitas que hablan y dice una a otra que el misterio 2.397 es que el

Grupo Socialista ha admitido una enmienda al Grupo Popular, y le contesta una: «¿En su caso?» Y le dice la otra: «No, en los supuestos previstos». Pido que se ponga «en los supuestos previstos», si ustedes quieren aceptarlo por aquello de la satisfacción personal, y pido que se quite «en su caso».

Y siguiendo otra vez con la seriedad en la discusión, en el artículo 20 admitimos una serie de cambios que entiendo que son importantes.

Una Ley debe ser objetiva al máximo porque, como tal norma actúa. ¿No creen ustedes que realmente un índice de valoración, a la hora de hacer una elección, son los ingresos brutos y no la situación socioeconómica? El tema no es tan simple. No es un tema de forma. En la interpretación socioeconómica del problema, en una Ley que garantiza en sus artículos que la financiación se hará a todos los españoles para que puedan acceder sus hijos a la enseñanza que quieran, el mantener un criterio subjetivo de estas características permite una serie de operatividades por parte de la Administración en cada caso, sea el que sea, que entendemos que una Ley no debe permitir.

A este mismo artículo 20 hacemos un cambio en los criterios de admisión, porque entendemos también que ya ampara la Ley, y lo ampara en su Título Preliminar, la garantía de que todos los españoles —y el Estado les va a suministrar los fondos necesarios— tienen el mismo derecho para la educación.

En este caso concreto resulta que ponemos una serie de criterios prioritarios de elección y entendemos que puede ser «en su caso», pero según nuestra idea, el primero de ellos es la libre elección de la familia. Los demás se acoplan, eso sí, ya numerados y especificados, buscando determinismo en la Ley, que es una de las cosas de las que yo, particularmente, pienso que adolece, buscando una claridad mayor en aquello que estamos legislando.

Al Capítulo III, de los centros privados, mantenemos también, y mantengo, una serie de ideas que, en este caso, para mí y creo que para ustedes, supone el eliminar la susceptibilidad de los centros privados que ustedes piden y, de hecho, en el debate surge muchas veces, al decir nosotros que adolece en el caso de los centros públicos.

Yo pretendo, y es mi deseo, que sea perfectamente clara la información que tienen los padres a la hora de hacer la elección de la enseñanza para sus hijos y, en esos casos, sí que me opongo, y por ello presento la enmienda e incluyo concretamente en el artículo 22 una preposición, unas palabras que son definitorias. El ideal de ese centro no es que sea puesto en conocimiento de... Debe ser puesto, en todo caso, en conocimiento de sí es un centro privado.

Nosotros creemos que lo mismo, sea privado o sea público, debe estar completamente claro el ideal del centro, para que todo el mundo pueda acceder a él completamente informado.

Aparece también una enmienda al artículo 23, que vuelve a ser motivo de la susceptibilidad de muchas de las discusiones que tenemos, y que no nacen, y es un

hecho del que ustedes son conscientes, muchas veces del texto de la Ley, sino de la propia ambigüedad de la misma, que nos hacen sospechar que en su desarrollo —y perdonen lo vulgar de la expresión— ustedes tiran a lo suyo y nosotros intentaríamos, en su caso, tirar a lo nuestro. Y eso es lo que no queremos. Eso es la base, precisamente, de plantear el tema y, de ser posible, un pacto.

En este caso y en esta enmienda los centros docentes privados se someterán a una definición clara. Hay centros concertados y vamos a definir los centros docentes privados no sostenidos con fondos públicos, porque a lo largo de la Ley, y en este Capítulo III, aparecen sin identificarse, como si hubiese miedo en identificar centros públicos, centros privados concertados y centros privados. Si no tienen nada que ver con la Administración y, en cambio, sí entiendo que se les pueda legislar un cierto tipo de estructura o de normativa, ¿qué hay que hacer para realmente saber qué es lo que hacen los centros privados? Eso es lógico, eso hay que hacerlo y ahí está la enmienda.

El artículo 24 tiene dos enmiendas. También vuelvo a lo mismo; vuelvo a intentar, por parte de todos, que clarifiquemos totalmente cuál va a ser la postura de cada centro. ¿No les parece a ustedes que el punto segundo que define esta materia no lo hace tan claramente, y por eso yo pido que quede claro para todos y nos evitemos problemas posteriores?

Dice así: «Los centros no obligatorios podrán ser clasificados, en función de sus características, en libres...», apartado a) y el rendimiento educativo de los alumnos habrá de ser evaluado por los centros públicos. b) Centros concertados. El rendimiento de los alumnos será evaluado por Tribunales mixtos constituidos en el propio centro, e integrados por profesores de estos centros y de los centros públicos. c) En los homologados la evaluación corresponderá a cargo del profesorado de los propios centros.

Con esto hemos finalizado el tener que seguir desarrollando legislativamente, el que la Administración tenga que intervenir más veces, en cómo tienen que hacer las cosas en el centro. Es la precisión que podemos sacar de esta Ley, y esa es la precisión que pedimos. Somos conscientes de que, precisamente por ideología, con el mismo fin, en la misma precisión, tengamos aproximaciones distintas que puedan permitir el que se llegue a un término medio.

En este artículo 24 hay otra enmienda que tiene también importancia, aunque sea únicamente el cambio de una palabra. Dice el texto: «... las condiciones mínimas en las que se deban impartir...». Hay que cambiar «por las condiciones mínimas necesarias...» porque indica algo incluido en la voluntad. No queremos que los centros tengan condiciones mínimas, y tal como está redactado el artículo parece que lo que estamos haciendo es que los centros tengan condiciones mínimas para empezar a funcionar. No, esta Ley va a aplicarse y espero que así ocurra, aunque sabemos de las dificultades y de los problemas y de lo mucho que hay que hacer; esperamos que haya de aplicarse en casos limitados y porque realmente

haya que acudir a ella, y no sea una condición que haya que revisar para poder tirar hacia adelante.

Veo, señor Presidente —muchas gracias—, que se me enciende la luz, y quería únicamente acabar con algo que creo que es importante. Nada se pierde en este debate. Yo, indiscutiblemente, estoy disfrutando inmensamente de la vida parlamentaria en él, y estoy completamente convencido, queridos Senadores amigos socialistas, de que podemos llegar a un acuerdo. Se ha hecho antes. Vamos a llegar al acuerdo. Nos tienen a su disposición. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Mis felicitaciones al señor Baselga por lo bien que lo está pasando. *(Risas.)*

¿Turno en contra? *(Pausa.)*

Señores Senadores, esta Presidencia hace ya meses indicó que no era conveniente fumar en el salón de sesiones, que el techo se estropeaba, etcétera. He visto que en lo único que están de acuerdo los miembros del partido del Gobierno, de la oposición y de los grupos minoritarios es en fumar unos largos vegueros, después de comer, en este salón. Algunos Senadores que no fuman se me han quejado seriamente, y creo que hay algún Senador que ha tenido que ser dado de baja como consecuencia del humo. De modo que indico a los señores Senadores que en lo sucesivo, esta tarde va no, pero a partir de mañana, en Plenos tan largos solamente permitiré fumar en las votaciones. *(Aplausos.)*

Gracias. Los debates se pueden escuchar desde fuera, si se quiere fumar, y también si se quiere fumar y no escuchar el debate, que será el caso de muchos Senadores, pueden pasearse por el Salón de Pasos Perdidos.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: ¿Me permite, con la venia, una pequeña agudeza? *(Asentimiento.)* ¿También incluye al señor Vicepresidente primero y a la Mesa?

El señor PRESIDENTE: También, claro.

Quiero decirle al señor Fernández Fernández-Madrid una cosa: «sub lege rex» *(Risas.)*

Continuamos. El señor Baselga me había dicho que iba a retirar unas enmiendas; si puede, me las repite, para que no sea en el momento de la votación. ¿Es la 1.725?

El señor BASELGA GARCIA-ESCUJERO: Esa es.

El señor PRESIDENTE: Eso no son unas enmiendas, es una enmienda, señor Baselga.

El señor BASELGA GARCIA-ESCUJERO: Era muy grande, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: El señor Bautista de la Torre tiene la palabra por tiempo de quince minutos.

El señor BAUTISTA DE LA TORRE: Señor Presidente, señorías, quiero hacer unas reflexiones previas antes de entrar en la defensa de mis enmiendas, por pertenecer

precisamente a la provincia que tiene más analfabetos de España.

Nuestra preocupación consiste esencialmente en que esta Ley de educación me hace meditar sobre sus resultados, porque ella puede hacernos sacar o no a mi tierra de la lacra tercermundista del analfabetismo, que aún hoy alienta en nuestra Comunidad.

Yo he de decir que he aprendido mucho en estos días, porque, en definitiva, ha sido una prueba de fuego importante para todo nuestro Grupo y un conocimiento preciso y exacto de lo que son nuestros oponentes, a quienes yo respeto y admiro por su entusiasmo y sobre todo por su hilaridad permanente. Además de esto, siempre es una experiencia curiosa el verse casi tratado como de filibustero, algo que me parecía como recuerdo de la infancia, de las novelas de Salgari, de ignorante, de haber recibido admoniciones terribles del señor Ramis, que me recuerda aquella mitología fantástica del Nilo, o lo del poeta, nuestro Senador poeta, que decía que en su juventud le maltrataban los profesores; yo que estuve en un colegio, también de pago, igualmente recibía esa especie de tratamiento, muy común entonces, de la pedagogía forestal, que digo yo. *(Risas.)*

Trabajando sobre un estudio del Instituto de Estadística estos días —porque, esencialmente, la Ley de Educación tiene la idea de sacarnos de esta situación del analfabetismo—, veía que Jaén, con un 18,9 por ciento, ocupaba el primer lugar de analfabetos —mi tierra especialmente, porque es una zona de alta montaña, tiene un 32 por ciento—, le sigue la vecina Granada, con un 17,47 por ciento, continúa en tercer lugar Las Palmas, con un 16,5 por ciento de analfabetos; después siguen Badajoz, Ciudad Real y todas las provincias andaluzas hasta el lugar número 12. Yo había hecho un estudio económico de nuestra zona andaluza hace tiempo y decía que, en la olimpiada lamentable y entristecida del subdesarrollo, nuestra Andalucía se lleva todas las medallas de oro y que, en definitiva, una región tan hermosa, que es mayor que 27 naciones que tienen hoy su representación en la ONU, merecía un destino mejor.

Nuestra esperanza es que, ahora que tenemos mayor peso político, con estas dos personas ilustres en la Presidencia de nuestro Gobierno tengamos un destino o un viraje suficiente para encontrarnos mejor en el futuro.

Al hilo de nuestras enmiendas, con ánimo dispuesto al sacrificio, como un gladiador de la arena política de este mágico circo senatorial, recuerdo una ingeniosa frase del Senador Fernández-Piñar y Afán de Ribera, vecino de la provincia de Granada, que ocupa el segundo puesto de España en analfabetismo, quien con esta gracia y humor del Sur, ante la presentación de varias enmiendas que sabía que iban a ser denegadas, decía la frase ritual de los gladiadores romanos: «Los que presentamos estas enmiendas te saludan». Parece que eso es lo que tengo que decir yo también.

Así que, señor Presidente, si me permite la evasión de humor...

El señor PRESIDENTE: Me doy por saludado, señor Senador. *(Risas.)*

El señor BAUTISTA DE LA TORRE: ... yo le imagino como un César, no en posesión de nuestra vida y muerte, sino de implacable desarrollo del tiempo...

El señor PRESIDENTE: Craso error de S. S. El Presidente no tiene opción a rechazar o admitir ninguna enmienda.

El señor BAUTISTA DE LA TORRE: Del tiempo, sí.

El señor PRESIDENTE: Ni siquiera eso, Senador, porque no me hacen caso SS. SS. *(Risas.)*

El señor BAUTISTA DE LA TORRE: Como ya hemos visto del éxito negativo de la presentación de nuestras enmiendas al Título Preliminar, esto supone que, cuando se mantienen ideas fijas es porque hay realmente una crisis de ideas.

Voy a entrar en lo que son mis enmiendas al Título I, Capítulo I. El apartado 2 del artículo 10 dice: «Se entiende por titular de un centro docente la persona física...». Es necesaria una mayor precisión y mi enmienda número 1.247 propone que se diga: «Se entiende por titular de un centro docente público o privado la persona...».

El apartado 2 del artículo 11 dice: «La adaptación de lo preceptuado...». Mi enmienda número 903 lo corregiría con una redacción distinta: «La adaptación de lo prevenido...».

El apartado 2 del artículo 12 dice: «Sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales...». La propuesta de redacción de la enmienda 2.420 diría: «Sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales...», como una cosa más precisa.

El apartado 1 del artículo 14 dice: «Todos los centros docentes deberán reunir...». La enmienda número 1.732 propone: «Los centros educativos docentes deben reunir...».

El artículo 15 dice: «... las características del medio en que estén insertos...». Sobre esto quiero hacer un poco más de hincapié, porque se ha hecho referencia de una manera imprecisa, y lo rural es una preocupación constante de los que somos rurales químicamente puros. La enmienda 1.501 propone decir: «las características del medio social circundante». Es importante que esto se precise, porque no son lo mismo las escuelas que existen en las serranías del Segura, donde me encuentro dichoso viviendo y, sobre todo, libre, que las que existen, por ejemplo, en las distintas agrupaciones urbanas o en la costa. Se debe decir: «del medio social circundante». Me parece muy importante que esto se establezca con una mayor claridad de redacción.

Entramos en el Capítulo II. El artículo 17 dice: «En el ámbito de sus respectivas competencias». La enmienda 2.774 propone decir: «En el área de sus respectivas competencias», porque es más expresivo del contorno en que se encuentren, por ejemplo, las atribuciones de cada uno.

El artículo 18, número 1, dice «opciones». La enmienda 297 propone decir «convicciones», por ser mucho más concreto y expresivo, según mi criterio.

El artículo 19 dice «educativas». La enmienda 79 propone decir «docentes», con el fin de que las escuelas queden encaminadas en la docencia normal, que es su misión fundamental.

El artículo 20, número 2, dice: «situación socioeconómica de la familia». La enmienda 2.676 propone decir «renta bruta anual de la familia», porque la situación socioeconómica es muy subjetiva y la renta define más el comportamiento de las familias en la administración de los bienes conseguidos en el curso de un año.

Entramos en el Capítulo III. El artículo 21, número 2, dice: «las personas físicas o jurídicas». La enmienda 3.119 propone decir, para una mayor precisión, «toda persona física o jurídica».

El artículo 22, número 2, dice: «de los centros someterán». La enmienda 2.614 propone decir: «de los centros docentes privados someterán», por tratarse de ellos en este apartado.

El artículo 23 dice: «de los centros docentes privados». La enmienda 1.774 propone decir: «de los centros de enseñanza no sostenidos con fondos públicos». Debo aclarar que hay otros centros privados consorciados y los que no tienen ayuda estatal alguna, en este artículo ambiguo, que quedarían merced de la situación sectorial.

El artículo 24, número 2, dice: «Los centros homologados». La enmienda 1.701 propone decir: «Los centros docentes homologados», pues, en realidad, ése es el carácter de los mismos.

El artículo 25 dice: «seleccionar su profesorado». La enmienda 1.839 propone decir: «elegir su profesorado», al ser extremadamente importante la libertad de elegir el profesorado.

Por fin, el artículo 26, número 1, dice: «Los centros privados no concertados podrán establecer». La enmienda 2.096 propone decir: «Los centros privados no sostenidos con fondos públicos, cuando lo consideren oportuno, establecerán». Remarcamos la libertad de estos centros, que no deben ser sometidos a condicionamientos restrictivos de ningún tipo de Estado.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bautista de la Torre.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Blanco Rajoy, durante once minutos.

El señor BLANCO-RAJOY MARTINEZ-REBOREDO: Señor Presidente, excelentísimos señores Senadores, el que les habla, que estudió la carrera en Santiago de Compostela, tuvo un gran maestro, ya fallecido, que seguramente fue también maestro del señor Rodríguez Pardo, Secretario de la Mesa, quien en los consejos prácticos que nos daba en clase nos decía que para hacer una Ley hacían falta los siguientes elementos: 1.º, un catedrático de Universidad para programar la Ley y ordenar sus res-

pectivos títulos, capítulos, etcétera; 2.º, un miembro de la Real Academia Española para que precisase correctamente las palabras, los términos del contenido de la Ley; el tercer elemento que nos decía que hacía falta, era un abogado, tipo leguleyo, que coordinase un artículo con otro, para que viese los fallos y la comparación que podía existir. Y el 4.º elemento, que nos decía que era el más importante de todos, y era el más difícil de encontrar, era un hombre de sentido común para que viese cómo estaba aquel texto, y éste, por lo visto, era muy difícil de encontrar. Estos eran los consejos que nos daba este hombre. Y yo le digo al Partido Socialista que no encontró esa persona de sentido común. Quizá haya encontrado al catedrático, al de la Real Academia Española, sobre lo que tenemos nuestras dudas fundadas, pero lo que no encontró bajo ningún concepto es la persona de sentido común.

Aquí, en este mismo sitio donde yo estoy hablando, se ha dicho reiteradas veces que debido a que el viejo Partido en el Poder, la UCD, en el que yo militaba (*Rumores.*). Nunca he dicho que no, nunca lo he negado, esto es cierto... (*Risas.*) Ahora, también les digo una cosa, señores socialistas, y es que en su Partido también militan Senadores que estuvieron conmigo en UCD. Cosa que nunca se dijo hasta ahora.

El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, no entablemos una discusión sobre la militancia. Ciñase a la enmienda. Hasta ahora no le he visto defender una sola enmienda de todas las que tiene.

El señor BLANCO-RAJOY MARTINEZ-REBOREDO: Voy a entrar en ellas.

El señor PRESIDENTE: ¡Ya es hora, señor Blanco! (*Risas.*)

El señor BLANCO-RAJOY MARTINEZ-REBOREDO: Yo les puedo decir lo siguiente. Esta Ley, que pudo haber sido una Ley de consenso general de todos, no lo ha sido. La responsabilidad será de ustedes. Eso mismo dijo UCD en aquella época, y me remito al «Diario de Sesiones». Yo fui testigo —estaba presente y muchos de los Senadores que están aquí, y que repiten, fueron también testigos— de que aquí se le dijo al Ministro, señor Otero Novas, cosas desde luego bastante más fuertes de las que hemos dicho nosotros. Me remito al «Diario de Sesiones», que es un documento que no se puede discutir, y ahí está para quien quiera comprobarlo.

Llegados a este extremo, voy a decir lo siguiente.

Estamos en la defensa de las enmiendas al Título I. Tengo una enmienda al artículo 10, número 2, donde, a juicio de este Senador, debiera decir: «Son centros de formación educativa...» y no «son centros públicos...» como aquí figura. Las razones creo que son evidentes. (*Risas.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señores Senadores.

El señor **BLANCO-RAJOY MARTINEZ-REBOREDO**: Digo que, las razones, creo, son evidentes, señores Senadores. *(Rumores.)*

Yo a ustedes les respeto; exijo el mismo respeto hacia mí.

El dictamen de la Comisión habla de centro público. Les puedo decir que un centro público es la Delegación de Hacienda de mi provincia; un centro público es la casa de Telégrafos de mi provincia, o de cualquier provincia de España, pero no son, señores Senadores, centros de educación o formación; no son una escuela y, sin embargo, son centros públicos ¿o me van a discutir ustedes que no? *(Rumores.)* La casa de Correos y Telégrafos o el edificio de la Delegación de Agricultura son centros públicos. *(Rumores.)*

El señor **PRESIDENTE**: Señores Senadores, hay un orador en el uso de la palabra.

El señor **BLANCO RAJOY MARTINEZ-REBOREDO**: Yo pido el amparo del señor Presidente...

El señor **PRESIDENTE**: El Presidente, señor Blanco, está amparando a S. S.; pero ruego a S. S. que también mida sus palabras, porque al Presidente le va a ser difícil ampararle. *(Risas.)*

El señor **BLANCO RAJOY MARTINEZ-REBOREDO**: No creo que decir que la Delegación de Agricultura sea un centro público...

El señor **PRESIDENTE**: Muchas veces, señor Blanco-Rajoy, el orador dice cosas que provocan la risa, y el Presidente se ve en la necesidad de ampararle. Pero si el orador persiste en estas actitudes, digo que es más difícil la tarea de la Presidencia.

El señor **BLANCO-RAJOY MARTINEZ-REBOREDO**: El orador que está en el uso de la palabra está hablando muy en serio. *(Rumores.)*

Un centro público es un edificio en donde se imparte un servicio público, pero no tiene por qué ser un centro de formación, y lo repito hasta la saciedad y las veces que ustedes quieran. *(Rumores.)*

El señor **PRESIDENTE**: Señores Senadores, por favor...

El señor **BLANCO-RAJOY MARTINEZ-REBOREDO**: Por tanto, entiendo que es procedente la enmienda; también sé que ustedes, aunque la viesan clarísima —y además sé que la ven—, no la van a votar.

La otra enmienda corresponde al artículo 12, punto 1. *(Rumores.)*

El señor **PRESIDENTE**: Silencio, por favor.

El señor **BLANCO-RAJOY MARTINEZ-REBOREDO**: A juicio de este Senador que está en el uso de la palabra,

el texto quedaría redactado de la siguiente forma: «Los centros educativos españoles situados en el extranjero tendrán una estructura y un régimen singularizados a fin de acomodarlos a las exigencias del medio y a lo que, en su caso, dispongan los convenios internacionales». Creo que esta redacción es mucho más precisa y más clara que la que viene en el dictamen de la Comisión. Y yo solicito de toda la Cámara que, si tienen a bien, la voten favorablemente, cosa que creo que es muy difícil. Pero en fin, estamos cumpliendo un trámite y lo cumpliremos hasta el final. *(Risas.)*

La enmienda al artículo 16, punto 2, propone la siguiente redacción: «Los centros no comprendidos en el apartado anterior se les atribuirá la denominación que se disponga en sus reglamentaciones especiales». Creo que esta redacción es más correcta que la que trae el texto del dictamen de la Comisión.

Tenemos otra enmienda al artículo 21, punto 1, que quedaría redactado de la siguiente forma: «Toda persona física o jurídica de carácter privado y de nacionalidad española tiene libertad para la creación y dirección de centros de educación privados, dentro del respeto a la Constitución y a lo establecido en la presente Ley». Creo que es más correcta esta redacción que la que viene en el texto original del dictamen de la Comisión.

También hay otra enmienda al artículo 22. La propuesta de este Senador es la siguiente: «En el marco de los principios constitucionales y de los derechos garantizados en el Título Preliminar de esta Ley a profesores, padres y alumnos, los titulares de los centros de educación privada no concertados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos». Creo que queda mucho más claro con esta redacción.

Tengo la enmienda número 23...

El señor **PRESIDENTE**: Se ha acabado el tiempo.

El señor **BLANCO-RAJOY MARTINEZ-REBOREDO**: Que se tengan por reproducidas las defensas.

El señor **PRESIDENTE**: Se tendrán.

A continuación el señor Bernárdez Álvarez que ha retirado las enmiendas números 5 y 6, pero tiene la número 7 a este Título. ¿Señor Bernárdez Álvarez? *(Pausa.)* Por decaída.

Señor Blesa, lo siento por su veguero, pero le toca a usted su turno y se le va a consumir.

El señor **BLESA RODRIGUEZ**: Espero que no, lo entiendo después.

Gracias, señor Presidente, como otras cosas a mi edad, el puro tampoco lo uso. *(Risas.)*

Señor Presidente, señorías, comprende este Título los artículos 9.º a vigesimo sexto, aunque el Ministro de Asuntos Exteriores diría veintiseisavo, que se encuentran agrupados en tres Capítulos. El Título presta atención, única y exclusivamente, a los centros docentes, y tiene estos tres apartados: el primero, que hace unas normas generales en el Capítulo I; después se habla de los cen-

tros públicos, Capítulo II, y por último de los centros privados, Capítulo III.

El Capítulo I trata, como hemos señalado, de las disposiciones generales en el artículo 10, y clasifica los centros en públicos y privados. Sin embargo, aquí, igual que comentamos al hablar del artículo 1.º, 1, hay una futurible aplicación del principio del precepto, puesto que dice que serán públicos y privados.

No es que yo tenga desconfianza en SS. SS., sino tengo desconfianza en la no aplicación, de que se pueda utilizar como base o principio para su no aplicación en el momento que se utiliza el término futurible. Por eso el contenido de mi enmienda número 2.877 corrige simplemente la expresión «futura», por esto que ya dije anteriormente que «será», por ser un mandato imperativo, tiene que llevar la condición de tiempo: será aplicable el mes de febrero, será aplicable en el año 1985 o será aplicable en el tiempo que sea. Por eso en la enmienda 2.877 digo textualmente «los centros son públicos y privados».

Enmendamos igualmente el apartado 2 con la enmienda 1.245 en una redacción que pretende ser más exacta y puntual. Dice el texto que se entiende que el titular del centro es una persona física. Es que no se entiende que el titular del centro es persona física, es que lo es, no puede ser una persona química. Entonces el titular del centro es.

Seguimos con unas enmiendas que en realidad son una serie de medidas cautelares para evitar sólo la tentación de impedir o mediatizar el ejercicio de las libertades constitucionales, aunque se loan y se cantan en la presente Ley, y digo que son medidas cautelares no sólo hacia SS. SS., sino hacia otro equipo de gobierno que en su día pueda gobernar este país.

Por ello, proponemos un nuevo apartado 3 bis en el artículo 10, que corresponde a la enmienda número 2.876, en el que se señala que los centros concertados, a fin de garantizar la gratuidad, son sostenidos con fondos públicos. Así, el centro concertado queda, además, definido por un nuevo parámetro, el de la gratuidad, que permitirá eliminar otro tipo de limitaciones, como evitar la libertad de selección de centro.

Por precisión terminológica semántica, a mí me agrada haber caído en la Comisión de Educación, porque nuestro ilustre Presidente, señor Barral, nos anima, con su espíritu literario, a dar una exacta terminología a las Leyes.

Dice «lo preceptuado en» al referirse a una Ley, y creo que sería mejor «lo previsto en».

Especial atención me merecen, porque yo también he estudiado en el extranjero, claro, con beca, los centros españoles en el extranjero. Aparte de que se ajusten a dos condiciones «sine qua non» fundamentales, que son, por una parte, los tratados de reciprocidad internacional, y por otra, el medio, el ambiente, el entorno donde se encuentran ubicados, que no pierden las notas típicas que los caracterizan como centros españoles. Entre ellas, primero, la de su lengua o las lenguas oficiales que existan en España cuando haya una comunidad preponderante de emigrantes, como puede suceder con la gallega, las

tradiciones y las costumbres de nuestra tierra, y por esta razón fundamental presentamos nuestra enmienda 2.878, referente a los centros españoles en el extranjero, que se dice que tendrán una estructura, y yo añado «y un régimen singularizados, a fin de acomodarlos a las exigencias del medio y a lo que en su caso dispongan los tratados internacionales, sin que ello conlleve la pérdida o menoscabo de su carácter de centro español».

Nuestras enmiendas tratan de perfeccionar, a nuestro entender, la redacción del texto de la Ley, y creo que deben tenerse también en consideración.

La primera, número 2.418, que habla de centros en el extranjero, que deben tener unas condiciones singularizadas. Singular es único. Yo diría, para distinguirlo, que deben tener unas condiciones especiales.

La enmienda número 2.664 habla del principio de igualdad de oportunidades, y es de tipo gramatical. Porque en un caso se dice en plural y en otro caso en singular. Y dice: «Cuando se inscriban los centros docentes se deberá dar traslado a los asientos registrales» (en plural), y después se dice: «que figuren en la correspondiente inscripción registral». Naturalmente, si figuran en los asientos registrales deben figurar en las correspondientes inscripciones registrales.

Una manifiesto recorte a las competencias que corresponden a los Estatutos de Autonomía y que éstos confieren a las Comunidades Autónomas se observa a lo largo de todo el articulado de esta Ley. De aquí el objeto de nuestra enmienda número 1.976, que dice textualmente: «Todos los centros docentes tendrán una denominación específica y se inscribirán en un registro público dependiente de la Administración educativa de la Comunidad Autónoma», en contra de lo que se especifica en el artículo 13 de la Ley, que dice «de la Administración educativa competente del Ministerio de Educación y Ciencia». Yo incluso quitaría el nombre de Ministerio de Educación y Ciencia, dejando «Ministerio correspondiente», porque algunos de ustedes, como el ilustre Senador Prat, han conocido el Ministerio de Instrucción Pública, después el de Educación Nacional, después el Ministerio de Educación y Ciencia, después el de Educación, y ahora hemos vuelto de nuevo al Ministerio de Educación y Ciencia, cuando se separaron el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación.

La garantía de la exigencia de los requisitos mínimos, que son importantes para garantizar la enseñanza de calidad que señala el artículo 14, creo que no basta con enunciarla, decir que se necesitan unos requisitos mínimos, sino que hay que fijarlos cuando se trata de mínimos. Los máximos no deben fijar tope, pero los mínimos se deben fijar, en el caso de que sea la calidad de la enseñanza lo que está en juego. Y decimos en nuestra enmienda número 1.978 que para garantizar esa calidad mínima hay que tener una superficie mínima de instalaciones escolares (bibliotecas, laboratorios, aulas) que no debe ser inferior a tres o cuatro metros cuadrados por alumno, que es lo que han dado la mayoría de los directores de los centros docentes.

En otros casos sería deseable —y aquí hay una equivo-

cación en la enmienda— que el número mínimo de unidades escolares fuera ocho y que acogieran a un máximo de 35 alumnos por aula. Digo deseable porque no se puede aplicar esto cuando se trata de centros rurales que no pueden cubrir con su alumnado este número, este condicionamiento mínimo exigido. Pero hay un condicionamiento máximo en este caso, que fija el número de alumnos, que nunca debe pasar de 35 por unidad escolar, para mantener ese requisito mínimo de calidad de la enseñanza.

La educación debe tender, en su aspecto formativo, a que los escolares amen, respeten, aprendan a aprovechar racionalmente lo que nos ofrece la escuela, que es distinto según el ambiente en que nos ubiquemos. Pero la naturaleza está ahí, nosotros estamos formando parte de esa naturaleza y la debemos aprovechar de una manera racional y sin provocar daños que sean irreversibles. En este sentido, entre otras cosas, debe ir la selección y posterior programación de las materias optativas que marca el artículo 15. Así, la enmienda 1.799 dice que deben programarse las materias optativas con el máximo respeto a los principios constitucionales; claro que esto no se debía poner porque todos tenemos que amar la Constitución, respetarla, cumplirla y hacerla cumplir, es obvio, así como con neutralidad ideológica y respeto a las opciones religiosas y morales. Así, estas enseñanzas opcionales se enmarcan precisamente donde verdaderamente les corresponde y se les da sentido. Creánme que éste es el verdadero motivo de la enmienda.

Así llegamos al Capítulo II, De los centros públicos. En el artículo 17 se confiere al Gobierno y al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas la facultad de creación y supresión de centros públicos. Esto, entre otras cosas, está también en línea con los recortes de la capacidad de esa transferencia que se ha hecho a las Comunidades Autónomas en materia de educación. Por ello, nuestra enmienda al artículo 17 dice (porque hay que dar al César lo que es del César) que lo mejor es restituirlo a las Comunidades Autónomas y así la creación y supresión de centros públicos se efectuará bien por el Gobierno, previo informe de la Comunidad Autónoma, que será preceptivo y vinculante, o bien por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Porque, señorías, nosotros entendemos que todas las Comunidades Autónomas tienen asignadas las competencias de educación, pero no todas las tienen asumidas; por ejemplo, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja, etcétera, y de esta manera, aunque no haya habido transferencias educativas, se debe respetar esa asignación de la materia de educación a su Comunidad, para no crear o eliminar centros de enseñanza de esas Comunidades Autónomas a las que aún no se les ha transferido la materia educativa.

El artículo 18 señala que en los centros públicos las actividades se desarrollarán con respeto a la Constitución, ideología, opciones morales y religiosas, etcétera. Y el apartado 2 confiere a la Administración y a los órganos de gobierno del centro velar por el cumplimiento de lo anteriormente expuesto, pero sólo a los órganos de

gobierno y de administración; no se les da a los padres la capacidad de seguimiento ni la capacidad de denuncia para cuando estos principios sean conculcados, hecho que se puede dar.

Por ello, la necesidad de nuestra enmienda 1.981, que es una garantía para que todos puedan seguir la educación de sus hijos y elevar quejas para que realmente sean atendidas en el caso de que se conculquen. De aquí esta enmienda 1.981, que dice que los poderes públicos, y, en su caso, la Administración educativa, garantizarán a los padres y tutores de los alumnos vías de control y denuncia de incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior.

Esta enmienda 1.981 sería de adición a un nuevo apartado 1 bis, dado que los artículos 4.º y 5.º, que hablan de los derechos de los padres y de los tutores, no tratan de esta vía de control y seguimiento.

Terminamos el Capítulo II con el artículo 20, que también es de tipo cautelar. Se garantiza una programación adecuada de los puestos escolares y gratuitos en los ámbitos territoriales correspondientes que asegure y garantice la posibilidad de escoger centro docente, así como la posibilidad del derecho a la educación. Habría que disponer los medios para que también en los ámbitos rurales, bien por transporte, bien por aportaciones y ayudas económicas, pudieran tener la posibilidad de elección que tienen en los centros no rurales.

El apartado 2 se opone frontalmente a la posibilidad de elección de centro docente y al principio de igualdad de oportunidades que consagra la Constitución. Quiere imponer el criterio de admisión de alumnos a un criterio de «zonación» o «barrialización», que son factores limitantes de esa libertad que, como hemos dicho, está incluida en la Constitución y también señala la Ley.

En un coloquio que mantuvimos en Almería sobre si niños de barrios humildes podían aspirar a ir a colegios del centro de la ciudad que estaban regentados por religiosos, yo siempre dije que no podrían ir, porque con la Ley en la mano se les imponía ir al centro más cercano. Lo que hay que hacer es nivelar, pero en vez de por lo bajo, nivelar por lo alto. Por eso el artículo 10 g) —y ya tratamos de ello en el Título Preliminar— dice que entre los derechos de los alumnos está recibir las ayudas necesarias para que, independientemente de su domiciliación, puedan elegir el centro que deseen, de acuerdo con el artículo 4.º, apartado b), de la Ley y siempre en los niveles obligatorios.

Así, la enmienda 1.984, 20.1 bis, de modificación, dice: «La posibilidad de elección de centros se hará mediante una oferta educativa plural, como se contempla en los artículos 27.1 y 27.6 de la Constitución». Naturalmente nosotros enmendamos sustancialmente el apartado 2 en lo que se refiere a la enmienda 1.985, relativa a la admisión de alumnos y que dice textualmente: «En la admisión de alumnos en los centros públicos cuando no existan plazas suficientes se tendrá en cuenta la existencia de hermanos en el centro, así como la existencia de defecto físico que impida el desplazamiento. En ningún caso habrá discriminación por razones ideológicas, religiosas,

morales, sociales, económicas o de cualquier otro requisito que contravenga lo dispuesto en los artículos 14 y 17.2 de la Constitución.»

Así finaliza el Capítulo II dedicado a centros públicos, y se entra en el más conflictivo, dedicado a los centros privados. En el artículo 21 se hace referencia a las condiciones que debe reunir toda persona física o jurídica para ejercer la titularidad de un centro privado, y la Ley dice que toda persona física o jurídica puede crear y a la vez dirigir un centro privado. Pero en el artículo 59 se señala muy acertadamente (en este caso «rara avis», que también exista), que hay unos requisitos mínimos para ejercer la dirección del centro, porque puede o no el titular poseerlos. Por tanto, si un titular no posee esos requisitos mínimos del artículo 59.1, cual es ser titulado o profesor, entonces el titular debe tener la dirección delegada, pero nunca la puede ejercer. Por eso la enmienda 1.987 dice que toda persona física o jurídica podrá ejercer la dirección de los centros privados, siempre que se den en ella las circunstancias exigidas en el artículo 59.1, excepto el condicionamiento de tiempo de permanencia en el centro.

En cuanto a las incompatibilidades que se marcan para ser titular de un centro, yo las amplió más porque creo que todo político que tenga cargos políticos involucrados también en la educación no debe ser Juez y parte; por eso hago extensiva la incompatibilidad a los parlamentarios nacionales y autonómicos con responsabilidades educativas, así como Alcaldes o Concejales, estos últimos con esa misma responsabilidad. En el apartado c) introducimos otra enmienda que contribuye a una mejor redacción, la enmienda 3.117, que dice que en vez de «personas privadas de este derecho» —a las personas no se les priva del derecho, sino del ejercicio de este derecho—, nosotros decimos en nuestra enmienda: «a las personas privadas del ejercicio de este derecho».

Especial atención merece el artículo 22, que conjuntamente con el 52 y con la Disposición transitoria cuarta, si bien permite la definición de carácter propio de un centro, impide el ejercicio de su implantación. Se impide porque esa definición, mediante el régimen de conciertos, se somete a una serie de condicionantes. Por ello enmendamos con la enmienda número 3.904 el apartado 1 de la siguiente manera: «En el marco de los derechos constitucionales y de los derechos garantizados en el Título Preliminar, a profesores, padres y alumnos se garantiza, igualmente, a los titulares de centros privados el derecho de establecer el ideario o el carácter propio de los mismos». Vean ustedes que aquí no entran en conflicto estas libertades en modo alguno con la libertad de cátedra, sino que es un compromiso de concordia y de respeto mutuo.

Como complemento a la enmienda anterior introducimos la adición 2 bis, que es la enmienda número 3.905, que dice que en ningún caso los poderes públicos dificultarán o impedirán el derecho del titular del centro privado a definir el carácter propio del mismo, manteniéndose las subvenciones previstas en el régimen de concertación bajo el mayor respeto a lo expresado en el apartado 1 de

este artículo. Creo que aquí el ideario sigue con un escrupuloso respeto a la libertad de cátedra.

La enmienda presentada al artículo 25 tiene por objeto no introducir diferencias esenciales entre los centros privados en razón de que estén o no concertados. Hay una diferencia de matiz que se debe respetar, pero no debe haber diferencias de tipo sustancial. La enmienda número 3.906 dice: «Dentro de las disposiciones de la presente Ley y normas que la desarrollen los centros privados gozarán de autonomía para establecer un régimen interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida por la legislación vigente, establecer las normas de convivencia y definir su régimen económico». Esta enmienda se completa con la 3.907, que da unas características distintas de los centros privados no concertados: la de ejercer la facultad de determinar el procedimiento de admisión de alumnos.

Ayer, señorías, cuando presenté mis enmiendas al Título Preliminar, fui magníficamente contestado por una ilustre Senadora de esta Cámara, que dejó bien alto el pabellón al que pertenece en su profesión, que es el de la docencia; brillante exposición por la que yo aquí quiero felicitarla sinceramente, aunque no contesté en profundidad a los puntos que —al igual que señaló el señor Marques...

El señor PRESIDENTE: Señor Blesa, ese Título está ya aprobado.

El señor BLESA RODRIGUEZ: Yo quisiera —porque se nos ha dicho aquí que no se nos va a contestar— que se me replicara de una manera ajustada y no con anécdotas, como una que espero se me aclare, anécdota que nos contó el Senador Moreno —lamento que no esté aquí nuestro querido Senador Moreno— en la contestación a una enmienda del señor Díaz Mantis en la que involucraba a la señora Thatcher, al Parlamento británico y a los laboristas.

El señor PRESIDENTE: Ciñase a la cuestión.

El señor BLESA RODRIGUEZ: Estoy en la cuestión, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Yo creo que está tirando balones fuera. Ciñase a la cuestión.

El señor BLESA RODRIGUEZ: Si el señor Presidente no me permite...

El señor PRESIDENTE: No estamos aquí para contar anécdotas.

El señor BLESA RODRIGUEZ: Es igual, señor Presidente. Ya tendré oportunidad de decirle al señor Moreno que nos la conteste, aunque sea fuera de esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Además, no está el señor Moreno.

El señor Blesa Rodríguez: Ya me la contestará, y creo que con mucho gusto. Muchas gracias, señorías, por la atención que me han prestado, aunque me cabe la seguridad de que no me aprobarán ninguna de estas enmiendas.

El señor Presidente: ¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Iglesias tiene la palabra.

El señor Iglesias Marcelo: Señor Presidente, señorías, voy a consumir un turno de contestación al Senador Blesa que ya anuncio desde el principio que voy a centrar fundamentalmente en la contestación a sus enmiendas 1.989 y 3.904, enmiendas que forman parte del paquete que el Grupo Popular ha presentado al Grupo Socialista como enmiendas fundamentales, debate al que yo me presto gustosamente en nombre del Grupo Socialista.

No obstante, quiero hacer una rápida réplica a alguna de las enmiendas más significativas de las muchas —36— que existen a este Título primero del Senador Blesa.

La enmienda 1.978 al artículo 14.2 determina con mucha precisión los requisitos mínimos que deben reunir los centros en función de la calidad. En ese mismo artículo se establece que sobre un cañamazo de carácter general corresponde a la potestad reglamentaria del Gobierno la determinación y precisión de carácter técnico de esos requisitos mínimos.

Tengo que recordarle al Senador Blesa que la sentencia del Tribunal Constitucional del día 5 de agosto del año 1983 sobre el tema debatido y famoso de la LOAPA establece con toda claridad que el desarrollo reglamentario de normas básicas, que son competencia exclusiva de la Administración del Estado, no está fuera de la competencia del Gobierno, sino que forma parte de esa competencia cuando se trate —lo dice así, literalmente, la sentencia— de cuestiones técnicas más propias de un desarrollo reglamentario que de una Ley Orgánica.

La precisión que pide el Senador Blesa sobre la relación numérica de 35 a 1, los metros cuadrados que se exigen por alumno, instalaciones, laboratorios, bibliotecas, salas de actividades, etcétera, son prescripciones técnicas que corresponden propiamente a un Reglamento de desarrollo de esta Ley Orgánica, pero no son propias de una Ley Orgánica.

La enmienda 1.980, relativa a la facultad de creación y supresión, en la que el Senador Blesa pide que además de la creación y supresión de centros —competencia que corresponde al Gobierno o a los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas— en aquellas Comunidades que tengan transferidas las competencias plenas en el orden de la educación, se exija un informe previo de la Comunidad Autónoma que será preceptivo y vinculante. Y naturalmente se refiere a creación y supresión de centros públicos en aquellas Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias educativas, porque aquellas que las tienen están claramente expresadas en el artículo 17; se trata de las otras.

Tengo que recordarle que las competencias educativas

figuran entre las competencias del Estado, y que para la transferencia a las Comunidades Autónomas que no las han asumido por la vía de su acceso a la autonomía, las Comunidades Autónomas del artículo 143, es necesario que haya una Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales para que puedan asumir competencias en el orden de la educación. No parece, entonces, que sea oportuno que aquí se supedite y condicione la potestad del Gobierno a un informe de carácter preceptivo y vinculante de las Comunidades Autónomas que no tienen todavía transferidas sus competencias en el ámbito educativo.

La enmienda 1.981 al artículo 18 habla de las garantías, proponiendo la adición de un apartado 1 bis al artículo 18, en el sentido de establecer determinado tipo de garantías respecto de las condiciones en que los centros públicos desarrollarán sus actividades, principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica, respeto a las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución. El Senador Blesa pide que se añada un nuevo párrafo bis que diga que «Los poderes públicos, y en su caso la Administración educativa, garantizarán a los padres de los alumnos, y en su defecto a los tutores, vías de control y denuncia del incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior».

Tengo que decirle que en el punto 2 del mismo artículo 18 está contemplado eso que pide el Senador Blesa. «La Administración educativa competente y, en todo caso, los órganos de gobierno del centro docente velarán por la efectiva realización de los fines de la comunidad educativa, la mejora de la calidad de la enseñanza y el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo.» Es suficiente con esta precisión para garantizar el derecho de los padres de que se cumplan las condiciones de funcionamiento de los centros públicos.

La enmienda 1.983 al artículo 20.1 no añade realmente nada nuevo; únicamente establece un cambio de orden en el final del articulado, que quizá sea significativo de una cierta valoración de determinados derechos y libertades. Propone la siguiente redacción: «Se garantiza una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos, en los ámbitos territoriales correspondientes, que asegure y garantice la posibilidad de escoger centro docente, así como la efectividad del derecho a la educación». El texto que pretende modificar dice exactamente lo contrario, que garantice la efectividad del derecho a la educación y la posibilidad de escoger centro docente. Quizá sea una cuestión de matiz, parece que hay aquí una cuestión de valoración de prioridades, y a nuestro juicio es evidente que el derecho a la educación es un derecho mucho más sustancial, radical y profundo que el derecho a escoger centro docente. Es prioritario, y debe ser expresado con prioridad.

La enmienda 1.984 al artículo 20 habla de la elección de centro, propone la adición de un nuevo apartado 20.1 bis, que dice: «La posibilidad de elección de centro se hará mediante una oferta educativa plural como se contempla en los artículos 27.1 y 27.6 de la Constitución». Tengo que recordarle que en el Título Preliminar, cuando se habla de los derechos, los padres tienen garantizado el

derecho de elección de centro, que es resultado de todo el marco constitucional. Parece innecesario que ese derecho esté aquí expresamente recogido, está contenido en el Título donde se recogen los derechos fundamentales de toda la comunidad educativa.

Respecto a su enmienda 1.985 al artículo 20.2 es una enmienda que modifica profundamente el artículo 20 respecto de las condiciones de admisión de los alumnos, porque suprime las condiciones socioeconómicas de la familia como un criterio prioritario, al menos así figura en el texto de la enmienda que tengo delante, suprime también el criterio de la proximidad y reduce los criterios de admisión de alumnos a la existencia de hermanos en el mismo centro, así como a la existencia de defecto físico que dificulte el desplazamiento a otros centros docentes más distantes. Es un cambio profundo.

Tengo que decirle, en primer lugar, que los criterios de admisión de los alumnos se aplican únicamente en el caso de que no existan plazas escolares suficientes y que, por tanto, para todas las demás hipótesis el derecho de elegir centro docente es un derecho no limitado de ninguna manera, no hay ningún límite al ejercicio de este derecho, y que sólo en el caso de que exista conflicto por insuficiencia de plazas escolares nosotros proponemos que se apliquen tres criterios para la admisión de los alumnos: el criterio del nivel de ingresos de la familia, el criterio de la proximidad del centro y el criterio de la existencia de otros hermanos matriculados en el centro.

Su texto alternativo significaría una modificación sustancial, y tenemos que decir que nos oponemos a esa modificación del artículo que propone, primero, porque tener en cuenta la condición socioeconómica de ingresos familiares es un elemento de compensación de deficiencias sociales de origen, que han estado gravando muy gravemente, muy profundamente, las posibilidades educativas de muchos españoles.

Por tanto, tener en cuenta este criterio de compensación en el sentido de que tengan prioridad los alumnos con menores niveles de renta, ya que desde otros puntos de vista disponen de muchísimas menos posibilidades educativas y de todo género que los otros alumnos, nos parece una grave limitación que no podemos aceptar.

En cuanto a la eliminación del criterio de proximidad y sólo reducirlo a los alumnos que tengan defecto físico nos parece también una eliminación de un criterio importante porque, en definitiva, si se pasa un poco revista a lo que ha sido la estructura escolar, el mapa escolar de nuestras grandes ciudades, nuestras metrópolis, queda muy claro que el criterio de proximidad al centro es un criterio que ha funcionado para determinadas clases sociales, que hay centros destinados a alumnos de otro tipo, de otras clases sociales más favorecidas en los que la proximidad geográfica, la proximidad de domicilio, no ha jugado nunca como un factor limitante, incluso las clases más acomodadas pueden suprimir cualquier barrera espacial y pueden enviar a sus hijos a educarse a Suiza y a Inglaterra o a cualquier centro, cosa que tienen realmente abierta a través de esta Ley; pero en el caso de conflicto nos parece que la proximidad del centro es un

criterio que no se puede eliminar, porque su eliminación realmente redundaría en una mayor posibilidad de movilidad geográfica para alumnos que tienen más posibilidad. Realmente la movilidad geográfica de los alumnos está en función de las posibilidades económicas de la familia. Si eliminamos este criterio de proximidad, realmente estamos concediendo un privilegio a alumnos procedentes de determinadas clases.

En su enmienda 3.906 al artículo 25 el Senador Blesa propone una redacción que cambia radicalmente la filosofía de la Ley. Tengo que decirle de entrada y claramente que no, que este artículo no lo podemos admitir de ninguna manera porque la admisión de esta propuesta de modificación cambia radicalmente la filosofía completa de la Ley. Es una enmienda hábilmente planteada, pero desde luego no la podemos admitir porque, en definitiva, lo que quiere es aplicar a los centros concertados y financiados por fondos públicos los criterios de organización, financieros, de admisión de alumnos, de admisión de profesores, propios de los centros privados. Está claro que nuestra filosofía es una filosofía, en este sentido, absolutamente transparente. Los centros financiados con fondos públicos tendrán que cumplir los requisitos mínimos establecidos por el Estado, por la Administración y por el Gobierno. Así, además, lo reconocen los pactos internacionales referentes al derecho a la educación. En ningún caso se pide la financiación sin ningún tipo de contraprestación, sin ningún tipo de condición, respetando —dicen los pactos internacionales— aquellas normas mínimas, básicas, que los Gobiernos establezcan respecto de las condiciones de financiación.

La enmienda 3.907 al artículo 25 es una enmienda innecesaria, porque este nuevo apartado está contenido plenamente en el artículo 25. Lo que pasa es que modifica el artículo 25, suprime uno de los elementos y luego crea un artículo 25 bis, un párrafo segundo innecesario porque está contenido realmente.

Quiero dedicar una especial atención a las enmiendas 1.989 y 3.904 del Senador Blesa. Son enmiendas al artículo 22, al debatido y polémico artículo 22, donde se establece el carácter propio de los centros, o ideario, con otras palabras. El Senador Blesa ha afirmado aquí que tal como está redactada la LODE impide realmente el ejercicio del carácter propio de los centros privados, en este caso de los centros privados concertados y no concertados. Yo tengo que negar de entrada esa afirmación y quiero aquí hacer dos tipos de argumentos: en primer lugar, un tipo de argumento fundamentalmente jurídico, y en segundo lugar, un tipo de argumento de carácter social, de carácter sociológico.

Primera afirmación: el carácter propio de los centros privados se encuentra claramente reconocido en el artículo 22 de esta Ley y en el artículo 52, donde se vuelve a expresar la misma fórmula. Y ese reconocimiento nace, evidentemente, del contexto de la Constitución; nace del artículo 16, libertad ideológica; del artículo 20, libertad de expresar y defender pensamientos, ideas, etcétera. También nace de la libertad de cátedra que puede tener el titular; nace del artículo 27, números 1 y 6, de la Cons-

titución, libertad de enseñanza, libertad de creación de centros docentes; y, naturalmente, este carácter propio queda reconocido en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema de la LOECE. En ella está enmarcado jurídicamente este derecho. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio a los señores Senadores.

El señor IGLESIAS MARCELO: Segunda afirmación: el carácter propio del centro no puede ser un derecho prevalente sobre otros fundamentales, derechos reconocidos en el Capítulo II de la Constitución: libertad de conciencia, libertad de cátedra, derecho de participación. Derechos fundamentales que están amparados de tal manera que en el artículo 53 de la Constitución se abre una vía especial para la garantía de esos derechos, que es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Ese carácter propio no puede ser invasor del territorio de los otros derechos fundamentales. Es por esta razón por la que la enmienda 1.989, del Senador Blesa, no es aceptable, ya que literalmente dice: «El carácter propio del centro puede abarcar cualquier actividad del centro y habrá de ser asumido y respetado por los profesores, padres o tutores y alumnos».

Respecto al respeto, creo que está contenido perfectamente en el planteamiento de la Ley. Respecto de que el carácter propio del centro sea asumido, es absolutamente inaceptable que el derecho de los padres, el derecho de los profesores y el derecho de los alumnos les obligue a asumir, es decir, a incorporarse, a meterse dentro, a aceptar internamente el carácter propio del centro. A eso no puede obligar, en absoluto, ni la Constitución ni la sentencia del Tribunal Constitucional.

Tercera afirmación: el Tribunal Constitucional señala claramente en su sentencia sobre la LOECE que el carácter propio del centro tiene sus límites, porque ése es un derecho que es concurrente con otros; no es un derecho que se opone, o que entre en guerra con otros, sino que está llamado a concurrir con otros en el dibujo de un complejo de derechos que tienen que vivir armónicamente.

Por eso dice el Tribunal Constitucional en su sentencia que el carácter propio del centro no obliga al profesor a ser apologista, ni a ser propagandista, ni a adoctrinar; límites evidentes. Y, por el lado contrario, las sentencia del Tribunal Constitucional dice que la libertad de cátedra no faculta al profesor para hacer ataques abiertos o solapados al ideario.

Se trata de derechos concurrentes; y no hablo solamente de la libertad de cátedra, sino de la libertad de conciencia, de la libertad de los padres, de la libertad de participación, que son derechos concurrentes con el ideario.

El carácter propio del centro concurre con otros derechos y, por tanto, en caso de conflicto con otros derechos (que es previsible, aunque ése no es el espíritu de la norma), obliga al diálogo, a la tolerancia y a la convivencia; evita radicalmente la intransigencia y el arbitrio en la

solución de los conflictos y, por tanto, esa posibilidad de conflictos entre derechos básicos; lo que pasa es que abre la vía de la tolerancia, del diálogo y de la convivencia para la solución de esos conflictos.

Tengo que decirles, a este respecto, que el Tribunal Constitucional establece con toda claridad en su sentencia sobre la LOECE que, en caso de conflictos entre el titular y los profesores, etcétera, la solución habrá de buscarse a través de la jurisdicción competente. Y en último término, en cuanto haya lesión de derechos fundamentales o libertades públicas, será a través de este mismo Tribunal, por la vía de amparo, y no mediante el establecimiento apriorístico de una doctrina general.

Dice claramente el Tribunal Constitucional que, en caso de conflicto entre distintos derechos, no se puede establecer una solución apriorística que supedita o subordine la libertad de cátedra, etcétera, al ideario, los derechos de los padres o de la libertad de conciencia al ideario, sino que se debe recurrir a la vía jurisdiccional, a la competencia jurídica correspondiente y, en último término, por tratarse de derechos fundamentales, a la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que en cada supuesto establecerá cuál es el derecho al que hay que conceder la prioridad o preferencia en cada caso de conflicto.

No se puede establecer una norma general, y la enmienda del Senador Blesa establece una regla de carácter general para la solución de los conflictos. Por tanto, no es aceptable la propuesta del Senador Blesa.

Por último, una muy breve referencia. Estamos hablando del carácter propio del centro y del derecho a establecer el carácter propio; pero, realmente, ¿qué es un ideario? ¿Qué es el carácter propio de un centro? Es un complejo de ideas, de creencias, de actitudes filosóficas, religiosas, que intenta animar un proyecto educativo; un conjunto de principios pedagógicos, de principios didácticos, de principios metodológicos, incluso de contenidos de la propia tarea educativa en las materias optativas y en el enfoque que se da a las materias, todo ello, naturalmente, compatible con el marco de la Constitución, que configura un sello especial, un sello que marca a cada uno de los centros.

Puede afectar a todas las actividades, a varias actividades o a menos actividades; esa cuestión es irrelevante; pero lo que tengo que decirle es algo que me parece importante. El ideario del centro, como conjunto de ideas directrices de la actividad educativa del mismo, o es un conjunto de ideas que tienen fuerza, que están sólidamente asentadas, que tienen firmeza, que tienen el apoyo social de determinados grupos —y, por tanto, se puede hablar de un ideario vivo—, o, por el contrario, carece de esas condiciones y habrá que hablar de un ideario muerto. Si el ideario está muerto, yo creo que lo que hay que hacer con él es concederle una digna sepultura; si el ideario está vivo, yo creo que no hay nadie —ni el titular, ni los padres, ni los profesores, ni la Administración, ni el Gobierno, ni ningún Partido— que pueda impedir el libre desarrollo de las ideas, su dinámica interna, su evolución y su cambio; si el ideario está vivo, tendrá su

propia vida, evolucionará y cambiará siguiendo la dialéctica y la dinámica interna de las ideas. (*Rumores.*)

No hace mucho un ideario que informó la actividad de muchísimos centros de este país durante largo tiempo...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señores Senadores.

El señor IGLESIAS MARCELO: Se declaraba atado y bien atado. Y, señorías, ustedes lo pueden ver; aquí estamos todos.

Aquel ideario que se declaraba atado y bien atado, y por tanto congelado por mucho tiempo, ahora está periclitado y caduco. No me tomen estas palabras como un reproche; por el contrario, lo que voy a decir es una alabanza.

En los escaños de esta Cámara se sientan personas que tuvieron una dilatada vida política durante la época del franquismo; hoy están sentados en los escaños de un Parlamento democrático. Hay, evidentemente, una evolución profunda, hay un cambio profundo, que yo aplaudo, que yo tengo que elogiar aquí; pero si, efectivamente, el ideario de determinadas personas que entonces estuvieron muy sinceramente...

El señor PRESIDENTE: Cíñase a la cuestión, por favor.

El señor IGLESIAS MARCELO: Lo estoy intentando, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Estamos apartándonos de la cuestión. Vamos a hablar de otros temas, como puede ser la impugnación de la enmienda.

El señor IGLESIAS MARCELO: Quiero decir que si el ideario está vivo, va a continuar su evolución y su vida y habrá que adaptarse a la evolución; poner puertas al pensamiento es prácticamente imposible.

Tengo que terminar diciendo que en esta Ley, así como queda definitiva y claramente establecida y defendida la libertad de cátedra, queda también establecido y defendido el derecho a imponer, a plantear, a proponer un carácter, un ideario propio en el centro. Son dos derechos fundamentales que están suficientemente reconocidos y protegidos en ella, es un conjunto de derechos que debemos respetar con igualdad y un complejo de libertades y derechos de carácter fundamental.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bolea.

El señor BLESÁ RODRIGUEZ: Pido la palabra solamente para decir que retiré unas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Ya lo diré en el momento de la votación, porque le he dado ya dos veces la palabra al señor Bolea y no se la voy a retirar otra vez. Quizá es mejor que presente un escrito a la Mesa y las daremos

por retiradas. (*El señor Vicepresidente, Lizón Giner, ocupa la Presidencia.*)

El señor BOLEA FORADADA: Señor Presidente, me parece que el tiempo que llevamos debatiendo el texto de este proyecto de Ley permite obtener algunas conclusiones. A mi me parece que, como Senadores, deberíamos tener muy presente que las Leyes no las estamos haciendo exclusivamente para nosotros; las estamos haciendo, obvio es decirlo para la generalidad de los españoles. Por tanto, todo interés será poco para que, tanto en cuanto al fondo, como en cuanto a la forma, esta Ley pueda ser perfecta.

Qué duda cabe que es una Ley perfectible y, qué duda cabe que en este cúmulo de 4.550 enmiendas ciertamente alguna de ellas debería merecer, por lo menos, la misma suerte que esas 13 pobrecitas enmiendas que fueron admitidas en Ponencia y que han dado, hasta ahora, la medida de aceptación por parte del Senado.

Debemos poner un particular interés en esta Ley, porque cualquier duda que posteriormente surja planteará en la generalidad de los españoles problemas de interpretación que, en definitiva, si fuesen polémicos, habría que resolver ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo o ante otro tipo de Tribunales.

Hay dos temas con respecto a este Título primero que me preocupan profundamente al interrelacionarlos con el Título Preliminar. Una Ley, naturalmente, no es algo que se rompa por títulos, sino que es un todo unido, un todo entrelazado; por tanto, las conclusiones que podemos obtener del Título primero estarán necesariamente sedimentadas o basadas en lo que hayamos podido aceptar, aprobar o admitir en el Título Preliminar.

Así, en el Título primero se establecen una serie de normativas relativas, por ejemplo, a la admisión del alumnado en centros públicos. Recordemos que en este Título primero se clasifican los centros en: centros docentes, públicos y privados; y, a su vez, los centros privados pueden estar sostenidos con fondos públicos o no. Los primeros de ellos son los llamados centros concertados y los segundos serán los centros privados, a secas.

Pero con respecto a la admisión de alumnos, en este Título, que en realidad debiera afectar a todos los alumnos —sea cualquiera los centros docentes concertados, públicos o privados—, lo cierto es que única y exclusivamente se hace referencia en el Capítulo II al tema de los centros públicos.

Y esta conclusión a la que se llega en el Capítulo II del Título primero necesariamente hay que coordinarla con lo que se aprobó esta mañana con respecto al Título Preliminar. Están perfectamente coordinados los derechos de los padres y el tema de la admisión de los alumnos.

Lo que sí ha quedado claro, con respecto al derecho de elección de centro —sea cual sea la voluntad de todos los que aquí han venido a interpretar ese artículo—, es que con la Ley en la mano cualquier tribunal que interpretase este artículo, que ya ha quedado aprobado, pero que está directamente interrelacionado con el Título primero, diría que solamente los padres y los tutores tienen

derecho para elegir centros privados. La Ley no dice que los padres tengan el derecho a elegir centro público; esto es claramente grave, porque si lo que estamos tratando de establecer es un principio de normas de igualdad entre centros públicos y privados, resulta que la discriminación la hacemos, precisamente, respecto a los centros públicos.

Yo siento mucho esto porque llevo a mis hijos, con mucho orgullo, a centros públicos, y como padre que lleva a sus hijos a centros públicos no encuentro en esta Ley ese derecho reconocido que me diga que como padre puedo elegir libremente un centro público. Esto es así, y es tan claro que, si me lo permiten, voy a leer lo que hasta ahora había vigente en el Derecho y que este proyecto va a derogar, que es el artículo 5.º de la Ley de 19 de junio de 1980.

El artículo 5.º de la Ley de Estatuto de Centros Escolares decía —dice, porque todavía no está derogada—: Los padres o tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos o pupilos, a cuyo efecto podrán escoger el centro docente que mejor se acomode a sus convicciones.

Fijense con qué claridad esta Ley de 1980 —que yo no defiendo porque no estamos deliberando sobre la misma— decía que los padres o tutores de niños que van a ir a centros públicos o privados pueden elegir en cualquiera de ellos. Qué diferencia con lo que esta Ley viene a decir en el artículo 4.º, cuando solamente se les concede el derecho a escoger centro docente distinto de los creados por los Poderes públicos; no se dice que los padres tengan derecho a escoger centro público. Esto es especialmente grave, porque si coordinamos ese artículo 5.º con el artículo 20, es posible que una reglamentación posterior venga a establecer a los padres o tutores cómo deben ir sus hijos o pupilos a estos centros públicos.

El tema es lo suficientemente importante y grave como para que no se diga en una simple declaración, sino que se indique o que se cite en un articulado. En esta Ley, que es perfectible, se podría haber dado ese paso adelante con mayor razón que la que la Ponencia ha tenido para admitir esas 13 enmiendas.

Y esto lo digo porque, por ejemplo, si estuviesen aquí los padres de todos los alumnos que van a ir a centros públicos en sitios donde hay más de uno, como ocurre en la provincia de Zaragoza, habría que decirles que pueden elegir el centro público que les interesa en la ciudad de Zaragoza, lo mismo que el centro privado. Esto no lo dice la Ley; se argumente lo que se argumente, la Ley no lo dice, y es un punto grave que la Ley lleva consigo.

Hay otro tema que también me preocupa profundamente, que es el de la regulación de la extranjería. Ayer se hablaba de los derechos de los hijos de los extranjeros. En este Título II se recoge la posibilidad de que se establezcan en el extranjero centros españoles. Yo me permití hacer una relación de la normativa que hay sobre extranjería, y vuelvo a recordarla. Hay cuatro Leyes fundamentales que regulan el tema de la extranjería, que son la Ley de 10 de diciembre de 1979, el Decreto de 17 de mayo de 1952, el Decreto de 24 de junio de 1955 y el

Decreto de 14 de febrero de 1974. La interpretación de todos estos textos es difícil, pero realmente importante, y se debería de haber recogido en la Ley.

A mí me sorprendió que ante un planteamiento tan serio como es el de la extranjería, ante la problemática de que se le va a plantear al señor Ministro de Educación en cuanto surja el tema de la reciprocidad, el tema de los convenios internacionales, el tema de los extranjeros en España, se haya pasado tan alegremente sobre este texto. A mí me sorprendió que quien contestó a este tema —y hoy en el Título II puede hacer lo mismo—, que fue el señor Quntanilla, dio evidentes muestras de ser un gran poeta, pero no las dio de conocer el Derecho internacional; me sorprendió que una persona que demostró tener muy poco conocimiento del Derecho internacional dijese, de una forma tan precipitada, que un residente es un señor que reside, sin tener en cuenta que la palabra «residente» es un concepto jurídico, un concepto que va a obligar a España cuando entremos en la Comunidad Económica Europea, cuando establezcamos relaciones internacionales, a hablar seriamente de lo que entendemos por un extranjero, de lo que entendemos por un centro extranjero en España y de lo que entendemos por un centro español que quiera establecerse en la Comunidad Económica Europea. Los temas son tan serios e importantes como para que les prestemos un poco más de atención.

Evidentemente, muchas enmiendas no tienen importancia, pero hay algunas que sí la tienen. Esta Ley es perfectible; no debemos aspirar a que no sea la Ley que quiere el Partido Socialista, por supuesto que no, pero por lo menos vamos a aspirar a que algunas de estas enmiendas se acepten, con el fin de dar la sensación de que el Senado está tratando de perfeccionar una Ley que va a afectar a todos los españoles.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene la palabra don Vicente Bosque Hita.

El señor BOSQUE HITA: Señor Presidente, señorías, salgo a esta tribuna condicionado por las palabras que se dijeron al comienzo de la sesión, en relación con que no seríamos contestados más que en aquellos puntos que coincidiesen con las enmiendas reservadas para esa conversación o propuesta, que por nuestra parte tan insistentemente estamos realizando desde el principio, de buscar una vía de diálogo para que esta Ley, en la medida de lo posible, sea la Ley de toda la sociedad española, no solamente la Ley de la mayoría.

Por eso, también tengo que añadir que no estaría en estos momentos hablando si no fuera en razón de ese diálogo que tan reiteradamente hemos estado pidiendo, no ya a lo largo de las debates en esta Cámara, sino desde que esta Ley fue presentada en el Congreso. Aquí se ha reprochado a nuestro Grupo que no se había presentado un texto alternativo, que se habían presentado muchas enmiendas.

En el Congreso se presentó muy seriamente un texto alternativo, perfectamente contrastable y defendible, y

también se presentó un número de enmiendas normal en cualquier proyecto de Ley importante. El Congreso no tiene limitaciones para discutir los proyectos de Ley en cuanto a tiempo; no obstante, de una manera incluso no reglamentaria, también se forzaron las discusiones, se limitaron los tiempos, se evitó de cualquier forma que pudiera ser viable el presentar por parte de la Coalición Popular una fórmula posible válida, discutida con buena voluntad e inteligentemente, para de verdad hallar ese punto de encuentro entre todos.

La Ley es tan importante que cualquier esfuerzo que hiciéramos todos por acomodarla a las necesidades de la sociedad española creo que nunca sería excesivo. Esto es en lo que venimos insistiendo; desde que el proyecto de Ley entró en esta Cámara hemos pedido el diálogo, hemos insistido por todos los medios y procedimientos para poder conseguirlo, pero no hay más que leer los titulares de Prensa, desde que empezamos a discutir en la Cámara esta Ley, para ver que sistemáticamente dicen que el Partido Socialista Obrero Español se niega a admitir ninguna clase de diálogo al respecto.

Así, seguimos ante algo que verdaderamente, como todos sabemos, va a condicionar de manera definitiva las conciencias de nuestros niños. Por cierto, que no se dijo ayer por primera vez, y por boca de un Senador socialista, la palabra «niño». Ha sido repetida varias veces aquí e incluso creo que por mi propia persona.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Bosque, ¿va S. S. a entrar en defensa de sus enmiendas?

He dejado un espacio para que entrara usted en calor. Cíñase a la cuestión, por favor.

El señor BOSQUE HITA: Toda la Ley es importante en cualquiera de sus partes y de sus títulos. Quizá no sea el Título Primero el más significativo de todos, aunque sí es el Título que por lo omnicompreensivo que es nos da un poco las señas de identidad de lo que pueden ser los centros. Nos habla un poco de los centros en general, nos habla después de los públicos, de los privados; y aunque quizás no sea el título más importante, es un título que también merece la atención de todos nosotros. Por eso es por lo que el número de enmiendas es elevado y por eso es por lo que, desde mis criterios personales, voy a tratar de llevar hasta sus señorías la preocupación por la posibilidad de modificar su contenido.

Hay un primer Capítulo, que se llama de Disposiciones generales, en el que se hacen una serie de determinaciones alrededor de qué centros son los que pueden ser comprendidos dentro de esta consideración de centros. Se habla de la denominación, de una serie de requisitos a cubrir, y también de la regulación de las materias optativas.

No cabe la menor duda de que esto es un principio para el trato de los otros dos capítulos que vienen a continuación. Y aquí surge esto que nos tiene que importar mucho, que hay que dejar perfectamente claro.

No puede haber, en manera alguna, ninguna diferencia

ni ninguna clase de disyunción entre las dos clases de centros: los centros públicos y los centros privados.

Personalmente, y también como consecuencia de lo que mi Grupo Parlamentario piensa y sostiene, estimo que la enseñanza pública y la enseñanza privada son, las dos a la vez, tan importantes que por ningún concepto podemos pensar que una pueda estar por delante o por detrás de la otra; las dos requieren la misma clase de atención. A todos nos importa que los centros públicos tengan la mejor calidad de enseñanza, como a todos nos debe importar que los centros privados también adquieran la mayor categoría y la mayor calidad de enseñanza. Digo esto porque en nuestro país cerca del 40 por ciento de la enseñanza está sostenida y atendida, en estos momentos, por instituciones privadas. Me parece que es un porcentaje lo suficientemente alto como para que todos nos preocupemos de mejorarla sustancialmente.

Podría caber la posibilidad de pensar que esa enseñanza privada debe ser modificada hasta el punto de que sea posible que se convierta toda ella en pública. Yo no digo que el Grupo Parlamentario que sostiene al Gobierno tenga esa intención, pero lo que sí es verdad es que seguramente —porque no se han llegado a meditar en profundidad las posibilidades que en el sentido de alcanzar este objetivo ofrece la Ley— pudiera ser que en un plazo desgraciadamente largo, con un interregno grande de tiempo, después del hundimiento de los centros privados, no habría posibilidad de sustituirlos por enseñanza pública, y dejaría a nuestro país absolutamente huérfano de este tipo de enseñanza.

El segundo Capítulo es el que se refiere a los centros públicos. Aquí se habla de cuáles son estos centros públicos. Yo también tendría que decir sobre el particular que me parecen necesarios, que puesto que no se quiso reformar el título de la Ley tengamos que acomodar la Ley al título. Por ello hay algunas enmiendas que tratan verdaderamente de hacer congruente título y Ley. No obstante, sigo pensando que hubiera sido más lógico que se hubiera hecho la otra acomodación.

Se habla de quién crea los límites del ejercicio de la enseñanza; se habla del principio de participación, del que todos, absolutamente todos, creo que estamos absolutamente conformes y convencidos, de la necesidad de la participación de todos los factores que concurren en el control y en la marcha de esta enseñanza; se habla, también de la programación de puestos. Sobre este particular sería necesario hacer grandes precisiones, porque la programación de puestos —por ejemplo cuando se hace con un tratamiento que puede reducirse exclusivamente a circunscripciones territoriales determinadas— puede no ir a cumplir los verdaderos objetivos de la Ley, y puede, por el contrario, crear distorsiones importantes en el desarrollo de esta planificación.

Y se habla también, incluso, hasta de problemas de admisión, donde, de alguna forma, yo personalmente pienso que pueden existir verdaderos problemas de inconstitucionalidad.

En cuanto a los centros privados, por supuesto que contemplan esa serie de circunstancias fundamentales,

como son las de quienes quieran o deban crear los puestos. Aquí también soy partidario de que habrá que tener alguna mayor precaución, posiblemente.

Se habla del carácter propio en el artículo 22, trascendental e importante, donde si el carácter propio no se puede garantizar, no en el momento de iniciar la marcha de una institución de enseñanza, ni tampoco en el momento en que un padre accede a un centro pensando en que conoce donde va a dejar a su hijo, sino la garantía de que ese carácter del centro va a pervivir a lo largo del tiempo. De otra manera equivaldría, como decía en Comisión, a que, una vez que uno hubiera entrado en un lugar público a ver una película, se encontrase con que la película que le ponían era radicalmente distinta. Como tampoco sería posible lo contrario, que el que entre en un centro a contemplar una determinada película, sabiendo que esa es la película y no otra distinta, después exija que la película se la cambien porque no le gusta. Esto a mí me parece que son consideraciones importantes que no podemos olvidar a la hora de determinar el contenido de este artículo 22 en relación con el carácter propio del centro; carácter propio del centro es el que, efectivamente, el titular quiere plantear como opción educativa a la sociedad. Carácter propio del centro es aquel que se puede mantener después en el tiempo; porque si no hay capacidad para dirigir, no hay capacidad para nombrar profesorado, no hay capacidad para regular la marcha del centro. Ese carácter propio del centro no existe más que teóricamente en el momento de comenzar a andar. Luego es un derecho constitucional, un derecho que se está reconociendo desde el principio, que no va a tener después ninguna posibilidad de ser respetado ni considerado. Esto, en líneas generales, son las consideraciones que pudiéramos hacer alrededor del Título Primero de esta Ley.

Vamos, de alguna manera, a ir puntualizando algunas de las cosas que en este recorrido de carácter general yo no he hecho.

Por ejemplo, se habla en el artículo 9.º de que los centros docentes, a excepción de los universitarios, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen. Mi enmienda es sencilla. En primer lugar, por congruencia con el título, yo no admitiría que continuase en el texto la excepción de ninguna clase de centros, puesto que entonces, repito, parece ser que el título de la Ley ampara la totalidad de las posibilidades de existencia de centros de enseñanza. También, cuando se habla de lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, yo pienso que, teniendo en cuenta que esta es una Ley Orgánica, es decir, una Ley de Bases que, como tal, normalmente tiene que ser desarrollada de manera fundamental por Disposiciones legales de rango de Ley, sería conveniente que recogiéramos en el texto, en lugar de «y disposiciones que la desarrollen», la expresión «por aquellas que le sean de aplicación», con lo cual este artículo 9.º vendría a decir: «Los centros docentes se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y por aquellas que le sean de aplicación».

Trataré, en la medida de lo posible, de no utilizar todas las enmiendas.

Vamos, por ejemplo, a la enmienda que se refiere al apartado 2, párrafo segundo, del artículo 10, que dice: «Se entiende por titular de un centro docente la persona física o jurídica que conste...». Me parece que, más que la expresión «se entiende por titular de un centro docente», sería más propio decir (porque creo que es así, no es que se entienda que lo sea, es que lo es por sí mismo, porque, efectivamente, ha ejercido el derecho de fundar un centro y, por tanto, es el titular del centro): «El titular de un centro docente es la persona...», etcétera.

Entiendo que el apartado 3 de este artículo 10 debiera terminar precisamente en el punto siguiente: «Los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán la denominación de centros concertados», eliminando el resto del artículo, porque no parece que sea necesario y creo que queda mucho más preciso y, por tanto, con mayor efectividad y eficacia para regular los problemas de la enseñanza.

En el artículo 11, punto 1, hay una enumeración de distintos centros, de distintas clase de centros: Educación Preescolar el título de la Ley; el título de la Ley habla en general de todos, y me parece que ya no acomodamos del título, no vamos a tener más remedio que acomodar el artículo. Por tanto, lo que sugiero es que se haga la enumeración de todos los posibles centros docentes existentes en el campo de la educación.

Al artículo 12, punto 1, entiendo que, aunque pueda parecer que no tiene demasiada importancia la enmienda, donde dice: «... una estructura y un régimen singularizados a fin de acomodarlos a las exigencias del medio», debe decir: «con el único fin», porque lo que creo que es importante que se determine es que ése es el fin y no es otro distinto.

En el apartado 2, donde dice: «Sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales o, en su defecto, del principio de reciprocidad, los centros extranjeros en España se ajustarán a lo que el Gobierno determine reglamentariamente», parece que lo lógico es que coloquemos esta clase de obligaciones a un nivel adecuado y congruente además con una serie de situaciones de reciprocidad que podamos tener con otros países extranjeros, y yo creo que aquí lo que habría que poner es: «ajustado a la legislación española vigente».

El artículo 13 dice: «Todos los centros docentes tendrán una denominación específica», y yo creo que la palabra «específica» puede inducir a errores; la palabra «específica» puede, de alguna manera, hacer pensar que se tiene que relacionar con alguna determinada clase de enseñanza que ese centro vaya a tener y que por su especificidad requiera que, de alguna forma, figure en la denominación de ese centro. Me parece que es mucho más propio que se diga «denominación propia del centro», con lo cual eliminamos esta posible clase de confusión.

El apartado 2 del artículo 14 habla de los requisitos que deben reunir los centros: «Los requisitos mínimos se referirán a titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y

deportivas y número de puestos escolares». Yo creo que a continuación de la palabra «deportivas» habrá que exigir a todos los centros que tengan su gabinete de orientación porque, si no, la labor del centro no va a ser suficientemente eficaz, no va a estar adecuadamente respaldada por las técnicas pedagógicas que deben de estar a disposición de nuestros escolares. Todo esto, además, en correspondencia con una serie de enmiendas que no fueron respondidas en la contestación que, de alguna manera, se me intentó hacer, cuando pedíamos una serie de garantías pedagógicas y una serie de garantías de aplicación de técnicas que estuvieran verdaderamente contrastadas y que fueran eficaces, con los mejores procedimientos para que nuestros escolares obtuvieran los mayores éxitos y, al mismo tiempo, se pudiera desarrollar su capacidad intelectual al máximo. Yo creo que, en una Ley que está regulando la vida de los centros, el que no se exija a los centros docentes que tengan gabinete de orientación, malamente podrán hacer frente a las responsabilidades educativas que se les exigen. Junto a los requisitos mínimos que enumera el punto 2 del artículo 14, estimo que también habrá que hacer constar los planes de estudios mínimos, porque sin estos planes de estudios mínimos va a ser muy difícil poder controlar y reglar toda clase de enseñanza; creo que estos planes deben constar entre los requisitos mínimos a exigir a un centro de enseñanza.

Pasamos al Capítulo II, de los centros públicos. La enmienda que en estos momentos someto a la consideración del Pleno es consecuencia del hecho de que, cuando defendimos la posible modificación del texto de la Ley, no fue recogida. Por tanto, repito, estamos, de alguna manera, condicionados por este Título y creo que habrá que adecuar el articulado. Hay que hacer que consten los niveles de enseñanza que son amparados por este Título, en las condiciones que, en cada caso, corresponda.

Vamos a pasar al artículo 17, que dice: «La creación y supresión de centros públicos se efectuará por el Gobierno o por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias». Yo creo que no hay que llegar a esta determinación de distinciones, porque me parece que diciendo Administración educativa competente queda suficientemente claro y amplio; cualquiera que sea, la Administración pública, el Gobierno, la Comunidad Autónoma correspondiente o cualquier otro nivel de la Administración quedan perfectamente recogidas. Es decir, en lugar de lo que el texto nos indica, establecer «Administración educativa competente».

En el artículo 18, apartado 2, donde dice «La Administración educativa competente», yo diría, que además de «velarán», incorporase la palabra «garantizarán». Parece mucho más efectivo decir no solamente velar, porque velar, sin que haya una acción concreta para conseguir que esa preocupación sea eficaz y efectiva, no conduce realmente al cumplimiento de los objetivos que se desean. Por eso creo que debe garantizarse esa efectiva realización de los fines de las actividades, etcétera, que es el texto que el artículo contiene, tal y como está en el proyecto que en estos momentos estamos debatiendo.

El artículo 20, número 1, después de haber sido recogida como enmienda del Partido Socialista la incorporación de la palabra «garantizará», en lugar de «satisfará», creo que debe quedar redactado en los siguientes términos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Bosque, acérquese al micrófono, porque no le oímos.

El señor BOSQUE HITA: Diría así: «Una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos garantizará tanto la efectividad del derecho», con la supresión de «en los ámbitos territoriales correspondientes», porque realmente parece que es una frase innecesaria, ya que, de entrada, en cualquier ámbito de aplicación esto está perfectamente recogido.

En el artículo 21, número 2, letra d), se establece una serie de precauciones en relación con la clase de personas físicas o jurídicas que tienen libertad para la creación y dirección de centros. En el número 2 se hace una enumeración, en la que se establece una serie de condiciones o circunstancias precautorias. Me atrevería a ser incluso más exigente con ello. Y en la letra d) no admitiría la posibilidad de que pudieran estar vinculadas personas, no que estén por debajo de un determinado porcentaje de capital en el centro, sino, ni siquiera, que participen con un número de acciones o parte de capital en la propiedad de ese centro. Creo que cualquiera de las circunstancias que se enumeran a lo largo del número 2 son lo suficientemente serias e importantes como para dejar absolutamente imposibilitadas de poder acudir a cualquier cercanía de una función de tipo educativo a personas que reúnan estas cualidades.

El artículo 22, número 2, dice que los titulares que opten por definir el carácter propio de los centros someterán dicha definición a autorización reglada, que se concederá siempre que aquél respete lo dispuesto en el apartado anterior. Personalmente pienso que es una limitación de derechos constitucionales, de derechos recogidos por la Constitución y que el ideario del centro, siempre y cuando concuerde con los principios que la Constitución defiende —y eso sí que no va a discutirlo nadie— es perfectamente lícito, y esta palabra «autorización» parece que es una intromisión en este campo de los derechos reconocidos a todos los españoles. Por eso, y con el carácter precautorio correspondiente para que el ideario pueda ser verdaderamente respetado, porque, si no, no tendría ninguna clase de virtualidad, propongo que el texto sea el siguiente: «Los titulares que opten por definir el carácter propio de control de tiempo, le digo que le queda un minuto, por si quiere acortar la disertación.

El señor BOSQUE HITA: Muchas gra Constitución y a esta Ley. En último término, los Tribunales de Justicia resolverán».

Creo que en el contenido de la Ley no hay ni una sola referencia a los Tribunales de Justicia. Considero que, en asuntos tan trascendentales o importantes como éstos, no cabe la menor duda de que la Administración no es,

no debe ser competente como para poder decidir en cada momento lo que es el respeto a los derechos, el respeto a las libertades, el respeto al contenido de la Constitución. Tenemos el Poder judicial, que es el único capacitado y dotado de la objetividad y neutralidad suficientes para poder decidir a todos estos efectos. Por eso la inclusión de esta cautela del Poder judicial me parece un elemento positivo y constructivo que espero que a todos nos pueda satisfacer.

El apartado 3 dice que el carácter...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Bosque, a efectos de control de tiempo, le digo que le queda un minuto, por si quiere acortar la disertación.

El señor BOSQUE HITTA: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación con el artículo 22, apartado 3, dice el texto de la Ley: «El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa por el titular». Yo lo precisaría más, porque me parece que no es bastante con decir esto. Lo que yo diría es lo siguiente: «el carácter propio y el ideario del centro serán públicos y deberán ser puestos, previamente a su incorporación al centro, a los distintos miembros de la comunidad educativa por el titular, a los efectos de que todos, padres, alumnos, profesores y empleados puedan ejercer su derecho a escoger en libertad su incorporación o no al centro».

Se me ha agotado ya el tiempo, pero me parece que, por ejemplo, en el artículo 24, apartado 3, estimo que debiera terminar diciendo que «en ningún caso serán superiores a las establecidas en los centros privados correspondientes». Me estoy refiriendo a que las condiciones mínimas que se deben exigir al centro deben ser semejantes las de los centros públicos y privados.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra don Francisco Cacharro Pardo.

El señor CACHARRO PARDO: Señor Presidente, señorías, nuevamente concurre aquí, a la tribuna, para defender una serie de enmiendas referidas al Título I de esta Ley.

Entre estas enmiendas presento varias de ellas que van encaminadas a que se produzca un mejor conocimiento de las competencias que ya tienen reconocidas las distintas Comunidades Autónomas. Entre ellas, por supuesto, las Comunidades Autónomas tienen potestades reglamentarias, y, desde luego, parecería innecesario el aludirles aquí en este momento, pero es que resulta que la LODE, en distintos artículos, hace referencia a posteriores desarrollos reglamentarios, y a otras funciones, y a otras competencias, y a otras competencias, y por eso yo creo que conviene determinar a quién corresponden tales facultades en cada caso. Además, en unos casos el texto del proyecto de Ley dice a quién corresponden y en otros

casos no lo dice, y concretamente en el artículo 11 hay un punto en el que sí creo que es conveniente que se definan cuáles son las competencias que tienen las Comunidades Autónomas.

En el apartado 1 del artículo 11 se hace una clasificación de distintos centros escolares, y en el apartado 2 se dice: «La adaptación de lo preceptuado en esta Ley a los centros que impartan enseñanzas no comprendidas en el apartado anterior, así como a los centros integrados que abarquen dos o más de las enseñanzas a que se refiere este artículo, se efectuará reglamentariamente», pero no se dice por quién.

Creo que estamos ante un caso muy similar y muy paralelo al del artículo 41.3. En el apartado 3 del artículo 41 se atribuye expresamente a las Comunidades Autónomas las competencias para adaptar lo dispuesto en ellas sobre composición del Consejo escolar a centros que revistan unas características especiales. Pensando en que existen centros de enseñanza integrada que han sido transferidos, por ejemplo, a Cataluña, a Galicia, a la Comunidad Autónoma andaluza, creo que tampoco debiera quedar esto en el aire, sin definir a quién se atribuye esa facultad reglamentaria.

Y no se me hubiera ocurrido la duda si no fuera porque en otro lugar, como éste que cito del artículo 41.3, sí se dice expresamente a la Comunidad Autónoma. Entonces, ¿por qué razón no se ha de poner aquí? Por este motivo propongo la adición de un nuevo número 3 con esa finalidad. Pero también creo que sería lo mismo completar este número 2 diciendo: «Se efectuará reglamentariamente», tal y como dice el texto, y añadiendo «por la administración educativa de la que dependan estos centros». Creo que cumpliría esta adición la misma función que la de ese nuevo número que propongo. Entiendo que las Comunidades Autónomas tienen potestades suficientes reconocidas para tal fin y convendría clarificarlas para no dejar dudas sobre este particular.

Otra enmienda de las que presento, la 2.473, se refiere al número 2 del artículo 14. En este artículo 14 se intentan definir unos requisitos mínimos relativos a los centros. Yo propongo la supresión, al final del requisito referido al «número de puestos escolares». Comprendan los señores Senadores que esta circunstancia puede estar afectada por diversos condicionamientos de carácter geográfico, problemas de distancia, de localización de las viviendas de los escolares, razones de tipo climático, sociales y económicas en general, y creo que quien tiene más capacidad para jugar y definir tales circunstancias es la Administración más próxima, a la que, por otra parte, han sido transferidas también las facultades de creación y supresión de estos centros. Por esta razón entiendo que debe suprimirse y, en cambio, añadirse un número 3 nuevo, que constituye la enmienda número 2.474, en la cual se dice: «Las Comunidades Autónomas con competencia en la materia tendrán facultad para el establecimiento de los requisitos exigidos en relación con el número mínimo y máximo de puestos escolares.»

Tengo la impresión, desde luego, de que en algunos de los artículos de la LODE parece como si anidara cierta

vocación centralista, diría; que, en alguna medida, la LODE es poco autonomista; que no respeta suficientemente las competencias que tienen las Comunidades Autónomas reconocidas en sus Estatutos y aquellos servicios que les han sido transferidos. Creo que resulta excesivo que la Administración central entre a establecer los requisitos mínimos de los centros. Pienso que las Comunidades Autónomas, como es el caso de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, tienen competencia, decía antes, para crear estos centros, y pudiera resultar una injerencia en esas competencias. Considero que, al menos, como digo, el requisito de establecer el número mínimo de puestos escolares debiera dejarse a la libre decisión de la Comunidad Autónoma. Por otra parte, entiendo que acaso se contravenga lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, que atribuye estas funciones a los poderes públicos, y ahí se incluye tanto la Administración central como las Comunidades Autónomas.

Otra enmienda, la 2.475, se refiere al artículo 24, número 3. El número 3 del artículo citado dice: «El Gobierno determinará reglamentariamente las condiciones mínimas en que se deban impartir las enseñanzas en los citados centros docentes para su clasificación, así como los efectos derivados de la misma». Esta enmienda sigue en la misma línea que las anteriores. Lo que propongo aquí también tiene como finalidad que se garanticen y se respeten las competencias de las Comunidades Autónomas. Las Comunidades tienen facultades reconocidas en sus Estatutos para elaborar normativa, y a esa normativa que elaboren las Comunidades Autónomas deben someterse los centros autorizados. Creo que el artículo 27 de la Constitución española, en su número 5, cuando habla de los poderes públicos, está estableciendo este principio a que yo estoy aludiendo ahora. Es posible que esta determinación, esta facultad que se intenta...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Cacharro, ya veo que usted no hace caso a la luz roja. No quería llamarle la atención, pero ha terminado su tiempo. Le ruego que concluya.

El señor CACHARRO PARDO: Gracias, señor Presidente.

Simplemente quería decir que, entre las competencias que se reservan como exclusivas del Estado en el artículo 149 de la Constitución, entiendo que están las normas básicas. Estos requisitos mínimos no pueden considerarse como normas básicas, y entiendo que no son función de la Administración central.

Señor Presidente, las enmiendas que no he podido defender quedan mantenidas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Don José Calderón Llamas tiene la palabra.

El señor CALDERÓN LLAMAS: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, voy a tratar de defender sucintamente las enmiendas que tengo presentadas al Título I de esta Ley en los tres capítulos. Voy a defenderlas, aun-

que tenga el convencimiento de que no se va a aceptar ninguna, pero tengo que hacerlo así porque creo que es, como expresé ya en mi intervención el día pasado, una Ley importantísima y considero que este Título I es la columna vertebral de esta Ley.

Voy a empezar por el artículo 9.º, al que tengo una enmienda de modificación y propugno un texto alternativo a este artículo que diga que los centros docentes, a excepción de los universitarios, tanto públicos como privados, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen. Se trata de una Ley de EGB, BUP y Formación Profesional y, al no especificar los centros, podía pensarse que los centros universitarios estarían incluidos ahí.

Al artículo 10.1 mantengo una enmienda por la que pido que donde dice «podrá ser» diga «será», ya que «podrá ser» es un futuro condicional que no afirma nada, y «será» es un futuro perfecto que es afirmativo.

Al artículo 11 tengo una enmienda por la que propongo que en lugar de decir abarquen dos o más disciplinas de impartición, se diga «que se imparten dos o más disciplinas». Gramaticalmente me parece que es más correcto «abarcar» que «impartir».

La enmienda número 109, al artículo 11, propone añadir al final del punto segundo «... de estos centros que no sean considerados básicos en las citadas reglamentaciones, como conservatorios de música y declamación, escuelas de artes y oficios, pintura, escultura», etcétera, ya que aquí, en este punto, no se especifican las actividades de estos centros, y creo que se complementaría este artículo especificando estos centros.

En cuanto a los centros extranjeros, yo pienso que donde dice «Gobierno», debe decir «Gobierno español», y digo que tiene que decir «Gobierno español» porque los centros extranjeros, como es el Colegio alemán, que no sé cómo funciona, tienen que seguir unas normas que impone el Gobierno alemán. Es una laguna que habría que salvar poniendo «Gobierno español».

Al artículo 13 propongo la enmienda número 192, de texto alternativo, que dice: «Todos los centros docentes se inscribirán en un registro público dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, con una denominación específica en la que se referencie: la clase de enseñanza que imparta el centro y nombre con que se le haya fundado. No podrá emplearse por parte de los centros identificaciones diferentes a las que figuren en la correspondiente inscripción registral».

La enmienda número 1.722, al artículo 14.1, propone que se cambie la palabra «todos» por «cualquier centro». Creo que especifica más el artículo y queda más claro lo que quiere decir.

Al apartado 2 del artículo 14 propongo un texto alternativo que diga que los requisitos mínimos se referirán a la titulación académica del profesorado, instalaciones docentes y deportivas y relación numérica profesor-alumno. Es decir, que yo creo muy interesante el número de alumnos por unidad. No creo que un profesor pueda hacer una labor docente positiva si tiene más de treinta alumnos en su clase, y digo esto porque yo he tenido

alguna experiencia, hace ya bastante tiempo, en este aspecto.

En el Capítulo II, la enmienda número 194, al artículo 16, propone un texto alternativo al punto 1: «Los centros docentes públicos de educación preescolar se denominarán centros preescolares. Los centros de EGB y FP en primer grado se denominarán colegios de Educación General Básica, y los Institutos de Bachillerato y FP en segundo grado se denominarán Institutos de Enseñanza Media». Justificación: creo que se plasma con más claridad el concepto de lo que debe ser y el nombre que debe tener un centro de enseñanza.

La enmienda número 476 propugna cambiar la palabra «colegios» por «centros».

La enmienda número 2.767, donde dice: «... se efectuará por el Gobierno o por el Consejo de Gobierno», propugna que debe decir... «dependerán de las decisiones del Gobierno o del Consejo de Gobierno» de la Comunidad Autónoma correspondiente. Indiscutiblemente, yo creo que, al fin y a la postre, después, serán las Comunidades Autónomas las que tengan que decir las normas que tienen que seguir los centros.

En el artículo 20.1 propongo un texto alternativo que diga: «En los ámbitos territoriales correspondientes se establecerá una programación adecuada en los puestos escolares gratuitos que garantice la posibilidad de escoger centro docente y la efectividad del derecho a la educación», matizando esto con que sea un centro docente público o privado, porque no se matiza en el artículo.

En el Capítulo III, la enmienda 274, al artículo 21.2, propone la siguiente redacción: «No podrán ser titulares de los centros docentes privados: a) Los funcionarios que presten servicios en la administración educativa estatal, autónoma o local. b) Las personas físicas que tengan antecedentes penales por delitos dolosos. c) Las personas físicas o jurídicas expresamente privadas de este derecho por sanción administrativa o sentencia judicial firme».

Yo creo que esto está un poco más claro para saber cómo tienen que ser los titulares de los centros docentes, y ya dije cuando hablé del artículo 5.º del Título Preliminar que se debía ampliar.

En el artículo 23 presento la enmienda 2.134, y donde dice que los centros docentes privados «se someterán al principio de autorización administrativa...» propongo que se cambie esta frase por: «Los centros de enseñanza privados no sostenidos con fondos públicos irán precedidos de autorización administrativa». Si hay centros privados que no se sostienen con fondos públicos no tendrán que estar en estas reglas del juego.

Al artículo 24.2 propongo un texto de modificación y digo: «Los centros docentes privados, cuyos niveles de enseñanza no sean obligatorios, podrán ser cualificados en libres, habilitados u homologados y gozarán de plenas facultades académicas». Son cambios de algunas palabras que aclaran el artículo.

Al artículo 24.3 mantengo la enmienda 277. Yo creo que debe decir: «El Gobierno determinará reglamentariamente las condiciones mínimas de enseñanza que deban reunir los centros docentes privados, para su clasifi-

cación dentro de la presente Ley y los principios constitucionales». Yo creo que es una redacción más correcta que la que viene expresada en la Ley.

Al artículo 25 tengo presentada la enmienda 1.262, y donde dice: «Dentro de las disposiciones de la presente Ley los centros privados no concertados gozarán», etcétera, propongo que se cambie por la frase: «Los centros educativos privados no concertados, dentro de las disposiciones de la presente Ley y normas que la desarrollen...», y lo demás sigue lo mismo.

La enmienda 278, al artículo 26, es una enmienda de supresión de la palabra «concertados» para sustituirla por la de «subvencionados» en el punto 1 de este artículo.

En cuanto a la enmienda 2.107, al artículo 26.1, donde dice: «Los centros privados no concertados podrán establecer...» debe decir: «Los centros educativos privados no concertados —o no subvencionados— «cuando lo consideren oportuno, establecerán...».

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Gracias, Senador Calderón.

Don Ambrosio Calzada Hernández tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Señor Presidente, defendí en Comisión la enmiendas del Senador Calzada y quisiera proceder a defenderlas ahora, con la venia de la Presidencia, en esta sesión de Pleno.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ¿Está el Senador Calzada?

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: El Senador Calzada no está y yo defendí sus enmiendas en Comisión, como así consta, y así se hizo ya en el Título Preliminar. *(Pausa.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Senador, pase a defenderlas.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Señor Presidente, señorías, reiterar que ya tuve el honor, aunque sucintamente, de defender las enmiendas del Senador Calzada al Título Preliminar en el trámite de Comisión, donde recuerdo que dije que el celo de los empleados de Iberia impidió que el celo del Senador Calzada para estar aquí fuera incompatible, ya que el celo de aquéllos era mayor que el celo suyo, que era solo.

Entonces, pese a que pueda o no satisfacer a alguien, no a la Presidencia que me ampara y me protege, voy a defenderlas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Yo quería decirle que debe ser una apreciación del señor Presidente, en circunstancias especiales, porque yo no tenía conocimiento de ello. Desde el punto de vista de esta Presidencia no lo considero reglamentario, pero como este Vicepresidente suple a la Presidencia, acepta todos los

dictámenes previamente emitidos, pero le rogaría que no hiciera comentarios reglamentarios.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Ni al reglamento ni a las interpretaciones.

El señor Calzada tiene presentadas 11 enmiendas y creo que me corresponden once minutos.

La primera enmienda de don Ambrosio Calzada es la enmienda 910, al artículo 10.2, de este Título I. El artículo 10.2 dice que son centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público. Nosotros, en vez de decir «centros públicos», propugnamos en esta enmienda 910 decir «centros educativos de naturaleza pública».

Esta tarde o esta mañana ya se ha hablado aquí de hasta qué punto es equívoca o por lo menos no concreta la expresión «centro público», que es demasiado enunciativa. Un centro público no es un lugar que expicite muy debidamente que es o que se trata de un centro dedicado en exclusiva a actividades educativas, que es a lo que, en definitiva, se refiere la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que con tanto interés como tesón estamos todos defendiendo y otros atacando con igual interés que tesón. Por ello, y porque creemos que es mejor fijar con claridad cuál puede ser el ámbito de esta Ley, una Ley tan controvertida, entendemos que esa claridad dirigida a determinar a qué clase de centros estamos refiriéndonos, es por lo que hemos pensado —sin que con esto pretendamos descubrir el Mediterráneo, que está hace mucho tiempo descubierto— que con esta precisión la enmienda que defendemos nos lleva a una mejor y más indispensable o puntual puntualización, y perdón por la redundancia. Al decir «centros educativos de naturaleza pública» parece que es un lenguaje más jurídico, más forense y más legislativo.

El señor Calzada, en cuyo nombre me honro en hablar, además de compañero y paisano, tiene otra enmienda, que es la 858, al artículo 11 de esta asendereada Ley, y al final del segundo párrafo del artículo 11, después de hablar de adaptación de lo preceptuado en esta Ley a los centros que impartan enseñanza —no entramos en ello, pero al final habla de esta circunstancia y de este diseño que abarca— termina diciendo que la adaptación «se efectuará reglamentariamente».

Ya sabemos que ésta no es de las enmiendas más importantes, también sabemos que las 4.160 no son todas importantes, como ya dije el otro día al señor Ministro aquí presente, aunque ayer en ese momento no estaba, pero suele estar constantemente, le agradecí el amparo que nos dio a los Senadores de las 4.160 enmiendas, cuando hablando en esta tribuna —y todos le escuchamos con tanto respeto, aunque no llegara a convencerlos— el señor Ministro nos tranquilizó diciéndonos que por lo menos 4.160 enmiendas eran legítimas, pues dentro de la legitimidad de la enmienda, aunque no dentro de la magnificencia de la misma ni de su contenido ni de su impresionante sentido y trascendencia, nos ha molestado un poco lo de «efectuará». Creemos que el verbo «efectuar» es un concepto mucho menos determinante y claro que «hacer». El verbo «hacer», que casi con el

«ser» y «estar», y otro que por desgracia practicamos en la vida cotidiana, en el lenguaje coloquial español y que no cito por respeto a esta Cámara, es, junto a esos otros, un verbo auxiliar.

Creemos que el verbo «efectuar» es muy complicado. Un querido compañero nos recordaba que en las Cortes Generales hubo una Comisión de estilo. A eso vamos. El verbo «efectuará» me suena a lenguaje de altavoz de estación, casi es un lenguaje de Renfe: el expreso situado en la primera vía del tercer andén va a efectuar su salida; el rápido de Irún efectuará su salida. Yo creo que era mucho más sencillo decir: señores viajeros, el tren va a salir. En lugar de decir que se efectuará reglamentariamente pensamos que es mejor decir que se hará. Hemos dicho que esta enmienda no es de las más importantes, pero, repito, que no pretendemos que las 4.160 lo sean.

La enmienda 175, al artículo 12.1, dice que los centros españoles en el extranjero tendrán su singularidad a fin de acomodarse a las exigencias del medio. A uno que procede transitoriamente del «Ancien Régime» como funcionario público, lo de acomodarse a las exigencias del medio le recuerda un poco aquello de cuando la censura se levantaba tenuamente y había, si no algún desnudo que no era muy aceptable, si alguna procaz postura, siempre se decía que podía tolerarse por exigencias del guión.

A mi no me gusta que en un artículo que afecta a la Ley Orgánica tengamos que hablar de «acomodarse a las exigencias del medio». Creo que es mucho más fino y más sencillo decir «acomodados a las exigencias del medio». La expresión es un poco redundante, un poco turbia. A nosotros el lenguaje jurídico como el vino fino de Jerez nos gusta transparente, con los grados suficientes y, a ser posible, fresco, si no el vino se encabeza, se encampana y se remonta.

Dentro de estas aportaciones estilísticas que forman parte de este contexto general, en el que se acomodan unas y otras aspiraciones legítimas según manifestaba el señor Ministro, creemos que la acepción no es feliz, que no es fina. No seamos redundantes, no seamos redichos. No digamos «singularizados a fin de acomodarlos a las exigencias del medio», sino «acomodados a las exigencias del medio», etcétera.

La enmienda 634, al artículo 14.1, donde dice «con garantía de calidad» nosotros decimos «con garantías de calidad». Una «s», apúntenla, por favor. Esta es una enmienda legítima, es verdaderamente de estilo y lógica. En el contenido de todo este apartado, de todo este Título y de toda la Ley que la hemos estudiado durante los dos meses que da la Ley más un mes que nos regaló alguna inadvertencia, durante los tres meses a partir del 27 de diciembre que entró en el Senado, la hemos estudiado a fondo, la hemos desmenuzado, la hemos abierto, hemos hecho una anatomía, hemos hecho una labor casi de forense para ver dónde engranaban unas aspiraciones y otras y hemos apreciado que nada de lo que estamos diciendo, ni siquiera una «s» es fruto de la improvisación, de la ligereza o de la frivolidad que alguien nos reprocha. No somos frívolos. (*Un señor Senador hace ges-*

tos de aplaudir.) Muchas gracias, tantas veces como me aplauda se lo agradeceré.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Ya sé que todos estamos cansados y la Presidencia distrae su atención. Ruego a los señores Senadores no hagan gestos que interrumpen al orador, y ruego al orador que cuando se dirija al Pleno lo haga a través de la Presidencia.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Así lo haré, muchas gracias y perdón.

Decía que en todo lo que venimos haciendo en este profundísimo estudio que tantas horas nos ha llevado, advertimos que generalmente se vienen expresando en el proyecto de Ley términos en plural y casi nunca en singular. Se habla de centros docentes; de requisitos mínimos, se habla de enseñanzas, siempre en plural. ¿Por qué aquí en vez de hablar de «garantía», que parece que es una, no hablamos de «garantías»? Así seríamos respetuosos, acordes, iríamos en una misma línea, en una misma senda con el resto de la semántica, de la precisión terminológica, ortográfica o sintáctica. No estoy enterado de cómo viene lo demás.

Las referencias son todas en plural. Creemos que este término podrá y deberá ser utilizado en plural porque forma parte mejor del encaje, de la armonía, del diseño, de esa perfección redonda que debe tener todo lo que es producto de la ilustración, de la creación del hombre: un cuadro, una escultura, el arte, una idea.

Se ha dicho aquí por un ilustre literato y no menos ilustre y barbado Senador socialista que un verbo puede cambiar el tono total de un discurso, nosotros creemos que un verbo es sólo un instrumento del lenguaje que en su mayoría forma parte de un todo armónico, de un engranaje perfectamente organizado como un verdadero cerebro electrónico, por usar un lenguaje del acervo común, moderno. Qué duda cabe que ningún elemento, ni un verbo, ni un acento, ni un adverbio, ni un artículo, ni un diptongo puede ser desdeñable, puede ser vituperado o puede ser tenido como poco importante. En este caso cualquier signo ortográfico es, por lo menos, tan importante como un verbo.

El Senador socialista y literato catalán señor Barral dijo que del verbo «inculcar» se puede predicar pisar, que proviene del verbo latino «calcare». Nosotros podemos decir que de singular a plural puede haber la misma abismal diferencia que en la praxis política puede irse de lo uno y unitario a lo vario. Es decir, puede ir la misma distancia en política que de la autocracia a la diversidad democrática. La autocracia es de uno y la diversidad es de todos. Lo singular es de una sola persona y no vamos a citar ninguna, no reciente sino de siglos ha.

La enmienda 1.878...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor Fernández Fernández-Madrid, ha terminado su tiempo.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Mu-

chas gracias. Únicamente en nombre del señor Calzada, en cuanto que ejercito su derecho, quiero dejar claro y sentado que la enmienda 1.887, al artículo 15; la enmienda 1.231, al artículo 16.2; la 1.416, al 21.2; la 3.176, al 22, que es de los artículos de oferta, la damos por defendida; la enmienda 2.144, al artículo 23...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ¿Las está retirando?

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: No.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Entonces las damos por defendidas porque están relacionadas.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Gracias. Me ha ahorrado un trabajo que no hubiera sido penoso, pero sí excesivo.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Está ya hecho por la Presidencia.

Tiene la palabra don José Cremades Mellado.

El señor CREMADES MELLADO: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, voy a pasar a defender 18 enmiendas que tengo presentadas a este Título I.

Quisiera empezar, de alguna manera, haciendo referencia a todas en su conjunto para luego pasar a explicar a SS. SS. uno a uno los motivos de su presentación. Es posible que entre estas 18 haya algunas que sean importantes y otras que no lo sean tanto; pero hay una realidad que aquí se ha repetido todos los días y a todas las horas pese a que parezca lo contrario: que yo personalmente y mi Grupo también creemos que todas y cada una de ellas son importantes. Y son importantísimas por una razón que pienso exponerles a continuación.

¿Por qué he presentado yo concretamente 18 enmiendas a este Título y por qué la presentación de tantas y tantas enmiendas? En primer lugar, porque sabemos lo que se juega la sociedad española con esta Ley. En segundo lugar, porque, entre las características de nuestra sociedad española, hay una muy importante que conviene resaltar, y es la gran preocupación existente hoy por los problemas de la educación. Hay una tercera razón que creo que SS. SS. compartirán conmigo, y es la gran preocupación de todos los padres de familia por buscar hoy día, yo diría más que nunca, un camino para sus hijos. Sus señorías saben precisamente que eso hoy resulta bastante difícil, y tal vez por la falta de una Ley de educación clara, que realmente ayude a esos padres de familia, a esa sociedad, a todos, también a los que estamos aquí, a resolver todos esos problemas que tiene planteados hoy nuestra sociedad.

Precisamente esa riqueza que supone esa problemática educativa, que nos mueve a estar aquí en esta Cámara, discutiendo día tras día este proyecto de Ley, es porque tiene dos graves riesgos: uno es la posible confusión de ideas...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Senador Cremades, ¿quiere usted entrar a defender sus enmiendas, por favor? Los porqués y las consideraciones generales no son objeto del turno de defensa de enmiendas; además, los vamos oyendo en la Cámara continua y reiteradamente, y ya está el turno de portavoces para hacer esas consideraciones. Entre usted en la defensa de las enmiendas.

El señor CREMADES MELLADO: De acuerdo, señor Presidente. Muchas gracias.

A través de estas 18 enmiendas que voy a pasar a exponer a SS. SS., yo quería, simplemente, si me lo permite la Presidencia, decir que mi pretensión no era tanto el que se pueda aceptar una a una o alguna de ellas, sino más bien que las mismas sirvieran para seguir meditando y pensando sobre esta importante Ley.

Paso a la enmienda número 1.216, al artículo 9.º, en la que pretendo que en el texto se introduzca «habrán de regirse por» en lugar de lo que figura en el proyecto de Ley, que dice «se regirán por». (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*) Esto tiene una causa y una explicación muy sencilla, y es que, como SS. SS. saben, hay dos formas de usar los verbos, una, irregular y, la otra, regular. Precisamente por esta causa yo creo más correcto usar la fórmula que propongo, que es la de «habrán de regirse por».

La enmienda número 913, al artículo 10.1, es una enmienda, señor Presidente, que retiro por cuanto mi compañero, el señor Blesa, ha defendido otra muy similar y, además, de forma mucho más completa que lo pueda hacer yo.

Respecto a la enmienda número 2.486, al artículo 11, al igual que dije ayer en una enmienda que presenté al Título Preliminar, creo que es mucho más correcto en este proyecto de Ley que nos ocupa usar la palabra «impartir» que «abarcar», y por eso mantengo la enmienda en el sentido de que en el texto se deba decir «que impartan varias», en lugar de «que abarquen».

La enmienda número 914 —no voy a cansar a SS. SS. con su explicación— la sigo manteniendo, pero, si ustedes recuerdan, la ha explicado igualmente, y muy bien, mi compañero, señor Blesa.

La enmienda número 82, que en el texto habla de «identificaciones», por mi parte creo que sería mucho más correcto hablar en este artículo y apartado de «denominaciones», puesto que creo más oportuno que la palabra «identificaciones» se identifique, precisamente, con la Administración a la hora de recibir las solicitudes.

La enmienda 1.721, la retiro, señor Presidente.

La enmienda 1.512 pretende variar el texto en el sentido de que diga «y dentro de los límites que fijen las leyes», en sustitución del texto, que dice «dentro de los límites fijados por las Leyes», puesto que la palabra «fijados» puede parecer que se refiere a algo pasado, mientras que «fijen» nos pueden servir para el presente, el pasado y el futuro.

La enmienda 1.234 es simplemente que en el texto viene «educación general básica» con minúsculas, y creo

que tiene su importancia que «Educación General Básica» figure con mayúsculas, puesto que el resto concretamente de las denominaciones de los distintos centros a la que se hace referencia en el apartado, todas vienen exactamente con mayúsculas, menos el de «educación general básica».

La enmienda 484 la mantengo, y ahorro a SS. SS. de escucharme.

La enmienda 1.224 pretende sustituir la palabra «velarán», porque, sinceramente, no me parece muy adecuada. Mi propuesta es la de usar la palabra «cuidarán», por una sencilla razón, que posiblemente SS. SS. no la compartan, pero creo que la palabra «velar» significa concretamente no dormir, pasar la noche velando, trabajando, e incluso tiene otro sentido más triste. Creo, sin embargo, que si se usara la palabra «cuidar», que significa poner atención, esmero en una cosa, sería mucho más indicado.

La enmienda 2.401 la mantengo, y ahorro a SS. SS. el escuchar su explicación.

La enmienda 719, igualmente la mantengo.

La enmienda número 55, al artículo 21.1, igualmente la mantengo.

La enmienda número 670, señorías, es al artículo 22.1. El texto dice lo siguiente: «Establecer el carácter propio». Mi enmienda pretende que el texto diga: «Establecer el ideario propio». Creo, señorías, que en esta palabra «ideario» y en su significado se centra una de las cuestiones principales de estos debates, y de alguna manera —y me van a perdonar SS. SS. de la mayoría de esta Cámara— da la impresión de que se tenga cierto recelo o cierto miedo a usar esta palabra en todo lo que ella significa, en toda su extensión. Yo creo que la palabra «carácter», que es la que consta en el texto, puede significar indole, condición, personalidad propia, mientras que la palabra «ideario», según mi punto de vista, comprende la exposición y puesta en práctica de una serie de ideas, y creo que esa exposición y puesta en práctica de una serie de ideas está recogida perfectamente en la Constitución y no voy a citarles artículos, puesto que ya se han citado suficientemente en la Cámara. Por eso pienso que recoger la palabra «ideario», en este artículo y apartado, sería, aunque parezca mentira, un gran paso para dar confianza a las personas físicas o jurídicas que, haciendo uso de sus derechos constitucionales, sientan el atractivo de lanzarse a esa bella tarea que es la educación en libertad.

La palabra «ideario», señorías, hace posible el ejercicio de algunos de los derechos fundamentales, como puede ser el de la creación de centros y el de los padres a elegir aquel tipo de educación que quieran para sus hijos. «Ideario» no es una palabra más que yo quiera colocar en este texto por gusto. Sin el uso adecuado, sin el respeto a lo que significa la palabra «ideario», se podría violar el artículo 26.3 de la Declaración de los Derechos Humanos. Sin respeto y garantía para el ideario, se podría violar el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por España. Sin respetar el significado de «ideario», la enseñanza no estatal, señorías, no estaría garantizada.

El ideario, para mí, señala la intencionalidad de la

educación, dirigiendo la acción hacia una meta determinada, y como esos derechos, señorías, están reconocidos —repito— en la Constitución, es por lo que este Senador, modestamente, pretende que SS. SS. acepten esta rectificación del texto.

Y voy a proseguir con la relación del resto de las enmiendas.

La 2.135, al artículo 23, pretende cambiar las palabras que constan en el proyecto de Ley y que dice: «se someterán». Sinceramente, creo que esta última no es la palabra adecuada, porque sus sinónimos podrían ser dominar, domar o vencer, y entonces, si yo tuviera que abrir un centro docente e ir a hacer mis gestiones para ello, posiblemente tendría que pensar que, para conseguirlo, me tendría que dejar dominar, domar o vencer. Por tanto, pienso que el texto se podría cambiar y dejarse tal y como yo propongo en mi enmienda, que dice textualmente: «Los centros docentes no sostenidos con Fondos públicos para su apertura y funcionamiento solicitarán autorización administrativa.»

La enmienda número 1.661 creo que también se ha defendido por mis compañeros en otras ocasiones con enmiendas similares y, por tanto, la mantengo y no la describo.

La enmienda número 1.629 simplemente trata de sustituir las palabras: «no concertados» por «no sostenidos», y como también se han hecho ya algunas reflexiones sobre este cambio, voy a pasar a la 2.108, que es exactamente en el mismo sentido.

Con esto, señorías, doy por defendidas mis enmiendas, agradezco su atención y acabo. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Moreno tiene la palabra.

El señor MORENO FRANCO: Muchas gracias, señor Presidente, y en el fondo porque uno a veces no tiene más remedio que responder a tantas palabras. Y quizá fuera bueno empezar diciendo que nunca tantas palabras se correspondieron con tan exiguo número de ideas. De ideas que, además, no son siempre claras ni tan siquiera coherentes, porque aquí se han hecho defensas de idearios, de caracteres propios del centro, cuando hay otras enmiendas de compañeros de Grupo de S. S. que pretenden nada más y nada menos que eliminar la posibilidad de que los centros que conciertan, desde su naturaleza de centros privados, puedan establecer carácter propio.

Pero, en fin, yo quería ir un poco al fondo de lo que aquí se ha dicho. En el fondo, todo se viene a mover en un telón de cambio, en el que, como es natural, se suscitan inquietudes y también se generan esperanzas, y hay quien habla desde la inquietud y hay quien habla desde la esperanza. Y le digo esto a S. S. porque ha dicho que en nuestro país hay preocupación por estos temas. Y es cierto. Pero esa preocupación tiene una componente de inquietud, que, a lo mejor, representan SS. SS., y tiene también una componente de esperanza, y que, a pesar de

lo que digan en las vallas publicitarias, se sabe muy claramente a quién representan.

Y esto ¿cómo se reparte en la realidad? Con independencia de lo que ustedes nos quieran contar, y yendo a esa cuantificación numérica, tan objetiva, que tanto les gusta a algunas de SS. SS., sobre una muestra de alcance nacional y de un tamaño de 2.000 adultos, resulta que el 74 por ciento de los encuestados que respondió piensa que la enseñanza va a mejorar. Mientras que, de entre los que responden, es sólo un 23 por ciento los que no ven tan clara esa posibilidad. Y esto no sólo sucede en la enseñanza; sucede en otras situaciones también, en Ministerios, que a SS. SS., parece no hacerles excesiva gracia, y perdón por la alusión, como, por ejemplo, en materia de política exterior, donde los porcentajes son también interesantes. El 66 por ciento piensa que va a mejorar y sólo un 27 por ciento de los que responden piensa que no va a suceder así.

¿Por qué les digo estas cosas? Se lo digo porque —ahora ya con alguna seriedad— cuando a uno se le habla de encuestas en las que aparecen los altavoces de las estaciones, «¡cuidado, con perder el tren, señorías!», los diptongos (tremenda palabra esta), el fino de la Feria de Sevilla, que a veces se enturbia, y desde el año 1977 no se enturbia el vino de la Feria de Sevilla, y se hacen algunas referencias al antiguo régimen y a la necesidad de añadir una «s» para convertir «garantía de calidad» en «garantías de calidad» — la impresión que le da a uno es que, efectivamente, quedan algunos rescoldos del antiguo régimen, donde la única pluralidad admisible era la gramatical.

En definitiva, señorías, aquí se ha hablado del celo, del excesivo celo; efectivamente, se acerca la primavera que la sangre altera, y por celos, indudablemente, Otelo mató a Desdémona, pero, también en este caso, por el celo de las 4.000 famosas enmiendas, no se dejó ver el bosque de las 15, 12 ó 13 ideas que SS. SS. en el fondo saben que son las que tendríamos que estar aquí debatiendo.

Muchas gracias, señor Presidente, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cueto por tiempo de once minutos.

El señor CUETO SESMERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, señor Ministro, hace algunos días un querido amigo y prestigioso catedrático vallisoletano me solicitaba la posibilidad de asistir a una sesión del Senado. Y nunca mejor que el día de ayer, en el que este amigo vallisoletano estuvo prácticamente toda la jornada con nosotros. En el momento de cenar, le pedí una valoración de lo que había visto y que me lo resumiera en pocas palabras, y le bastó una para calificarlo...

El señor PRESIDENTE: Ruego a S. S. que se ciña a la cuestión, porque son muchas enmiendas.

El señor CUETO SESMERO: Precisamente me voy a ceñir, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por lo que he visto y oído, el señor catedrático ya figurará en el «Diario de Sesiones».

El señor CUETO SESMERO: Y hablaba de «quisquillosas quisicosas del Senado». Quizá en otra oportunidad tenga ocasión de decirles la valoración que de este hecho hizo.

Paso, por tanto, a defender mis enmiendas. La primera, formulada al artículo 10, párrafo 2, propone que donde se dice: «se entiende por titular de un centro docente», se diga: «El titular de un centro docente es». (*Risas.*) Definir, queridos Senadores, es fijar con brevedad, claridad, exactitud y precisión la naturaleza de una cosa o la significación de una palabra, y nuestro querido señor Ministro, que goza de mi admiración en las largas jornadas que está viviendo con nosotros, puede dar fe de esta verdad que estoy señalando. Porque ayer ha tenido que recurrir no a una coma ni a una palabra, sino a prestar un énfasis especial, en un «ya», para decir realmente lo que había pretendido expresar en sus manifestaciones en una emisora de radio; evidentemente, a mí me ha producido honda satisfacción, porque su presencia en el Senado significa que tiene en alta consideración a esta Cámara...

El señor PRESIDENTE: Señor Cueto, no vuelva al pasado; siga en el presente y defienda sus enmiendas. No estamos aquí discutiendo las palabras del señor Ministro.

El señor CUETO SESMERO: Estoy intentando defender mis enmiendas, diciendo la importancia que tiene una sola palabra o una coma, que es lo que aquí en muchos momentos ha provocado la risa del auditorio. Estoy, por tanto, en ese detalle y rogaría que se me escuchase. (*Risas.*)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!

El señor CUETO SESMERO: Decía que el señor Ministro goza de toda mi simpatía desde el momento que ha desmentido, con su presencia permanente aquí, lo que significa el Senado. No para unas personas del Grupo Popular, sino para todo el pueblo español, causó escándalo el pensar que se pasaba por alto esta Alta Cámara. Por tanto, debería insistir en esa línea y hacer un desmentido en el que ese «ya» lo apostillara bien la Prensa para hacer saber que él nunca quiso pasarse por alto al Senado.

No podemos, pues, generalizar con la expresión «se entiende». ¿Quién entiende? Habremos de indicar lo que es, es decir: «El titular de un centro es». (*Risas.*) La precisión propuesta, queridos Senadores, creo que es totalmente razonable y razonada.

La enmienda 42 es al artículo 11. Se refiere a una clasificación del centro, teniendo en cuenta la naturaleza de las enseñanzas que se imparten. La expresión «en función de» es una expresión casi exclusivamente matemática, como sabe muy bien mi querido amigo y Senador, señor Nalda, paisano de Valladolid (*Risas.*); expresión

matemática que implica una dependencia de la variable. Naturalmente que existe una relación entre las enseñanzas que se imparten y la denominación de los centros. Esas diferentes enseñanzas son las que motivan la clasificación de los centros. Por ello, proponemos la expresión «según las enseñanzas que se imparten». La consideramos más correcta.

La enmienda número 2.414 corresponde al artículo 12. Este artículo se refiere a los centros españoles en el extranjero. Es claro que las particularidades del medio en que han de desenvolverse serán las que determinarán su estructura. El medio no exige; el medio tiene unas particularidades, en virtud de las cuales ha de hacerse la programación de la estructura y el régimen del centro. Es por ello, queridos amigos, Senadores, excelentísimos Senadores, por lo que presento la enmienda, con la redacción, a fin de acomodarse a las particularidades del medio.

La enmienda 750 corresponde al artículo 13. Este artículo se refiere a la denominación específica de los centros. Indica la no permisibilidad de utilizar identificaciones distintas de las que se han utilizado en la inscripción registral. Se dice a tal efecto: «identificaciones diferentes a las que figuren»; la inscripción registral es un hecho pasivo; es la consecuencia de que, en su día, se efectuó una inscripción. Por ello aparece en el registro aquella inscripción. Considero, por tanto, más correcta la modificación que propongo.

La enmienda 292, al artículo 18.1, se refiere a los centros públicos. Los centros públicos son creados para desempeñar unas funciones. En el desempeño de estas funciones desarrollan sus actividades. El fin. El fin es, pues, el desempeño de sus funciones, el desarrollo de las actividades. La expresión es un tanto elocuente. Es el medio de desempeñar las funciones. Es más amplio el concepto que ampara el desempeño de sus funciones que el que define las actividades conducentes a ello. La norma, la guía, es decir, los principios constitucionales, limitarán no solamente las actividades, sino los fines para los cuales se desarrollan éstas. De ahí la presente enmienda, que formulo, en el sentido de indicar «en el desempeño de sus funciones estarán sujetos».

La enmienda 2.301 es al artículo 20.2. Se refiere este apartado 2, como saben SS. SS., al seguir estas enmiendas detalladamente, a la admisión de alumnos y a los criterios de prioridad para el caso de la no existencia de puestos escolares suficientes. Ya el párrafo primero de este artículo se refiere ciertamente a puestos escolares. Sin embargo, al redactar el párrafo 2.º del mismo artículo se dice «plazas suficientes». Entendemos que en todo el articulado, pero más aún dentro del propio artículo, debe existir una uniformidad en la designación de sus conceptos, máxime cuando con ello no se aclara, sino todo lo contrario, la idea primitiva.

Formulo, por ello, la enmienda consistente en indicar «cuando no haya puestos escolares suficientes», es decir, con idéntica expresión a la dada en el primer párrafo del primer artículo.

La enmienda 2.546, al artículo 22.2, se refiere a la defi-

nición del carácter de los centros y a la autorización para ello. Expresa un respeto de los centros a lo dispuesto en el apartado anterior. Respetar una cosa no es estar de acuerdo con ella. En este mismo hemiciclo estamos viendo y viviendo en algunas ocasiones respeto mutuo, sin que nos ajustemos a aquello que respetamos. No sólo se ha de respetar lo dispuesto, sino que hay que sujetarse a ello. Entiendo que la redacción propuesta es más completa y concreta más.

Enmienda 75, al artículo 23. Se refiere este artículo a los requisitos mínimos para la apertura y funcionamiento de los centros docentes privados. Ya el artículo 14 ha establecido estos requisitos. Entonces, lo que procederá será regular ya esos requisitos mínimos. Hablar de nuevo de establecimiento es incidir en lo ya definido en el artículo 14. La expresión que propongo está de acuerdo con este criterio y evitaría la duplicidad de la expresión «establecer», que, de otra forma, se contemplará en los artículos 14 y 23.

La enmienda 1.965 es al artículo 24.2. Entendemos que en este apartado se ha cometido una omisión. En efecto, el propio artículo, en el apartado 1, tiene una redacción correcta al indicar «enseñanzas de los niveles»; sin embargo, el apartado 2 se separa ya de esta redacción al indicar «los centros de niveles». Los centros no tienen nivel, lo tienen las enseñanzas de esos centros. Por ello, formulamos la enmienda con la redacción, que entiendo correcta, «los centros de enseñanza de niveles».

Enmienda 1.833, al artículo 25. Entiendo que la selección del profesorado a que se refiere este artículo exige una condición previa...

El señor PRESIDENTE: Tiempo, señor Cueto.

El señor CUETO SESMERO: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: De nada.
¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Cholbi por tiempo de dieciocho minutos.

El señor CHOLBI DIEGO: Señor Presidente, señorías, sin más preámbulo, y siguiendo las instrucciones dadas esta mañana por la Presidencia, paso a defender mis enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cholbi.

El señor CHOLBI DIEGO: Enmienda número 544, al artículo 20.2. Este apartado dice que la admisión de los alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes, se regirá por criterios prioritarios, y entre ellos la situación socioeconómica de la familia. Mi enmienda consiste en sustituir «situación socioeconómica de la familia» por «libre elección de la familia». Voy a tratar de razonar esta enmienda.

La Constitución, señorías, no hace ni establece diferencias económicas de ningún tipo, simplemente consta el

derecho a una educación gratuita. El artículo 14 de la Constitución dice que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Partiendo, señorías, de la libertad de elección, vemos que es un error el planteamiento, porque con ello se está obligando a los padres a que lleven a sus hijos a centros que nada tengan que ver con su proyecto educativo, en consonancia con la opción que prefieren, que eligen o desean para sus hijos.

La Constitución prohíbe hacer discriminaciones por condición o circunstancia personal o social. La Constitución no hace ni establece diferencias económicas; simplemente consta en la Constitución el derecho a una educación gratuita para todos. Yo quisiera hacer una reflexión, y es la siguiente. Si un ciudadano para que tenga una carta de naturaleza como tal ciudadano lo que tiene que hacer, entre otras cosas fundamentales, es pagar sus impuestos; si el dinero de esos impuestos sirve para que después el Gobierno lo emplee en cuestiones que considere preferentes o prioritarias, como pueden ser obras públicas, carreteras o construcción de nuevos centros educativos, o el mantenimiento, reforma o mejora de los mismos, lógico es que ese ciudadano, si cumple con la obligación de pagar sus impuestos, tenga también el derecho a poder elegir el colegio, ya que ha contribuido a financiarlo, porque para eso ha pagado unos impuestos.

He ahí que no pueda existir no solamente por lo que determina la Constitución, sino por estos razonamientos, ninguna discriminación de ningún tipo a la hora de que una persona pueda seleccionar el centro educativo que quiera conforme a sus preferencias, a sus modelos educativos o a su orientación para sus hijos o pupilos.

En cuanto a la enmienda 2.617, se refiere a una cuestión que ha surgido en más de una ocasión, para la que ha habido ya distintas formas de enfoque. Se refiere a que los titulares que opten por definir el carácter propio de los centros someterán dicha definición o autorización reglada. La modificación que yo presento, al igual que han hecho algunos de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, es suprimir el carácter y en su lugar decir el ideario propio.

Me explicaré. El término ideario propio, su concepto y su constitucionalidad ya han sido admitidos por el Tribunal Constitucional. El artículo 27.6 de la Constitución reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Pues bien, señorías, esta libertad reconocida a las personas físicas y jurídicas ha de entenderse como libertad para establecer y al mismo tiempo dirigir instituciones de enseñanza. Simplemente vale el recordar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966. Ahora bien, el derecho a dirigir un centro docente no es ni más ni menos que el derecho a establecer y mantener la identidad del proyecto educativo que constituye la razón de ser objetiva de ese centro.

En la definición de este proyecto, lo que se conoce con

el nombre de ideario, se encuentra la primera justificación del interés que presenta de que la sociedad pueda disponer de distintos centros, sean éstos católicos, mahometanos, budistas o ateos que permitan, y nos deben permitir de una manera real, clara y precisa, que los padres o los tutores puedan elegir libremente, y que al mismo tiempo acepten y después colaboren con aquel centro educativo que esté más próximo o que guarde consonancia con su forma de pensar, con sus principios, con sus creencias o con sus escalas de valores.

Nos sorprende que en esta Ley no exista un solo artículo que asegure el respeto al ideario; más bien al contrario, dice que los profesores tienen garantizada la libertad de cátedra, sin incluir en el texto, aunque nosotros sí lo pedimos, el reconocimiento de la libertad de cátedra dentro del respeto del ideario.

El que les habla entiende que ése es un hecho de enorme gravedad, porque con ello se está eludiendo la doctrina del Tribunal Constitucional que, en su sentencia de 13 de febrero de 1981, reconocía el derecho de los centros privados para establecer su ideario y la obligación de los profesores de los centros a respetarlo.

Señorías, yo entiendo que el ideario viene a ser como un punto de encuentro o de unión en el que convergen dos cuestiones fundamentales y trascendentales, que serían el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que prefieran y también el derecho de creación de centros docentes. Como derivación de la libertad de la creación de centros docentes, el derecho de los titulares de éstos a establecer en consecuencia su ideario o un ideario educativo. Ahora bien, sabemos que es un derecho autónomo el establecer un ideario. Por tanto, no pueden quedar encorsetados o encasillados aspectos religiosos o morales, en cuanto se refieren a actividades de tipo educativo.

El ideario propio de cada centro puede y debe extenderse a los distintos aspectos de las actividades docentes. En los centros privados la dirección del centro docente nos viene dada por varias características, además de por el nivel educativo y, en cuanto aquí interesa, por el ideario, en uso, por descontado, de la libertad de enseñanza y dentro de los límites establecidos y señalados que haya dado aquél a su titular.

Entendemos también que cualquier intromisión de Poderes públicos sería así como una especie de violación de la libertad que tiene que tener esta enseñanza pública.

La existencia de un ideario —la cual está en la sentencia del Tribunal Constitucional—, conocida por el profesor al incorporarse libremente al centro donde va a prestar sus servicios, o libremente aceptada cuando el centro se dota de tal ideario después de su incorporación, queda claro que no le obliga al educador a transformar su enseñanza en una propaganda o en un adoctrinamiento, ni mucho menos. El profesor tiene que mantener su libertad, pero, al mismo tiempo, esa libertad no puede ir tampoco, en ningún momento, contra el ideario que tenga el centro.

Yo, señorías, he sido instruido y educado en un colegio público y mis hijos también van a ellos. Todas cuantas

palabras pueda decir en defensa de la libertad de enseñanza pública serían escasas. Mi admiración y mi respeto es total y absoluta a ese sistema de enseñanza; pero, de la misma forma que lo valoro así con objetividad, tengo que decir y subrayar que no existe incompatibilidad de ningún tipo entre el fortalecimiento de la enseñanza pública y, a su vez, de la privada. Entiendo que las dos son compatibles y las dos pueden darnos una mejor calidad en la educación; pueden cubrir el mapa nacional con la garantía de que nos llegue a todos los españoles lo que, a lo mejor, en otras épocas, hemos tenido escaso o insuficiente, debido a la falta de medios económicos, de instalaciones adecuadas y a la falta cuantitativa, no cualitativa, de profesores. Y lo dice un Senador que ha sido, con mucho orgullo, educado en la enseñanza oficial y que también ha desplegado profesionalmente actividades en la enseñanza oficial.

Y paso a otra enmienda, la 545, que trata de sustituir la palabra «Gobierno» por «Comunidades Autónomas».

Este Senador es representante de una Comunidad Autónoma, la valenciana, de la cual siento honrosa satisfacción. Trae a esta Cámara, con gran alegría, la posibilidad que le presenta la LODE de que se dé respuesta a algo tan fundamental como es dar contenido a las autonomías y al proceso autonómico.

Tengo que decirlo así, señorías, porque la Constitución nos está dibujando un sistema educativo que se separa radicalmente de un modelo centralista; adapta el sistema a las competencias de las Comunidades Autónomas y, en lo que se refiere a la educación no universitaria, a un modelo de descentralización en favor de entes territoriales de carácter regional.

Esta descentralización, por descontado, no se lleva a cabo, como es lógico, directamente en el texto constitucional, sino mediante una remisión a diferentes fuentes, aparte, claro está, de los otros preceptos constitucionales, tales como los Estatutos de Autonomía. Pues bien, entiendo que la LODE no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas derivadas de la Constitución y de algunos Estatutos de Autonomía.

El citado proyecto de Ley, al que nos estamos refiriendo, parece como si hubiese olvidado el apartado 30 del artículo 149.1 de la Constitución, que establece cuáles son las competencias exclusivas del Estado en materia de enseñanza y que supone, al contrario y en relación con lo dispuesto en los artículos 149.3 y 148.2, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas asuman competencias en todo lo demás y, consecuentemente, de ello se desprende una concurrencia legislativa en materia educativa.

La distribución de competencias en este tema no supone, como parece desprenderse de la LODE, reducir las competencias normativas de las Comunidades Autónomas o al menos desarrollos reglamentarios en materia de menor rango o de menor interés. Entiendo que es al contrario. Es un deslinde de la acción legislativa o reglamentaria, según los casos, que se da. Por tanto, sentada la potestad legislativa y ejecutiva de las Comunidades

Autónomas, en modo alguno limita las potestades reglamentarias que el Gobierno no quiera delegar.

El tema de la enseñanza aparece regulado en los Estatutos de Autonomía de varias Comunidades. En ellos se establece que es de la competencia de las Comunidades Autónomas, en toda su extensión, nivel y grado, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que la desarrollan, las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la alta inspección.

En fin, entendemos que esta Ley viola competencias de las Comunidades Autónomas porque, además, no prevé la intervención efectiva de las Comunidades Autónomas en una materia de tanta importancia como es la relativa a la ordenación y celebración de conciertos con los centros privados.

La LODE vulnera, por tanto, los Estatutos de Autonomía y los artículos 148 y 151 al excluir a las Comunidades Autónomas de participar, de manera efectiva, en la programación de la enseñanza.

La LODE, señorías, quiere reducir las Administraciones educativas de las Autonomías, con competencia plena en la materia, a un simple entregar los fondos necesarios para que los centros puedan funcionar, pero sin ejercer las funciones ejecutivas que son de su competencia, olvidando que, para el supuesto que se contempla, es el Estado el que no tiene funciones gestoras.

De todo esto se deduce el carácter antiautonómico que tiene la LODE en materia educativa.

Yo lamento profunda y sinceramente que la LODE no venga a reforzar a las Comunidades Autónomas; no venga a reforzar las autonomías, porque entiendo y comprendo que fortaleciendo a las Comunidades Autónomas en materia de enseñanza estaríamos, dentro de la diversidad, fortaleciendo, por descontado, a España y a su libertad.

El señor PRESIDENTE: Se ha terminado su tiempo hace unos minutos, señor Cholbi.

El señor CHOLBI DIEGO: Muy amable, simplemente esperaba su observación, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Turno en contra? (Pausa.)

Para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Díaz Berbel, por tiempo de veintidós minutos.

El señor DIAZ BERBEL: Señor Presidente, señorías, a lo largo —yo diría a lo corto— de estos veintidós minutos voy a tratar de defender las enmiendas que he presentado al Título I.

Vaya por delante, señor Presidente, que aquellas enmiendas que no me dé tiempo a defender, las doy por defendidas, con excepción de la número 2.534, que la retiro en este momento.

Se ha repetido varias veces que muchas enmiendas sólo se refieren a pequeños matices gramaticales, que a la hora de replicar son graves incoherencias de nuestro

Grupo. Pues bien, señorías, no son despreciables esos matices gramaticales, porque ¿qué sería —y voy a poner un ejemplo muy claro— del prestigio de nuestra Cámara, si al término de este debate —que Dios quiera que no sea el que nosotros estamos dispuestos a afrontar, sino que termine con anterioridad— la opinión pública dijera que hemos aprobado, en vez de una Ley para menores de edad, una Ley de menores de edad? Fíjense, una preposición distinta delante del mismo término que le acompaña, la diferencia de matiz que supone. Yo espero que no.

Respecto a lo segundo (y lamento que no esté aquí mi gran amigo al compañero Senador Moreno), si hay diferencia de matices entre las enmiendas del Grupo Popular, puedo asegurarles que se debe a la pluralidad de los componentes de la Coalición Popular, porque son enmiendas de cada uno de nosotros, de cada uno de los Senadores, no son enmiendas del Grupo, y con eso quedan aclarados los dos conceptos.

Acto seguido voy a empezar por la enmienda 1.929 al artículo 14, apartado 2, del proyecto. Es una enmienda de modificación y dice —no voy a leer el párrafo entero—: «... y número de puestos escolares», y a continuación este Senador dice: «Los Poderes públicos, cuando varíen los requisitos mínimos, garantizarán la ayuda económica necesaria para la necesaria transformación.»

Esto es muy claro, si no, aquí en este artículo y en este párrafo hay la posibilidad, siendo algo muy mal pensado, de poder cerrar de un plumazo (eso no será así, porque no habría plazas públicas suficientes en el país) todos, absolutamente todos los colegios privados, o en su mayoría los colegios privados, sobre todo los que estén en zonas más difíciles o zonas más deprimidas.

No creo que sea una barbaridad lo que estoy diciendo, porque voy a poner un ejemplo práctico también. Quizá yo, como no tengo esa dialéctica que alguno de nuestros compañeros tienen, recurro a los ejemplos para expresarme mejor y que me puedan entender.

Mis hijos van a un colegio privado subvencionado y que está debajo del Sacromonte, a donde acude gente de todo aquel sector del Albaicín granadino, etcétera, a las Escuelas del Ave María —me está mirando nuestro compañero Juan Cuenca y se lo aclaro—. Pues bien, ¿ustedes se imaginan que dentro de las normas que garanticen la subvención del colegio al que me estoy refiriendo, por poner ese ejemplo, se diga que necesitan un campo de fútbol reglamentario? ¿Ustedes me pueden decir si dentro de esas normas, si este colegio no lo puede hacer, porque eso supone unos muros de contención costosísimas, ¿qué ocurre? Hay que cerrar ese colegio, porque pierde esas especificaciones que se exigen en este apartado.

Puede ocurrir que se le exija a un colegio modesto, como pueda ser el que regentan unas monjas en Ugijar, que tengan una piscina climatizada. Es un requisito porque habla de requisitos de instalaciones, inclusive deportivas o culturales, etcétera. El no incluir esa necesidad de que el Estado garantice la ayuda económica para que puedan llevarse a cabo las transformaciones que se exigen, es una espoleta retardada. Espero de SS. SS. que

consideren esta enmienda porque ya no se trata aquí de un matiz gramatical, sino de algo más serio.

La enmienda número 1.931, al artículo 20, apartado 2, es de supresión. Propongo suprimir «proximidad de domicilio». Y es que el texto se contradice, curiosamente, nada más y nada menos que con el artículo 1.º de esta propia Ley, que en su apartado 2 dice, y voy a pedir permiso al señor Presidente para poder leer este párrafo...

El señor PRESIDENTE: Permiso concedido.

El señor DIAZ BERBEL: Muchas gracias, señor Presidente. No esperaba menos.

«... esté sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel social o lugar de residencia del alumno.» En este artículo, que es el 20.2, se dice que «la admisión de los alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes, se regirá por los siguientes criterios prioritarios: situación socioeconómica de la familia, proximidad del domicilio...», y luego vemos, con sorpresa, cómo un artículo, que ya hemos aprobado esta mañana por el sistema de la mayoría abrumadora, dice todo lo contrario.

Yo pediría que, por lo menos dentro de esta Ley, ya que ustedes dicen que existen diferencias entre nuestras enmiendas, no hay a diferencias. Yo llamaría a esta enmienda, más que de retórica o de tipo gramatical —y permítanme la expresión de tipo popular—, enmienda de cajón; yo creo que ésta es así.

Con referencia a esta enmienda, voy a poner un ejemplo fácil de Madrid. El Instituto Ramiro de Maeztu está en la zona de «El Viso», como saben SS. SS. ¿Por qué a este Instituto no puede ir un chico de Moratalaz o de cualquier otro barrio que no tenga los niveles de renta que tiene éste y, sin embargo, esté exclusivamente dedicado, por proximidad de domicilio, a las rentas más altas? Esta es una razón quizá secundaria, porque para mí la principal era la que he expuesto antes.

La enmienda número 1.930, de modificación del artículo 18.1 del proyecto, trata de añadir, al final del párrafo del artículo 27.3 de la Constitución, los derechos de los padres, que están, a su vez, recogidos en el artículo 4.º de la Ley que estamos debatiendo. Queda más completa esa redacción si nos remitimos a este artículo, que yo quiero recordar en este momento, ya que, parece ser que a lo largo de estos debates —y eso lo veremos a la hora de la votación—, se olvida lo que ya se ha aprobado y, por lo visto, vamos a aprobar algo distinto a lo que ya hemos aprobado anteriormente. Dice el artículo 4.º: «A que sus hijos o pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y en la presente Ley. A escoger centro docente distinto de los creados por los Poderes públicos. A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Se refiere a los derechos que tienen los padres en los términos que las disposiciones legales establezcan. Con esto creo que está bastante explicada esta enmienda 1.930, al artículo 18, número 1.

La enmienda número 1.932 es de supresión del párrafo segundo del artículo 22.2. La Ley dice: «Los titulares que opten por definir el carácter propio de los centros someterán dicha definición a autorización reglada, que se concederá siempre que aquél respete lo dispuesto en el apartado anterior». La justificación de mi enmienda es que no puede someterse al criterio, quizá subjetivo, de un funcionario del Ministerio. Entiendo que es una cláusula totalmente inquisitorial y, si los tiempos de la Inquisición ya pasaron, por qué va a responder al criterio personal de un funcionario en ese momento.

La enmienda 1.928, al artículo 11 del proyecto, es de adición y digo en mi justificación que serían los que al menos tuviesen dos de los apartados anteriores. Se hace una enumeración de la educación Preescolar, de EGB, de Bachillerato, de Formación Profesional. Yo pido añadir una más, la de los centros integrados. Un centro integrado sería uno que tuviese cualquiera de los dos apartados anteriores. Ya se dice en ese apartado, pero falta decirlo en el apartado 1, porque de esa forma la clasificación queda más clara.

El artículo 15 del proyecto dice: «los centros tendrán autonomía para». Entiendo que estamos hablando de libertad de enseñanza y que la problemática de esta Ley está centrada en la libertad de enseñanza. La enmienda 1.491 propone decir: «los centros serán libres para», porque no se habla para nada en esta Ley de autonomía en estos aspectos. De autonomía hemos estado hablando en otras Leyes de tipo autonómico, valga la redundancia, y no creo que sean los términos que se utilizan los apropiados para ésta que estamos debatiendo.

La enmienda 2.410, al artículo 12, número 1, coincide con alguna otra expuesta a lo largo del debate. El artículo dice: «en el extranjero». Quizá parezca que tiene poca importancia lo que voy a afirmar, pero debe decir: «domiciliados en el extranjero». En el extranjero puedo estar circunstancialmente mañana, pero domiciliado en el extranjero quiere decir —y lo saben muchos de nuestros emigrantes— que este español tiene una serie de requisitos y obligaciones, como el pago de impuestos, donde entran en juego convenios fiscales que España tenga con otros países, y todo lo demás. Por tanto, no es lo mismo estar en el extranjero que estar domiciliado en el extranjero. A lo largo del debate hemos tratado este problema, pero referido al domicilio en España.

El artículo 18, número 1, dice: «desarrollarán sus actividades». La enmienda 2.681 propone decir: «Desempeñarán sus funciones». En esta Ley estamos hablando continuamente de la función de educar. Estas expresiones gramaticales que queremos enmendar tienen diferencias que a veces parecen de matiz, pero tienen su fundamento. Creo que la expresión «desempeñarán sus funciones» es más adecuada que «desarrollarán sus actividades».

La enmienda número 800, al artículo 19, donde dice «establecidos», debe decir «propuestos», porque más que establecer un fin hay que proponerse llegar a conseguir ese fin. El fin es algo futurible, y no está establecido en el

momento, y, sin embargo, al estar establecido indica que ya se ha llegado, que se está en ese momento.

La enmienda número 2.297, al artículo 20, apartado 1 del proyecto, donde dice «del derecho a la educación», debe decir «del derecho a la educación, según dispone el artículo 27.1 de la Constitución». Y la indicación de mejor redacción y precisión conceptual, que quizás algunas veces aquí ha causado hilaridad, está más que justificada, puesto que esta expresión que se propone es más completa y más ajustada al término constitucional, y, por tanto, la redacción queda bastante mejor, añadiéndole esta coletilla de «el artículo 27.1 de la Constitución».

La enmienda número 1.445, al artículo 21, apartado 2, letra b), de «quienes tengan», y se propone «las personas que tengan», porque ya sabemos la importancia que ha tenido el que, como en aquella Ley de despenalización del aborto, se hable de la persona o no se hable de la persona. Por eso aquí es importante que se fije que estamos hablando de personas. Creo que es bastante claro, es una Ley para las personas, y hay que especificar ese detalle.

La enmienda número 71, al artículo 23, habla de «los centros privados se someterán al», y debe decir «los centros privados se sujetarán al», porque el término «someter» no es el adecuado en este caso, cuando se está hablando de libertades y, por tanto, es más acertado «sujetar». Yo creo que lo de «someter» no sólo indica «fijar», sino que dentro de esta expresión hay intrínsecamente un sentido de humillación de sometimiento.

La enmienda número 2.756, donde dice «la titulación exigida por la...», etcétera —por no hacerlo tan largo—, en opinión de este Senador debe decir «la titulación que establezca la...», etcétera. Porque primero que exigir hay que establecer, y, por tanto, es más adecuado el texto que se propone que el que contiene el proyecto.

La enmienda 1.691, al artículo 24, apartado 2, donde se habla de los centros homologados, donde dice «homologados gozarán de», debe decir «centros homologados tendrán plenas», etcétera. Porque no se trata de una prebenda o un regalo para un disfrute, sino que como tienen derecho a ello, es más adecuado «tener» plenas facultades académicas, que no «gozar» de una serie de facultades.

La enmienda número 1.237, al artículo 10, apartado 2, dice «centros privados», y hay que matizar que no se trata de ningún otro tipo de centros, pues podría tratarse de otras facetas de la actividad humana; pero yo creo que si estamos en una Ley de educación, no cuesta ningún trabajo ni va a cambiar el sentido, sea socialista o conservador, de cómo salga al final esta Ley, añadirle «centros de educación privados». Estamos hablando de la Ley de educación y creo que queda bastante mejor la redacción de esta forma.

La enmienda 746...

Siento ser andaluz porque es al artículo 13, pero, en fin, no me importa y precisamente, además veo que se me está encendiendo la luz, señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Hoy es lunes, señor Díaz; no es martes. *(Risas.)*

El señor DIAZ BERBEL: Menos mal, porque si no...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su interesante de sertación. *(Risas.)*

El señor DIAZ BERBEL: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: El señor Díaz Mantis tiene la palabra.

El señor DIAZ MANTIS: Señor Presidente, señorías, en Capítulo primero, Título I, que trata de disposiciones generales, quería hacer también alguna consideración general respecto a este Título y con algo que se está diciendo aquí continuamente sobre el tipo y la calidad de las enmiendas que presentamos. Hasta se ha dicho que lo único que nos quedaba era el pluralismo gramatical del franquismo, dicho por el señor Moreno. Esto, quizá, le otorga el «pedigree» democrático al Senador Moreno, pero no creo que eso sea así, porque sabe muy bien el señor Moreno que en estos bancos nos sentamos muchas personas que estuvimos también en esos menesteres, lo mismo que estuvieron muchos Ministros, socialistas hoy, colaborando con la Administración franquista y lo mismo que los hay en nuestros bancos. Por tanto, nadie tiene «pedigree» de demócrata. La democracia hay que demostrarla con la consideración...

El señor PRESIDENTE: ¿A qué enmienda se refiere lo que está diciendo, señor Díaz Mantis? *(Risas.)*

El señor DIAZ MANTIS: A las disposiciones generales, Capítulo I, señor Presidente. Quería terminar diciendo —es una breve referencia, señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Señor Senador, es que después se acaba el tiempo y yo, como quiero que SS. SS. tengan tiempo cumplido, les recuerdo lo de las enmiendas; no por otra cosa.

El señor DIAZ MANTIS: Termino, señor Presidente.

Me voy a centrar en las enmiendas. La primera enmienda, la 1.246, es al artículo 10, Capítulo I, Título primero, y se refiere a que los centros docentes serán públicos y privados. Y habla en su párrafo segundo: «Se entiende por titular de un centro docente...». La enmienda trata de que no se entienda nada. *(Risas.)* Debe decir «Será titular de un centro...». ¿Quién tiene que entender quién es el titular del centro? Será titular de un centro aquel que cumpla los requisitos que la Ley exija. «Será», no «Se entiende». ¿Quién tendrá que entender, el Ministerio de Educación? ¿Quién tendrá que entender? Porque este Senador no lo entiende. *(Risas.)* Porque, entendiéndolo, se pueden hacer varias interpretaciones, según la persona que lo entienda. *(Risas.)* Por tanto, creo que queda-

ría mejor, y deben reconocerlo así SS. SS., que el «será» define mucho mejor al titular del centro, que el «se entiende» (*Risas.*), por mucho que ustedes quieran decir que la enmienda no es buena. Yo creo, la verdad, que es buenisima. (*Risas.*)

El artículo 11, en su número 2 (Capítulo I), porque el número 1 se refiere a cómo serán los centros docentes, según la educación que se imparta, debería decir que la adaptación de los preceptos de esta Ley a los centros que impartan enseñanzas no comprendidas en el apartado anterior, así como los centros integrados que abarquen dos o más de las enseñanzas a que se refiere este artículo se efectúan reglamentariamente. Creemos que queda mejor el artículo y bastante más claro.

La enmienda número 2.419, al artículo 12.1 que dice: «Los centros docentes españoles y extranjeros tendrán una estructura y un régimen singularizado a fin de acomodarlos a las exigencias del medio...», etcétera, pretendemos incluir, aunque sin esperanza, que se cambie la expresión «a fin de» por «con objeto de» acomodarlos a las exigencias del medio. Porque la Ley dice «tendrán una estructura y un régimen singularizado» —dice el texto tal como está configurado— «a fin de acomodarlos a las exigencias del medio...», etcétera, y nosotros creemos que queda mejor precisado, seguro, ya que «con objeto de» significa finalidad, intención, mira, objetivo, y se entendería mejor, ya que «a fin» significa límite, temperamentos afines, gustos afines, con lo cual yo entiendo que no queda bien redactado tal como está, y nosotros como nos gusta la gramática, según estamos demostrando, queremos cambiar este texto.

Con la enmienda 2.339, al artículo 13 pretendemos corregir un error que yo calculo que no habrán visto los Senadores del Grupo Socialista y que se refiere a que se habla de asientos registrales del Ministerio de Educación y Ciencia, y después se habla de la correspondiente inscripción registral. Es decir, en la primera parte del párrafo habla en plural, y en la última en singular, refiriéndose a los mismos registros. Por tanto, si existe un registro será singular, pero como son varios será plural, pero plural en los dos casos. Creo que tampoco entienden esta enmienda, SS. SS., pero yo trato de hacérsela comprender.

Enmienda al artículo 14; enmienda número 1.773 que se refiere a los requisitos mínimos para impartir la enseñanza con garantías de calidad, y aquí se pone una vez más, y yo creo que es un error gramatical importante, en la Ley, que «todos los centros docentes deberán reunir». Y yo digo que no puede ser un docente un bien inmueble. Docentes son las personas que imparten la educación. Entonces debería ponerse «por los centros educativos» que son las personas que en ese centro imparten la educación. Dar la calificación de docente a un bien inmueble entiendo que está mal dicho.

El artículo 15 se refiere a la autonomía de los centros para establecer materias optativas y entendemos que quedaría mejor diciendo: «Los centros tendrán autonomía para establecer materias optativas, adaptar los programas a las características de la realidad circundante,

adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades culturales y extraescolares.

Al Capítulo II del mismo Título I, y que se refiere a los centros públicos, tengo un mayor número de enmiendas, porque creo que los centros públicos merecen una gran atención, y por el Grupo Popular así ha sido por el número de enmiendas presentadas, y muy particularmente por este Senador.

El artículo 17 habla de la creación y supresión de centros públicos que se efectuará por el Gobierno o por los Gobiernos, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, y entendemos que la expresión «por el Gobierno» no queda perfectamente definida y se debe decir «por el Gobierno de la nación». Hoy existen Gobiernos municipales, Gobiernos provinciales, Consejos de Gobierno provinciales, Diputaciones, etcétera, y creemos que quedaría mucho más definido si se dice «Gobierno de la nación», no «Gobierno de Madrid», con permiso del señor Leguina, porque si decimos «Gobierno de Madrid» podemos tener una confrontación de Gobiernos. Por tanto, poniendo «Gobierno de la nación» creo que queda perfectamente definido el criterio de cómo se efectuará la creación y supresión de estos centros.

La enmienda número 78 al artículo 19 se refería a la participación en los centros públicos de los miembros de la comunidad escolar. Dice el texto que estos miembros se inspirarán en las actividades educativas. No sé; yo entiendo que el Grupo Socialista pensará que tienen la obligación los miembros de la comunidad escolar de ser iluminados por Dios, que es lo que significa «inspiración», tal vez que excite y mueva su voluntad, que es lo que dice el diccionario que significa esta palabra. Creo que es un gesto loable, porque la Conferencia Episcopal se lo agradecería al Grupo Socialista; pero, poniendo los pies en la tierra, si en vez de esa palabra divina y espiritual ponemos «servirá de directriz», los miembros del Consejo Escolar marcarán el conjunto de instrucciones y normas generales para la ejecución de algunas cosas, sin tener que acudir a esa inspiración divina; quedará mucho mejor, porque entiendo que difícilmente podrán estas personas hacer uso del Espíritu Santo.

Señor Presidente, tengo que decir que hay un error en el artículo 20.2, en el que en el informe de la Ponencia y la Comisión consta la enmienda 2.676, que es del señor Bautista de la Torre. La de este Senador era la 2.675, en Ponencia y en Comisión.

El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia tiene bien la enmienda 2.675 al artículo 20.

El señor DIAZ MANTIS: Es que en el informe de la Ponencia viene mal. Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador, por ilustrar a la Presidencia.

El señor DIAZ MANTIS: Se refiere a la forma de admisión de los alumnos en los centros públicos, y queremos suprimir una palabra, porque dice que tendrá los si-

guientes criterios prioritarios: situación socioeconómica, proximidad del domicilio, asistencia de hermanos matriculados en el centro, etcétera. Pretendemos suprimir la palabra «prioritarios», porque debe ser el Consejo escolar quien determine cuáles son esos criterios, porque si se confía en el Consejo escolar tantas veces mencionado creo que deberá ser él el que marque esos criterios, y además en la Ley tampoco se enumeran por orden preferencial, es decir, que en ningún momento se dice cuál es el primero, el segundo o el tercero de ellos preferente.

Por todo ello, y teniendo la realidad vivida en este curso pasado, en el que ya se ha aplicado la LODE tal como está hecha aquí, al no admitirse en mi localidad natal el que los alumnos pudieran ir al colegio que quisieran (y me gustaría que estuviera aquí el señor Ministro, pero creo que me oírán desde su despacho, porque el satélite que nos comunica creo que llevará hasta allí la onda) yo quería decir que este curso ya la LODE se ha aplicado mal en mi pueblo natal, porque yo digo que tengo ya cuatro hijos en escuela pública y ya ha ocurrido esto, lo cual se ha denunciado al propio Ministro, al Defensor del Pueblo, por algunos padres, a la Junta de Andalucía, etcétera.

Y es por una sencilla razón, porque el apartado 1 de este artículo habla de que una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos territoriales correspondientes garantizará (es muy importante la enmienda que ha presentado el partido socialista cambiándolo por «satisfará») tanto la posibilidad de escoger centro docente como la efectividad del derecho a la educación.

Yo les digo a ustedes que esto no se cumple y que no es cierto, porque ya este curso no se ha dado, y les voy a exponer a ustedes lo ocurrido porque creo que viene al hilo de la enmienda, señor Presidente.

En una localidad en la que existen tres centros públicos, uno de ellos funciona muy mal y dos funcionan bien o muy bien. Los padres quieren llevar a sus hijos a los centros que funcionan bien y muchos padres de ese primer centro sacaron a sus hijos para llevarlos a otro centro. Y ocurre que ahora, poniendo en vigor la LODE antes de que ésta se apruebe, han obligado a esos padres a llevar a esos hijos...

El señor PRESIDENTE: Tiempo, señor Díaz Mantis.

El señor DIAZ MANTIS: Gracias, señor Presidente. Doy por defendidas el resto de las enmiendas y siento que no se hayan enterado, SS. SS. de lo que pasó al final. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Escuin.

El señor ESCUIN MONFORT: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, sin pérdida de tiempo y dada ya la voz de iniciación, vamos a defender las diferentes enmiendas que tenemos presentadas al Título primero del proyecto de Ley que debatimos.

Nuestra enmienda 1.239 al artículo 10 del proyecto de Ley pretende que donde dice: «...centros privados...» se sustituya por: «...centros educativos de carácter privado...». La expresión «centros privados» es tan general y amplia que puede englobar a cualquiera de esta naturaleza, y aun cuando el apartado 1 del artículo concreto que son docentes, consideramos que sería conveniente, al menos, y tendría una mayor significación conceptual, detallar, como lo hacemos en nuestra enmienda, su carácter más importante, cual es el de ser necesariamente educativos.

La docencia es enseñar o instruir e indudablemente estos centros son docentes, pues en ellos los profesores enseñan e instruyen, pero nos olvidamos de los alumnos, de los niños y de la niñas, como muy bien decía una Senadora.

Nos preocupan las niñas y a mí concretamente más porque tengo tres —todos mis hijos son niñas—; claro que si que nos preocupan las niñas, señores del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Vicepresidente, Lizón Giner, ocupa la Presidencia.) Por ello pretendemos añadir a «los centros docentes» el vocablo «educación» porque, en definitiva, estos centros, que son necesariamente educativos, deben ser además de docentes, educativos, en los que se desarrollen y perfeccionen las facultades intelectuales de los niños y de las niñas y no donde los profesores se luzcan con una docencia más o menos brillante.

Unida esta docencia con el carácter educativo, con toda sinceridad creemos que mejorará el proyecto; de ahí que defendemos en el Pleno nuestra enmienda. Tengo que decir que en Comisión no pudimos exponer nuestros argumentos, aunque allí, no obstante, se nos contestó a algunas enmiendas, pero anteriormente en el Título preliminar este Senador se limitó, única y exclusivamente, a defender su enmienda sin obtener contestación, ya que el Senador de turno que nos tocó, que es un brillante poeta por sus ripios, se dedicó más a decir cosas que no eran de la enmienda, algunas de ellas muy acertadas por cierto, pero que no tenían nada que ver con la misma. Desgraciadamente creo que hoy también vamos a quedar sin contestación. Este Senador, desde un principio, ha estado jugando sin enemigo y lo lamento porque quizá en Comisión algunas de nuestras enmiendas hubieran podido ser retiradas o admitidas, ya que ése era el primer paso donde hubieran tenido que discutirse y no agotando a los señores Senadores en un Pleno que va a ser interminable.

Paso a la enmienda 736, al artículo 11, que aspira a que la frase «en función de las enseñanzas que se imparten» se sustituya —porque se considera más correctamente «en atención a las enseñanzas impartidas». Realmente se ha hablado ya aquí a lo largo del debate de este proyecto de Ley innumerables veces de la palabra «en función», y se la ha dado una valoración matemática. Yo voy a dar la definición del Diccionario de la Real Academia. El vocablo «función» se refiere al ejercicio de un órgano o aparato de los seres vivos, máquinas o instrumentos.

Es indudable que la enseñanza ni es un órgano —des-

de luego que no lo es—, ni es un ser vivo, ni ninguna máquina, ni tampoco un instrumento. De ahí que queramos sustituirlo por la expresión correcta que es «en atención». Este adverbio de modo, que significa «atendiendo» o «teniendo presente», es, a nuestro modesto juicio, el más apropiado para dar a entender lo que este artículo pretende. Los centros docentes, «atendiendo o teniendo en cuenta» o «en atención a las enseñanzas impartidas, podrán ser...», etcétera, como sigue el artículo.

Las enmiendas de carácter gramatical tienen un contenido importante. A nosotros nos ha asombrado mucho que un ilustre Senador —porque ilustre lo ha demostrado aquí— haya dicho que tiene horror a la gramática, algo así creo que dijo. Nosotros pensamos que un legislador tiene necesariamente que saber y conocer la gramática porque, si no, sería lo mismo que un músico que quiere interpretar una buena obra y no ha estudiado solfeo; eso será para uno que quiere oír música, pero para un músico y para un legislador consideramos que es importante y necesaria y debe dársele el valor que tiene. También otro ilustre Senador, el Presidente de la Comisión, ha hablado de ello. Dice que hay verbos que pueden modificar el sentido de las palabras, claro que los hay y, por tanto, si ello no es así, no vemos por qué razón nuestras enmiendas hechas con todo corazón y no para perder el tiempo, hechas con la intención de que sean atendidas y recogidas y mejoren el proyecto, merezcan muchas veces las risas y la desatención de los ilustres señores Senadores del Grupo Socialista. De todos modos, estoy agradecido a aquellos que prestan atención a estos argumentos dichos con la mayor sinceridad.

La siguiente enmienda es la 2.412, al artículo 2.º, 1, del proyecto. La palabra «singularizados», que queremos sustituir por «singularizar», tiene diferentes significados. «Singularizar» significa distinguir o particularizar una cosa de otra. Obviamente los centros docentes españoles en el extranjero deberán tener o tendrán una estructura, un régimen diferente a los ubicados en territorio español, pero en el proyecto de Ley no se utiliza la palabra «diferente», que es lo que quiere, sino que se emplea la palabra «singularizados», entendiéndose con ella que lo que pretende añadir es algo más que diferente, y realmente no se consigue con esta palabra.

Los centros docentes en el extranjero serán diferentes a los ubicados en territorio español, pero además los primeros, es decir, aquellos que están en el extranjero, serán diferentes entre sí, condicionados, entre otras circunstancias; por los Convenios internacionales, como muy bien se prevé en el proyecto de Ley. Pero si con la utilización de la palabra «singularizados» se pretende precisar esta doble diferenciación, en modo alguno se consigue, porque «singularizados» significa, como hemos dicho, únicamente diferentes de otros, pero no estos otros diferentes entre sí. En cambio, con la enmienda que proponemos, al determinar que estos centros tendrán una estructura y un régimen singular, no «singularizados», además de las diferencias que se consideran únicas y con ello permitir que estos centros además de diferentes tengan un régimen distinto entre ellos, se consigue lo que quiere

decir el texto del proyecto y no lo dice porque está, a nuestro modesto entender, mal redactado.

La enmienda 748, al artículo 13, consiste en sustituir en el proyecto de Ley que dice «identificaciones diferentes a las que figuren» la preposición «a» por la preposición «de». Es decir, de aceptarse nuestra enmienda el párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: «identificaciones diferentes de las que figuren». Modificamos la preposición «de» por la «a» porque gramaticalmente se utiliza aquella en los supuestos en que se quiere indicar origen, procedencia o punto de partida, como se trata en este caso.

El sustantivo «identificaciones» acompañado del adjetivo calificativo «diferentes» constituye, en este caso, el origen y el punto de partida para enlazar con las palabras «las que figuren» que es el término final. En cambio, la preposición «a» expresa fundamentalmente idea de movimiento material o relaciones locales y temporales, siendo, por consiguiente, incorrecta su utilización como se hace en el texto del proyecto.

La enmienda número 1.751, al artículo 14.2, pretende la modificación del texto, consistente en la sustitución de la frase: «relación numérica alumno-profesor» por la de «proporción entre profesores y alumnos». No consideramos apropiada la expresión «relación numérica» y la tratamos de enmendar por cuanto una relación numérica de profesores y alumnos (alumno-profesor, como dice el texto del proyecto) como enumeración de todas ellas no puede llevar a ninguna conclusión práctica, que es lo que en definitiva quiere el proyecto.

Tendremos una lista de profesores y de alumnos, pero a los fines de la Ley, y como requisito para impartir la enseñanza, esta relación de alumnos-profesores en modo alguno puede tenerse tal como se expresa en el proyecto de Ley; alumno-profesor es incorrecto. Tenemos en nuestra lengua la palabra exacta y precisa que sustituye a este signo, y esta palabra no es otra que la de «proporción», que, seguida de «profesores y alumnos», sin necesidad de poner ningún guión, da indudablemente un mejor significado gramatical y ortográfico.

Esta enmienda fue una de las replicadas por mi querido compañero el Senador Alcalá diciendo que esto era normal, porque todos los textos pedagógicos utilizaban esta fórmula. Nosotros pensamos que si la lengua española, a la que todos nos debemos y debemos respetar y aceptar siempre que sea necesario, si la enmienda que proponemos, es decir, la supresión del guión por la palabra «proporción» es más correcta, por mucho que los textos pedagógicos lo digan, nosotros no nos debemos a esos textos pedagógicos, que pueden ser muy respetables, sino que pensamos que nos debemos más a una pureza de nuestro lenguaje y a una mejor utilización de las palabras de nuestro vocabulario. De nuestras enmiendas quizá tendrán que aprender algunos pedagogos, o puede que nosotros estemos equivocados, pero nos hubiera gustado que nos lo hubieran demostrado.

Pasamos a la siguiente enmienda, que es la número 1.493, al artículo 15 del texto del proyecto, en la que se utiliza la palabra «materias», que nuestra enmienda pre-

tende sustituir por la palabra «asignaturas», entrañable palabra para nosotros, añadiendo que pueden ser, además de las optativas, las complementarias. En principio, desde el punto de vista semántico —a él nos referimos y continuaremos refiriéndonos muchas veces—, no consideramos adecuado el uso de la palabra «materias», por cuanto el significado correcto de esta palabra es «sustancia de que están formados los cuerpos físicos». Por consiguiente, sería absurdo que los centros educativos pudieran establecer materias o sustancias, cuando es perfectamente correcta la utilización del vocablo «asignaturas», que se refiere a cada uno de los tratados que se enseñan en un establecimiento docente o educativo.

Consideramos evidente la conveniencia de sustituir la palabra «materia» —materia ya hemos dicho lo que es— por «asignatura», en aras a conseguir un léxico mucho más apropiado, que nos abstenemos ya de hacer más justificaciones. Creemos que está muy clara esta enmienda como para cansarles con más argumentos.

Añadimos en ella —ya lo hemos dicho— que la autonomía de los centros no debe limitarse, como se hace en el proyecto, a las asignaturas, o, como mal dice el proyecto, a materias optativas, sino también a las complementarias; de no ser así esta autonomía...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Ha terminado su tiempo.

El señor ESCUIN MONFORT: Señor Presidente, acabo, como siempre, con puntos suspensivos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene la palabra el señor Fernández Fernández-Madrid.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, de nuevo —y ahora para defender las enmiendas por mí suscritas— comparezco ante ustedes.

Mi primera enmienda, la número 418, atañe al artículo 9.º de esta Ley. El artículo 9.º habla de los centros docentes —es el que abre como un pórtico ilustrado todo el capítulo dedicado a éstos— a excepción de los universitarios, etcétera. Nosotros hemos propuesto en esta enmienda que no se limite a decir «los centros docentes», sino que diga «los centros educativos».

Ya antes lo dijimos, antes que este Senador lo han dicho muchos, y todos, ellos y nosotros, hemos coincidido en entender que de esta manera el decir «todos los centros educativos» es más idóneo, es más lógico al hilo del contenido, de la sustancia y de la dirección social de esta Ley. El término «educativos» es mucho más amplio, es mucho más importante, a nuestro juicio, en esta adecuación a la Ley que la palabra «docentes». Docente viene de ciencia; la ciencia se imparte; la ciencia es un estadio superior; en cambio nuestra futura Ley Orgánica del Derecho a la Educación está dirigida no a la docencia como ciencia, no a la docencia importante, no a los grandes estadios ni a los grandes niveles de la investigación, sino simplemente a algo inicial, no menos importante,

pero sí más primario, que es la educación. Por eso hemos pensado que quizá resultara más apropiado en este intento que hacemos tan tenso, tan delicado, que hemos manifestado a lo largo de tantos cientos o miles de enmiendas, y hemos creído que de esta manera este vocablo, este concepto «educativos» era más adecuado, más idóneo y más atinente que la palabra «docentes».

Además —como decía al principio— de que queremos que luzca la palabra o el concepto «educativos» en lugar de «docentes», me reitero en lo que empecé diciendo de que queremos que el enunciado del precepto se abra con el vocablo «todos». «Todos» es algo más absoluto; es algo que lógicamente evita fugas en una concepción que mucho nos tememos que tenga más de una.

La enmienda 918 se refiere al artículo 10.1. Va un poquitín al hilo, es pareja, es prima carnal, es hermana de la anterior. Las mismas razones que hemos expuesto para no poner «docentes» antes y poner «educativos» nos valen ahora para decir «centros de enseñanza» en lugar de «centros docentes», porque ya la Ley va profundizando, va dirigiendo sus vectores hacia un algo didáctico que va recorriendo todo el camino de la educación.

Decíamos en la enmienda anterior que si la Ley excluye el ámbito universitario y el propio artículo 11, al que nos estamos refiriendo, ya dice que los universitarios quedan aparte, está claro que el espíritu, el contenido y el ámbito de la Ley es concretamente éste. Por eso deseamos incorporar el calificador «enseñanza» en lugar del término más elevado, más conceptual, más superior, que es el término «docentes». Docencia es Universidad, Universidad es magisterio, que es alta ciencia; enseñanza es algo primario, es algo elemental, es escuela, es formación.

La enmienda 738 la damos por defendida porque por su propia sencillez, por su propia elementalidad, no queremos gastar mucho tiempo en ella, haciendo gracia a SS. SS. del importante tiempo que todos tenemos que consumir aquí. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*)

En lo que atañe a la enmienda 1.741, volvemos otra vez al «ritornello» anterior. Nos interesa, señorías, que siempre se diga «todos». No nos basta que sean las palabras retorcidas que alguien quiere buscar; queremos propender a la sencillez, queremos que siempre digamos «todos» y evitemos lagunas; las lagunas —y esta Cámara tiene bastante sentido y concepto de ello— crean muchos problemas, obligan a tomar decisiones. Yo siempre he dicho que tiene que pasar con las lagunas como sucede con la naturaleza. Hay quien por evitar una laguna intenta disecarla, y yo creo que para evitar una laguna lo que hay que hacer simplemente es tender un puente. Creo que si decimos que «los centros docentes deben reunirse» estamos mucho más cerca de lo que queremos decir, de lo que decimos y de lo que sentimos.

La enmienda 1.452, al artículo 15 del proyecto, nos lleva a un terreno en el que el aspecto espiritual prima un poco más sobre lo que decíamos. En el artículo 15 del proyecto se dice «los centros tendrán autonomía para». Eso de «tendrán autonomía» me sigue sonando un poco a gregario. A nosotros nos gustaría mucho más que diga

que «los centros gozarán de autonomía para». Creemos que gozar es un término más elevado, más jurídico, tiene más prerrogativa. El gozo de una cosa es un disfrute serio, conceptual, profundo, espiritual; lo de tener es algo más gregario. (*Rumores.*)

Señor Presidente, ¿podría rogar a SS. SS. que mantuvieran un poco de silencio? Ya sé que no es importante lo que digo, pero es lo que digo.

El señor PRESIDENTE: Es que hay momentos, señor Senador, en los que el Presidente se siente hasta incapaz de pedir la atención de la Cámara.

Señores Senadores, un poco de atención.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Quiero decir, dentro de esta diferenciación de verbos y en esta noble sala donde tantos rectos y claros varones han hablado mucho del verbo y del verso, que, de verbo a verbo, nos parece que gozar es más elevado. Se goza de un ideal, se goza de un bien espiritual, se goza de una mañana, de un amanecer, de un cuadro, de otras cosas; en cambio, se tienen anginas, se tiene dinero o se tiene cansancio. Creemos que lo de gozar ennoblece y es un título mucho más profundo, mucho más serio, más cabal y más castellano que lo de tener, que como digo más bien responde a tienda de ultramarinos.

En la enmienda 704, al artículo 17, estamos otra vez en el mismo tema. Donde dice «de centros públicos», queremos decir «de los centros docentes públicos». No voy a gastar ni un minuto más en recortar cuántos queridos compañeros míos, rectos y claros Senadores, también han insistido más de una vez en que no nos vale lo de centro. Se han puesto muchos ejemplos, unos muy serios, profundos, incluso otros con humor, de a dónde nos podía llevar simplemente lo de centro. Queremos decir «centros docentes públicos».

Creo que esto de los centros docentes es algo así como la vieja literatura de los periodistas antiguos. Hoy los periódicos suelen escribir de otras cosas distintas, pero en aquellos tiempos, en el lenguaje de los ecos de sociedad, cuando se refería una boda, siempre decía el cronista de turno que la novia realizaba su natural belleza con un precioso vestido de tisú. Eso es lo que nos pasa aquí; queremos que esta Ley tenga un poco de tisú, que la natural belleza de la Ley sea adornada, sea alegrada, sea mejorada con una perfección, que no basta la belleza de la contrayente, sino que, además, el vestido sea bonito porque realza su natural belleza.

Estamos en la enmienda 387. Señor Presidente, como esta enmienda es importante, yo rogaría que pidiera a los señores Senadores que me pudieran atender, porque creo que les puedo ilustrar un poco en este tema.

El señor PRESIDENTE: Supongo que los señores quedarán prendados de los razonamientos de S. S. y así lo atenderán.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: ¡Ojalá! Dios le oiga, señor Presidente.

Estamos en una enmienda que —fíjense qué importante— es la 387; y propone que donde dice «todos los», se diga sincera, deliberada, honestamente, en vez de «todos los», «la totalidad de». (*Aplausos.*) Ruego al señor Presidente que en mi nombre agradezca los aplausos afectuosos que se me dan.

El señor PRESIDENTE: En nombre del señor Fernández-Piñar, que ha prendado a la Cámara...

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Señor Fernández Fernández-Madrid.

El señor PRESIDENTE: Pido excusas a entrambos.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Aún no estoy en esos bancos, aunque lo acabaré estando algún día.

Si esta enmienda a mí no se me admite, no se me admitió en Comisión, y ya me costó un gran trauma que esto ocurriera...

El señor PRESIDENTE: Es que S. S. no había estado tan brillante como esta tarde. (*Aplausos. Rumores.*)

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Pues aún no he terminado, señor Presidente. (*Aplausos.*)

Yo, entregándome y ofreciéndome a la consideración de tan ilustres y queridos compañeros, digo: ¿cómo a mí no se me admite la enmienda 387, donde en lugar de «todos los» digo «la totalidad de», cuando al Grupo Parlamentario Socialista se le ha admitido para este mismo artículo la enmienda 4.329 al artículo 18, que dice: la Ponencia acordó por mayoría aceptar la enmienda número 4.329, del Grupo Parlamentario Socialista, formulada con respecto al artículo 18 del precepto, en la cual se propone sustituir la expresión «neutralidad ideológica» por «garantía de neutralidad ideológica», que me da exactamente lo mismo? ¿Por qué una cosa y no la otra? ¿Qué hay de diferencia en que yo diga «la totalidad de» por «todos los»? ¿Por qué me va a decir alguien a mí que es mejor lo que se dice que no lo que propongo?

La enmienda siguiente —y no digo más— es la 114 al artículo 19. Ahí, en vez de decir «en concordancia», horrible vocablo, nosotros decimos «de acuerdo». Yo comprendo que tengo un defecto personal, pues aquí no entra el Grupo, ni siquiera el Senador, entra el ser humano; a mí el gerundio me ha molestado siempre —teniendo, esperando, coincidiendo, creyendo—. Me horroriza y mucho más me molesta —dijéramos— la versión del gerundio, que es la concordancia; me suena a redundancia, me suena a cosas peores. Como no me gusta el gerundio ni me gusta esto, y ya es por una pura perfección, por un retoque, por un maquillaje que queremos respetuosamente hacer a la Ley para hacerla más bonita, si nos dejan el señor Ministro y el Grupo Socialista, pensamos que era mejor así.

Ya el Senador Llorens, que es un hombre listo y culto, nos decía —y yo lo recordaba también antes— que en los

albores parlamentarios ya hubo una Comisión de estilo. Ojalá la hubiera también ahora.

La enmienda 470 —yo comprendo que tengo mucha densidad de temas y no sé si voy llegar al tiempo— dice lo mismo. Se dice en el artículo 20 del proyecto: «Una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos territoriales», etcétera, y nosotros casi decimos lo mismo, pero mejor. Nosotros empezamos diciendo: «Una programación de zonas de». Me dirán ustedes: ¡Importante enmienda! Pero es exactamente igual que la 4.331 el Grupo Parlamentario Socialista propuso en Comisión y ésta se aceptó. La enmienda 4.331 admitida en Ponencia —la Ponencia por eso es Ponencia, porque estudia en profundidad todas las cosas—, dice: acordó por mayoría —no por unanimidad, que estábamos allí nosotros— admitir la enmienda número 4.331, del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se propone, en primer lugar, sustituir el verbo «satisfará» por «garantizará».

La Ley, evidentemente, se ha mejorado. ¡Qué duda cabe que es mucho mejor lo que propuso el Grupo Socialista! Pero, señores, ¿no puede haber un poco de caridad, de comprensión, de equidad, de justicia distributiva o un poco de lo que quieran ustedes? Si nosotros, en vez de decir «una programación adecuada de», decimos «una programación por zonas de», creo —y Dios me libre de ser jactancioso en ello ni de intentar llevarme el gato al agua, que no me lo llevaré, entre otras cosas porque el gato no se deja— que si aquella enmienda prosperó, la mía, por lo menos, podía haberse tenido un poco en cuenta.

La enmienda 1.829, que es al artículo 21.1, es más profunda. Yo comprendo que no todas las mías son profundas, ni para hacer temblar los cimientos de esta vieja casa, donde tanta ciencia, tanta virtud y tantas cosas buenas han sido vistas por sus reales paredes. Dice el proyecto: «tiene libertad para», y nosotros quisiéramos que se dijera «tiene garantizada la libertad para».

En la LODE lo de la libertad está muy escaqueado, como en tantos otros sitios. La libertad es un concepto que todo el mundo maneja; la libertad está al alcance de todas las fortunas dialécticas; pero para nosotros la libertad es algo sagrado. A mí me parece que la libertad, por el respeto que la tengo (en él me he educado), como tantos otros conceptos importantes, creo que pudiéramos decir que es menor de edad. La libertad sola no puede circular; necesita de algo más que de decir simplemente «libertad» e hinchar la boca con ella. La libertad es un concepto tan sagrado que empieza en los albores de los tiempos: la libertad para pecar, la libertad para salvarse, para hacer una cosa u otra. Eso se dice, pero generalmente no se permite que se cumpla.

Quisiera decir que la libertad tiene que ser garantizada; la libertad está sola por las noches en las calles, y todos sabemos que en las calles por la noche hay lo que hay, y no hay demasiada seguridad.

Esto lo hicimos para el Código Civil; el Código Civil está para algo (o el derecho de familia, que uno ya tiene olvidado, no por el ejercicio, que lo sigue ejerciendo con

gran quebranto diario, pero con gran satisfacción espiritual) y habla de todos: de los padres, de los hijos; pero también de los pupilos, y no se olvida de nada. Ojalá pasara lo mismo con esta Ley que con el viejo Código Civil, que ni siquiera ha hecho falta reformarlo; y ahí está, viejecito, con sus inyecciones y sus pequeños remiendos. El pupilaje es una figura perfectamente entendible; nos gustaría mucho que donde se dice «los padres, los alumnos», se dijera «los padres, alumnos o pupilos». No es muy importante, pero creo que sirve también para hacer más profundo el acervo de esta Ley.

Y la enmienda 1.656 tampoco es de las importantes. Soy el primero que lo reconoce, quiero ser humilde en este sentido; no me gustaría que alguien me tachara de pedante; pero donde dice «de los niveles obligatorios», nos gustaría que dijera «de los niveles educativos obligatorios». Ya comprendo que no es el «Quijote», pero es una cosa que puede entenderse. Sobre todo a mí me emociona mucho, porque cuando se habla del artículo 24, que es al que nos referimos (no el Grupo Parlamentario Socialista, que aquí sí que estuvo fino, pero sí la Ponencia, y la Ponencia era solamente socialista, porque eran cinco, y por una serie de razones que no son del caso nos tuvimos que marchar), la Ponencia, por sí y ante sí, porque es legítima...

El señor PRESIDENTE: Tiempo.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: La Ponencia introdujo una enmienda (y me remito a las pruebas testimoniales) en la que sustituyó una «u» por una «y». Bendita sea esa sustitución, y ojalá todas las que tengamos en este mundo sean iguales.

Si alguna enmienda mía se ha quedado en el tintero (que algunas me han quedado), agradeceré al señor Presidente que me las tenga como defendidas, y así me las encuentre para el día —que ojalá llegue pronto— en que empecemos a votar. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ-PINAR Y AFAN DE RIBERA: Yo lamento no tener la profundidad y la gracia del Senador que me ha precedido en esta tribuna, y lamento también que, un poco entre bromas, todo esto se esté deteriorando. Yo recordaba, con algún Senador del Grupo Mixto, que esto se está pareciendo cada vez más a un encierro, en el cual al principio las cosas son muy serias, pero poco a poco se va bromeando sobre ello, y creo que esto no beneficia nada al Senado. Procederé directamente a la defensa de las enmiendas.

Los comunistas hemos planteado al artículo 10, apartado 1, una enmienda que pretende añadir, entre los distintos centros que aquí se definen, centros públicos o privados, una tercera categoría de centros, que serían los centros concertados. Las razones que avalan en nuestra opinión este añadido, esta consideración específica de los centros concertados, son que en realidad no cabe confun-

dir —ni por su Estatuto jurídico, ni incluso por el tratamiento que se les da en esta Ley— a los centros concertados con los centros estrictamente privados. En esta Ley, señores Senadores, se dedica un título completo a los centros concertados. Las características de los centros concertados difieren de una forma sustantiva, tanto en su financiación como en su funcionamiento —Consejo escolar, etcétera—, de los centros estrictamente privados.

Consideramos, por tanto, que sería conveniente que esa distinción se plasmara aquí en el principio del Título I, en el artículo 10, y que se incluyera la expresión: «y concertados», de tal forma que el artículo quedaría: «los centros docentes podrán ser públicos, privados y concertados». Porque, señorías, la diferencia entre unos centros y otros, los criterios distintivos fundamentales, en nuestra opinión, deberían ser no sólo la titularidad, sino también la financiación, y en la medida en que damos un valor fundamental a la financiación, entendemos que la combinación de ambos criterios —titularidad y financiación— conduciría lógicamente a la admisión de esta nueva categoría de centros concertados. Quisiera recordar que en la famosa sentencia del Tribunal Constitucional, a la que tanto se alude en este debate, también hay una clarísima diferenciación entre los centros privados y los centros concertados.

La enmienda número 4.238, formulada al artículo 10.3, está en la misma línea que la anterior, por lo que no me extiendo en ella.

Al artículo 11, apartado 1, hemos presentado una enmienda cuya defensa ligaría con la que hemos formulado al artículo 16, apartado 1; son las enmiendas 4.239 y 4.241, cuyo objeto es incluir en el texto de esta Ley la educación infantil como un nivel educativo, cuya concreción ha sido una aspiración de amplios sectores de la población española, hilando esta defensa con la que hacíamos cuando pretendíamos la gratuidad de la Enseñanza Preescolar, hilándola con la importancia de la educación infantil y preescolar a la hora de combatir la discriminación de las clases sociales más desfavorecidas también desde esta Ley. La inclusión aquí de la educación infantil como un nivel educativo no tendría, obviamente, una consecuencia inmediata, pero sí señala una tendencia, apunta una línea programática que nos parece que sería de lógica aceptación por parte del Partido Socialista, porque entendemos, como digo, que es razonable.

La enmienda 4.240, formulada al artículo 15, pretende que se suprima, al principio del artículo, una frase que nos parece innecesaria y que, además, puede servir de excusa para una serie de reclamaciones sin fundamento. (*Rumores.*) Este artículo dice...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señores Senadores, hay un orador en el uso de la palabra. Gracias.

Continúe, señor Fernández-Piñar.

El señor FERNANDEZ-PINAR Y AFAN DE RIBERA: Gracias, señor Presidente.

El artículo 15 empieza diciendo: «En la medida en que no constituya discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa», y luego añade lo de que «los centros tendrán autonomía para establecer materias optativas», etcétera. Esa primera frase introductoria es la que pretendemos que se suprima.

El recoger aquí el principio de la no discriminación nos parece gratuito. Es un principio constitucional y en modo alguno necesita de su inclusión. Sin embargo, el que figure esa introducción puede, como digo, servir de excusa para una serie de reclamaciones sin fundamento y nos parece que estaría mejor el artículo sin esa frase inicial.

La enmienda 4.270 pretende la adición de un artículo nuevo 17 bis. Este artículo diría lo siguiente: «La financiación de los centros públicos se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, de las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo escolar del Estado y homólogo correspondiente, teniendo en cuenta los requisitos a que se refiere el artículo 14, para una enseñanza en progresivas condiciones de calidad».

Nuestra intención al plantear esta enmienda es que se recogiera en el texto de la Ley un criterio programático de prioridad a la escuela pública. Entendemos que el fijar en esta Ley unos criterios de calidad educativa en relación con la financiación de los centros públicos, de alguna manera recoge lo que los socialistas y comunistas durante mucho tiempo hemos venido manteniendo: esa necesaria prioridad a la escuela pública, que es la única que puede, hoy por hoy, en España, superar las discriminaciones que en el tema educativo padecen las clases más desfavorecidas de nuestra población.

Por eso creemos que este artículo sería útil y coherente con la filosofía socialista y comunista.

La enmienda 4.271, al artículo 21.1, pretende que se supriman las palabras «y dirección». Me explicaré: este artículo dice que «Toda persona física o jurídica de carácter privado y de nacionalidad española tiene libertad para la creación y dirección de centros docentes privados». Entendemos que esa libertad debe remitirse exclusivamente a la de creación de centros docentes, porque dirigir un centro docente debería, en nuestra opinión, requerir de alguna cualificación, al menos académica y que no cualquiera puede, simplemente por crear un centro, tener la capacidad, las condiciones, los conocimientos para no sólo crearlo, sino dirigirlo. Por eso nosotros pretendemos que se suprimieran las palabras «y dirección». Hay que añadir que en la Constitución, en el artículo 27.6, en modo alguno se recoge esa capacidad de dirección. Se recoge, eso sí, la libertad de creación de centros docentes, pero no lo que aquí se incluye; se añade más allá de lo que dice la Constitución: la capacidad de dirección de esos centros docentes.

A este mismo artículo 21.2 presentamos una enmienda que pretende suprimir, cuando se habla de la incompatibilidad para ser titular de centros privados, en el apartado a), que dice: «Las personas que presten servicios en la Administración educativa estatal, autonómica o local.»;

que se suprima, repito, la palabra «educativa», para que la incompatibilidad también se extienda a toda la Administración estatal, autonómica o local.

Entendemos que esa incompatibilidad es precisa en general para todos los funcionarios; pero es que hay algún caso que, por su relación directa con la creación de un centro docente, como pueden ser los funcionarios de Obras Públicas, Hacienda, etcétera, parece evidente la necesidad de que esa incompatibilidad no quede reducida sólo a los funcionarios de la Administración educativa. Por eso pretendemos que, al suprimir educativa, se amplie esa incompatibilidad para ser titular de centros privados.

La enmienda 4.273 lo es al artículo 22.1. Es una enmienda en la que nosotros pretendemos que sólo los centros privados no concertados podrán establecer el carácter propio de los mismos.

Entendemos, con algunos destacados dirigentes socialistas, que el que quiera una educación confesional en el sentido que sea, religioso o de otro tipo, que la pague; que con los Fondos públicos no debemos financiar el adoctrinamiento, lo que, al fin y al cabo, no es más que el interés de un grupo mayor o menor de la población, pero en modo alguno un interés general. Como sobre este tema ya intervine en otra ocasión, no me extiendo ahora en él.

Al artículo 24.3 pretendemos que se adicione, cuando dice: «El Gobierno determinará reglamentariamente las condiciones mínimas en que se deban impartir las enseñanzas en los citados centros docentes para su clasificación, así como los efectos derivados de la misma», la expresión «Comunidades Autónomas competentes», y

quedaría: «El Gobierno y las Comunidades Autónomas competentes determinarán reglamentariamente las condiciones mínimas en que se deban impartir las enseñanzas...», etcétera.

Nos parece que, de no ser así, se estaría, de alguna manera, violentando algunos Estatutos de Autonomía y una concepción autonómica en el tema educativo, que nos parece correcta y que aquí se infringe o no se reconoce satisfactoriamente.

Y, finalizando, al artículo 26.1, donde se dice: «Los centros privados no concertados podrán establecer en sus respectivos reglamentos de régimen interior a los órganos a través de los cuales se canalice la participación de la comunidad educativa», nosotros pretendemos una sustitución, ahora sí gramatical, pero que nos parece tiene contenido de fondo, y es que cuando dice «podrán establecer», se diga «establecerán», intentando con ello que no pueda haber centros privados no concertados que no tengan esos canales de participación, dando un carácter imperativo a la expresión, de tal forma que se consiga una homogeneización y que todos los centros docentes no concertados, sean cuales sean, tengan que tener esos canales de participación de las Comunidades Autónomas.

Estas son nuestras enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández-Piñar.

Se levanta la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

Imprime RIVADENEYRA, S. A.-MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 38

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.566 - 1961